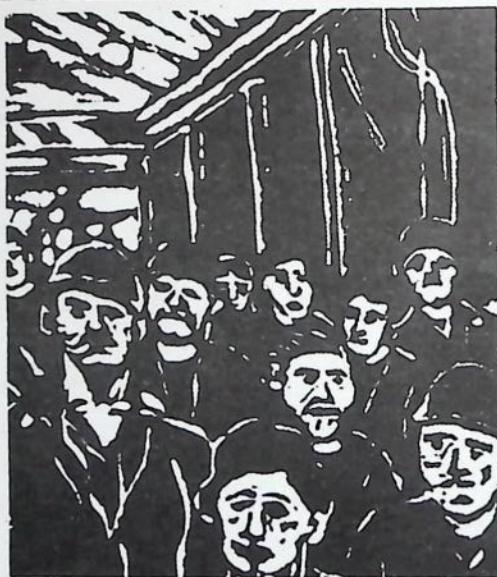


CUADERNOS

DE ORIENTACION SOCIALISTA



7

junio 1981



LOS PROYECTOS DE CLASE

la estrategia de la
dictadura militar

 TALLERES 'EDUARDO CHARME'

CUADERNOS
DE ORIENTACION SOCIALISTA



REVISTA BIMESTRAL EDITADA
BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA
SECRETARIA IDEOLOGICA DEL
SECRETARIADO EXTERIOR DEL
PARTIDO SOCIALISTA DE CHILE

COLABORACIONES - CANJE - SUSCRIPCIONES

E. CORBALAN
PF 2904
D-1000 BERLIN W. 30
PRECIO DEL EJEMPLAR U\$ 1.50



TALLERES "EDUARDO CHAVEZ"

SUMARIO

junio 1981

Nº7

pág.

3

EDITORIAL

REALIDAD NACIONAL

7

CAMINO POLITICO, TRANSICION
Y REVOLUCION DEMOCRATICA:
LOS PROYECTOS DE CLASE
Manuel Linares

39

LA ESTRATEGIA DE LA DICTADURA MILITAR
Robinson Pérez

53

FUERZAS ARMADAS Y VIOLENCIA;
LAS FASES DE LA REPRESION EN CHILE
Patricio Quiroga

INTERNACIONAL

73

LA AMENAZA MILITARISTA
DEL NEOCONSERVANTISMO DE REAGAN
Alex Schubert

95

CARTAS

* LOS ARTICULOS SE PUEDEN REPRODUCIR INDICANDO LA FUENTE

EDITORIAL

Unidad y lucha en el movimiento sindical

El Primero de Mayo fue un día en que en lo esencial triunfó la consigna y la aspiración a la unidad sindical. En esa jornada quedó reflejada, en el nivel de las directivas sindicales, lo que es una profunda aspiración y necesidad de la clase obrera chilena: la unidad clasista y lucha antidictadura militar. Ello debe destacarse porque, por un lado, la unidad de la clase obrera y del movimiento sindical es un objetivo de importancia estratégica en la perspectiva de desestabilizar al régimen y abrir paso a su derrocamiento; y por otro, existen amenazas reales a tal objetivo, que parten desde la propia dictadura y también auspiciadas por sectores de la oposición burguesa con aval imperialista.

Es tarea del movimiento popular avanzar en la construcción de un camino de unidad sindical y de movilización obrera contra la burguesía monopolista y su régimen militar. En este camino debemos plantearnos resolver correctamente el problema de la conducción del movimiento, del liderazgo clasista, de la hegemonía en el seno de la clase obrera.

En la medida que tenga algún éxito el divisionismo sindical, que proliferen tendencias burocráticas de conducción del movimiento obrero, que aumente la ingerencia imperialista en el sindicalismo chileno, que avance la línea de despolitización sindical promovida por la dictadura, que se fortalezcan las capas obreras ligadas

a la burguesía monopolista, en esa medida la clase obrera chilena podrá ser sometida a la burguesía.

En el movimiento sindical chileno se están desarrollando nuevas tendencias de carácter proburgués y proimperialista. Hoy día aparecen en la prensa del régimen -asociados en sociedad- un Martín Bustos, dirigente de los portuarios, junto a Manuel Cruzat y Javier Vial, dueños de los principales clanes financieros del país. Esta capa sindical, estrechamente vinculada a la burguesía financiera y monopolista, deberá ser denunciada como un sector traidor a los intereses de la clase obrera. Nadie podría plantear que sobre la base de estos dirigentes apatronados, se podrá unificar la acción de la clase obrera. Por el contrario, la unidad clasista deberá pasar por la derrota de estas posiciones y tales dirigentes.

Hoy día también el "grupo de los 10" se constituye en una central, bajo la denominación de "Unión Democrática de Trabajadores". En su proclama constitutiva queda claro que buscan legalizarse bajo las condiciones del régimen militar, para lo cual tratan de diferenciarse del sindicalismo clasista representado, progresivamente, por la Coordinadora Nacional Sindical. El "grupo de los 10" intenta así consolidarse como una oposición sindical tolerada y legalizada, lo que en cierta medida expresa la maniobra de acercamiento al régimen que ensayan algunos círculos dirigentes de la DC en la actual coyuntura. Y "los 10" no solamente se constituyen en central rechazando la idea de la unidad sindical sino que lo hacen con el explícito sostén del sindicalismo norteamericano controlado por la AFL-CIO.

Una tendencia sindical con estas características -con ese nivel de relaciones internacionales y una presencia en la base trabajadora mayor que la de los dirigentes prounionistas-, no estuvo presente en la formación de la CUT. La JUNAECH, que dirigían Tucapel Jiménez y Clotario Blest, representaban entonces a los trabajadores asalariados de la administración pública, tanto empleados como obreros. Se podría señalar que tendía a liderizar a la clase obrera desde un punto de vista proburgués, pero de ninguna manera expresaba a fracciones burguesas. Por esa razón la unidad sindical de 1953 en torno a esta tendencia sindical fue más fácil y la lucha por la hegemonía obrera se resolvió posteriormente en la medida que creció la afiliación sindical y la movilización de los trabajadores.

Hoy día no se puede construir la unidad sindical en torno a esta "Unión Democrática de Trabajadores". No sería un camino correcto de la unidad clasista cederle la representación y el liderazgo a esta capa sindical que tiende a reconstruir lazos con sectores de la burguesía chilena y aumentar su dependencia del sindicalismo norteamericano, de una manera absolutamente inusual en la tradición sindical chilena.

na. Una central liderizada por esta tendencia -y la propia clase obrera-, sería impregnada de reformismo y de conciliación con los patrones. La proclama de la UDT no hace sino repetir lo que habían ofrecido con el denominado "Pacto Social", es decir dirigir a los trabajadores conteniendo sus demandas reivindicativas, negando el rol de la lucha de clases, fomentando una "despolitización" para abrir paso a otra politización, de contenido proburgués y burgués. El reformismo y la conciliación de clases es la politización de la clase obrera desde el ángulo de la proburguesía. El reivindicacionismo "moderado", el paralelismo sindical y el apoliticismo son la politización de la clase obrera desde el punto de vista de los intereses de los monopolios chilenos. El logro de la unidad sindical y de la movilización obrera pasan por la derrota de ese apoliticismo, del paralelismo, de la conciliación de clases y del reivindicacionismo "mesurado".

Hoy día ese sindicalismo clasista está en desarrollo en la Coordinadora Nacional Sindical. Esta organización es la que hoy representa con mayor autenticidad los intereses de la clase obrera chilena. La línea de la unidad sindical y de la movilización obrera pasa hoy día por el fortalecimiento de esta agrupación, mejorando su funcionamiento, dándole fuerza a su perfil clasista y aumentando su capacidad de liderazgo del conjunto de los trabajadores.

En la CNS están presentes -en germen-, las mismas tendencias que dieron vida a la Central Unica de Trabajadores. Su contenido plural, que es expresión de diferentes capas trabajadoras, hace que en su interior se desarrolle una línea de unidad y de lucha. Los socialistas hemos impulsado en el evento de diciembre pasado una propuesta para fortalecer el carácter democrático de la CNS, aumentando su representatividad y su capacidad de liderazgo laboral. Es una tarea que debemos emprender desde adentro, pues nada justifica el impulsar alternativas sindicales opuestas a la CNS.

En un período de desatada ofensiva de la dictadura militar y los monopolios, orientada a desarrollar una clase obrera reformista y desarticulada, en una coyuntura donde se activan tendencias sindicales proburguesas y proimperialistas, constituye un error manifiesto insistir en alternativas sindicales que debiliten la perspectiva de desarrollo de la CNS. La lucha antiburocrática debe desarrollarse dentro de esta agrupación y no tomar como pretexto esta bandera -siempre justa- para generar otra variedad de paralelismo y divisionismo sindical de tinte "basista".

La CNS deberá vincularse más directamente a los conflictos de base, aumentar su grado de representatividad y su capacidad de liderazgo social. En esa línea luchamos y seguiremos insistiendo en su seno, buscando eliminar las tendencias burocráticas, el accionar de cúpula con una visión le-

jana del conflicto y la lucha de clases. Así podrá desarrollar su hegemonía en la clase obrera, a través de la conducción real del movimiento en la acción y no de declaraciones reiterativas.

El fortalecimiento de la CNS pasa igualmente por afrontar las formas de despolitización que se manifiestan en su seno, pues la política burguesa permea las filas de la clase obrera desde diferentes ángulos. Uno de ellos se expresa en la idea de antagonizar partido y sindicato, haciendo la apología de la "autonomía" del aparato sindical y criticando sistemáticamente a la directiva política, levantando en fin esa falsa división entre "políticos" y "sindicales". Esta tendencia supuestamente autonómica, que conlleva formas de despolitización de los trabajadores, sólo contribuye a debilitar a la misma central y la lucha general de la clase obrera.

El fortalecimiento de la CNS como instancia básica de la unidad sindical y clasista se logrará ante todo mediante su inserción en la lucha de clases, y no reduciendo su actividad a estar presente en eventos internacionales o emitiendo declaraciones formales. No podrá desarrollarse a la manera en que quiere hacerlo la UDT, jurando respetar la legalidad de la dictadura y proclamando el abandono de la lucha de clases.

Debe tener como meta la huelga general de la clase obrera contra el Plan Laboral. En esa movilización se legitimará como instancia representativa y conductora, aislará al sindicalismo amarillo y apatronado, desenmascarará a los dirigentes conciliadores y asumirá la hegemonía en la práctica y no en el terreno declamatorio. La huelga de los trabajadores del cobre evidencia que existen síntomas positivos en esta perspectiva.

La línea de acción seguida por los sindicatos de Sewell y Caletones es un buen ejemplo de una conducta clasista de liderazgo en la lucha, denunciando y desenmascarando las maniobras de los dirigentes amarillos.



El presente artículo fue publicado en el N° 88 (1980) de la revista ARAUCO, Órgano teórico del Partido Socialista de Chile que se edita en el interior del país.



CAMINO POLITICO, TRANSICION Y REVOLUCION DEMOCRATICA:

los proyectos de clase

MANUEL LINARES

La particularidad que ha marcado la coyuntura política desde mediados de 1979 y el primer trimestre de 1980 fue la discusión que han llevado las clases dominantes respecto a la forma de dominación estatal más adecuada.

Esta situación es producto directo de la tendencia a la repolarización social que definiera a la coyuntura inmediatamente anterior y que culminara con el discurso de E. Frei en agosto del año pasado. Como sabemos, el bloque reaccionario que posibilitó la victoria de la contrarrevolución en 1973, era un heterogéneo conglomerado de clases y fracciones de clase, entre las que se contaban desde el capital financiero y el capital industrial, sectores importantes de las clases medias (pequeños propietarios, empleados,

profesionales) hasta parte de la "aristocracia obrera" (por ejemplo obreros de El Teniente) tanto como sectores atrasados del proletariado agrario (recordemos a las Confederaciones "Provincias Agrarias Unidas" y "Libertad"). De la sola mención de las fuerzas involucradas en la oposición al Gobierno de la UP es fácil concluir que esta alineación la hizo posible una errada conducción (de cuyos complejos factores no cabe hablar aquí) del proceso revolucionario en marcha por aquel entonces, pues socios tan dispares, de tan distintos intereses objetivos y, en la mayoría de los casos antagónicos intereses, no podían ser fruto sino de la ofuscación inevitable a la que llega la lucha de clases cuando es el sistema de explotación mismo el que está en juego. Y si a los odios desatados por la convulsión social le agregamos indecisiones, errores y divisiones entre las fuerzas que tienen por misión superar el antiguo orden, ya poseemos la clave para explicarnos una ordenación tan peculiar como inestable de fuerzas sociales y que aparentemente surge por la actividad demagógica y hábilmente desesperada de los políticos burgueses que prometían "justicia y libertad" a quienes se alineaban bajo sus banderas democráticas...

Poco trecho se había recorrido, cuando hacia los años 74-75 quedó claramente establecida la dirección indiscutida de este bloque reaccionario en el poder en manos del capital financiero (más conocido como "grupo económico"). Si la coyuntura anterior, entre 1973-1974, puede ser definida como la hegemonía difusa o indecisa de este sector respecto de los restantes, los años siguientes son los de la conquista definitiva del poder por ellos. Pocas veces en la historia de nuestro país, un grupo político tuvo la oportunidad de construir su alternativa histórica tan libre de cortapisas como durante el período 1975-1977. Pero la tragedia de Chile ha sido, precisamente, concederle esa oportunidad a una clase en decadencia, incapaz de levantar una nueva época de estabilidad estatal con libertad política y progreso económico y consenso democrático. Toda esa coyuntura es profundamente contradictoria, pues mientras por un lado, el capital financiero logra una victoria aplastante en la imposición de su política de desarrollo económico (no confundir con victoria en la economía, sino sólo una victoria en la política para llevar a cabo su política económica), por otro, este mismo hecho va condicionando la derrota política que de fine a la coyuntura como de crisis de hegemonía, o sea, una incapacidad casi total para avanzar en la construcción de un Estado burgués de consenso. Esta "incapacidad para la democracia" que aqueja a la burguesía financiera va a ser públicamente reconocida por Pinochet en Chacarillas, a mediados del año 77, donde este sector social intenta superar su crisis de incapacidad hegemónica alargando y justificando su dictadura de hecho a través del compromiso de palabra de encaminarse hacia una "democracia protegida". Por una parte, en este lapso los sectores populares que aún mantenían cier-

to grado de identidad con la dictadura militar comienzan a salirse de la esfera de influencia de ésta, manifestándose el hecho en las discusiones de la DC, cuyas grandes alternativas -Zaldívar y Tomás Reyes- eran dos modalidades de oposición al régimen.

Entre 1977 y mediados de 1979 comienza a verificarse una lenta repolarización social (social y no claramente política aún, pues diversos factores entre los que se cuenta la limitación de la escena política que implica la existencia de la dictadura, el trauma del período 70-73 que afecta tanto a las clases medias como a los proletarios y que se caracteriza por una profunda desconfianza mutua, la crisis de la izquierda y la dirección burguesa o reaccionaria de los sectores medios) que ya ha terminado casi por completo su ciclo, pues son escasísimos los sectores que aún mantienen algún tipo o grado de neutralidad ante la dictadura, pasando a una posición objetiva pero evidentemente limitada a sus respectivos asuntos particulares, sin que una conciencia propiamente política, es decir, general, germine efectivamente todavía. La idea del derrocamiento no es, aún, una idea realmente popular, pero tampoco lo es ya la existencia de la dictadura. Hemos entrado en los primeros terrenos de una nueva coyuntura con la discusión "constitucional" (que no es otra cosa que una discusión acerca del Estado más idóneo para cada cual, o sea, para cada clase), pues con ella se está iniciando el proceso de toma de conciencia política de las fuerzas polarizadas de un nuevo modo, desde el año pasado.

La repolarización social es, en el fondo, una suerte de crisis potencial. Con la discusión actual iniciamos la transición a una nueva coyuntura que bien puede acercar la crisis abierta, al coincidir polarización social con polarización política. Sin embargo, para que esta coincidencia pueda darse existe un requisito esencial, cual es que en la discusión abierta tercie la voz de los trabajadores, nítida y potente, pues de otro modo la polarización tomará un marcado tinte pequeñoburgués, condenándonos a la frustración. El camino hacia la polarización política efectiva sólo puede llegar a ser posible si sostenemos, en la teoría y, por sobre todo en la práctica, sin vacilación, un proyecto democrático de los trabajadores.

En todo caso, esto que es una necesidad general ha cobrado particular urgencia cuando se ha abierto, a modo preliminar, una nueva coyuntura que lleva a un nuevo nivel el antagonismo latente de la antecedente. De la explicación que entreguemos a las masas del proyecto de los trabajadores para derrocar a la dictadura, y de la refutación a las otras alternativas depende en gran medida el adecuado aprovechamiento de los acontecimientos actuales. Por esto hemos tomado los trabajos más representativos de los distin-

tos sectores sociales para someterlos a una crítica, desde nuestro punto de vista clasista, deseando revelar sus limitaciones históricas e inconsecuencias.

I. "EL CAMINO POLITICO" DEL CAPITAL FINANCIERO

El artículo "El camino político" de J. Guzmán, aparecido en "Realidad" N° 7 de diciembre de 1979, resume eficazmente el pensamiento del capital financiero. La tesis principal contiene las siguientes afirmaciones:

- El objetivo es construir una democracia porque no es posible tener una dominación estable con formas dictatoriales de gobierno en una "sociedad de masas", es decir, en una sociedad capitalista en que se ha monopolizado la economía por el capital financiero y se ha proletariado a la inmensa mayoría de la población, y ésta se ha organizado políticamente en el grado.
- Para tener efectiva base en el estado democrático burgués es necesario que las masas se sientan incorporadas al sistema político en forma tal que lo puedan defender. Condición de ello: "alcanzar un nivel generalizado de desarrollo cultural y estable (...) Alcanzar esa meta es condición previa para que en nuestra Patria pueda implantarse nuevamente el régimen democrático de gobierno. Lo contrario implicaría colocar al país en el mismo volcán cuya erupción hasta ahora sufrimos en sus efectos".
- Como no existen las bases reales de una democracia, quedando esta forma de gobierno incapacitada para lograr la creación de esas bases, "no hay otro medio que hacerlo a través de un gobierno militar "predemocrático".

A. LA DICTADURA TENDRA A SER PERMANENTE

Existen varias razones para deducir que la dictadura tenderá a ser la forma de dominación permanente del capital financiero, sobre todo de orden político (como veremos más adelante), pero dado que, según Guzmán, la justificación histórica fundamental para su existencia radica en una cuestión de orden económico, será este argumento el más urgente de analizar.

La pregunta a responder es: ¿puede el capital chileno desarrollarse de un modo tal que permita el acceso de todos los habitantes a los beneficios materiales de esta supuesta expansión? La respuesta podría perfectamente obtenerse de la realidad que se aprecia después de seis años de dictadura, pero es posible que los datos acerca de la creación de un gigantesco y permanente ejército de reserva (cesantes) de fuerza de trabajo, la baja de salarios reales, la proletarianización de sectores importantes de pequeña propiedad urbana, minera y rural, la desaparición de importantes prestaciones sociales gratuitas, etc., no puedan pasar en el futuro, cuando las tasas de crecimiento sean del orden del 10% anual, tal como afirma por estos días un ministro llamado Piñera.

La verdad es que el único camino para desarrollarse dentro del capital consiste en la incorporación de nuestra economía a la internacional, tal y como ha sido siempre, sólo que acentuando el grado, llevándola a su máximo posible, porque sólo de este modo nuestras empresas encontrarán el mercado adecuado para una producción en gran escala. Sin embargo, este tipo de economía "internacionalizada" requiere obligadamente un proceso permanente de concentración y centralización de las fuerzas productivas, para que puedan entrar en condiciones de competir con otros productores en el mundo. Esto significará, lisa y llanamente, la conformación de un mercado elitario de consumo que excluye a las grandes masas, una producción nacional en función de la demanda mercantil en donde no cuentan las necesidades del hombre productor, un movimiento sindical prácticamente amordazado para que no "encarezca" los costos, etc.

En resumen, en el mejor de los casos, pensando en el éxito del modelo de política económica, sólo se logrará crear las premisas que harán imposible la creación de un consenso policlasista, pues el actual desarrollo capitalista es tá fundado sobre la base de la explotación de los pequeños burgueses y del proletariado. Las tendencias evidentes al aislamiento político que muestra la dictadura son la comprobación irrefutable de que esta forma de gobierno tenderá a ser permanente para la clase en el poder.

B. DICTADURA O DEMOCRACIA:

MEDIOS DE UN INTERES DE CLASE PARA LA BURGUESIA

Otro factor que condicionará la tendencia a la permanencia de la dictadura es la diferencia ideológica entre libertad y democracia. En el discurso lógico formal de la burguesía, los conceptos generales que ella gusta de usar, como los citados, le sirven para captar desde su propia perspectiva alienada los fenómenos históricos. Así, la libertad es la realización de las necesidades, por supuesto, en

general, ocultando y ocultándose la evidencia histórica de la existencia de diferentes y antagónicas necesidades de clase, para convertir la propia en la necesidad general. Entonces, mientras la libertad aparece como la realización del "bien común" -sofisma ideológico inexistente que oculta un interés de clase particular-, por el otro lado de la realidad burguesa aparece el político que mide las correlaciones de fuerza y hace política cada día para mantener su dominación. Este doblez -que convierte para todo burgués a la actividad política como algo malsano e hipócrita sin saber que con ello no hace más que juzgarse a sí mismo como clase social- corresponde plenamente a la conformación del universo social capitalista, fraccionado en una realidad económica donde descansa su verdad última y un mundo de formas que se levanta sobre aquellas, expresado en el Estado y la ideología, hablando en general, explicándose que la dictadura real, que la realización de la dominación de clase que se da en la esfera de la explotación sea la esencia de la libertad burguesa, mientras las formas de Estado que se levantan sobre la libertad tengan el carácter de meros instrumentos de la libertad capitalista. La burguesía concibe a la democracia -por supuesto una clase de democracia determinada específicamente por la historia del capital- como un medio para la mantención de las condiciones que le permiten ser una clase explotadora. Por tanto si esta forma de gobierno escapa de sus manos y comienza a realizar otros intereses, entonces para la burguesía la democracia ha dejado de servirle, se ha convertido en "un sistema antilibertario" (Guzmán). Para los capitalistas, la democracia es "un medio" cuya validez está en directa relación con su eficacia para promover "la forma de vida que se anhela" (ídem), se refiere, obviamente, al capitalismo.

Del mismo modo, podemos concluir limpiamente que mientras tanto la dictadura actual -que lo ha hecho ya por más de seis años- "promueva la forma de vida que anhela" la burguesía, será una forma de gobierno libertaria para ella, pues el problema de la libertad no es una cuestión propiamente política para los capitalistas, más exactamente, no es una cuestión de Estado, sino derechamente de orden económico en lo esencial. Y esta no es una simple deducción analítica, pues no tenemos más que leer El Mercurio todos los días para escuchar majaderamente lo anterior.

C. LOS TRABAJADORES DEBEN APRENDER DE GUZMÁN: A LA DEMOCRACIA SE CAMINA POR LA DICTADURA

Aunque la burguesía está acostumbrada a razonar con sus logismos de la lógica formal, ello no le impide para nada dejarla de lado cuando está de por medio su interés de clase. En Chile, al menos, jamás se ha enredado en su propia

e insuficiente lógica teórica, zanjando la distancia entre un discurso obligadamente hipócrita por condicionamientos históricos y las necesidades de la lucha de clases sencillamente por la vía de la acción política. Es sin duda una enseñanza que las masas y sus direcciones tienen que asumir, sobre todo cuando el discurso proletario es franco y directo. La burguesía ha dicho toda la vida que A es A y no puede ser otra cosa que A. El proletariado ha afirmado que A es A y su negación. ¿Pero, en política qué dice y hace la burguesía? Escuchemos a Guzmán: "siendo imposible construir las bases de una democracia estable a través de un camino plenamente democrático, no hay otro medio que hacerlo a través de un gobierno militar "predemocrático". Hablando sin tantos rodeos, el señor Guzmán nos dice que hoy la burguesía financiera debe construir su democracia a través de la dictadura, graciosamente denominada "gobierno militar predemocrático", fórmula que apenas alcanza a ocultar el pudor que sonroja las mejillas de la desnuda y prostituida lógica formal. ¿Así que, entonces, es posible ser esencialmente un demócrata aún debiendo utilizar la violencia contra las fuerzas que se oponen al propio proyecto democrático? Eso lo hemos sostenido siempre los marxistas, a despecho de todas las estupideces y escándalo con que han pretendido ocultar esta verdad a las masas trabajadoras todo un coro de simples mentirosos burgueses, simple canalla de la pluma, tanto como los cándidos pequeños burgueses que siempre que tienen que enfrentar una verdad se anegan la vista con llanto por la humanidad para evitar luchar efectivamente por ella.

¿Cuál es la razón de justicia con que, entonces, defienden a la dictadura y reprimen a quienes luchan contra ella? Sencillamente ninguna. No hay tales valores permanentes que deban defender sino la pura y cruda razón de clase. Ellos no condenan porque los revolucionarios populares lesionen a la libertad o el orden en general, pues ni siquiera hablar de democracia cabe -como lo reconoce la propia burguesía a través de Guzmán- en la actual forma de gobierno, sino sencillamente porque es atacado su interés de clase. La legitimidad de la dictadura actual -como de todo gobierno- nace de la capacidad para imponer determinado proyecto de clase.

D. ¿ES DEMOCRÁTICO -SIQUIERA EN EL SENTIDO BURGUES- EL PROYECTO DEL CAPITAL FINANCIERO?

El camino histórico hacia una pretendida democracia a través de la dictadura ha sido justificado por Guzmán, quizás si para quedar en paz con su conciencia teórica, del siguiente modo: "La legitimidad moral de semejante camino se afianza por una circunstancia capital, cual es la que por su contenido libertario, la nueva institucionalidad es essen-

cialmente reversible, a diferencia de los totalitarismos, cuyo sello distintivo es siempre la aspiración a una irreversibilidad apoyada en la opresión".

Es verdaderamente increíble el grado a que ha llegado nuestra clase dominante en su decadencia, huérfana, por completo, de justificación histórica para subsistir como tal, y debe recurrir a una triste argucia leguleya, carente por completo de verdad. Efectivamente, el llamado "proyecto Ortúzar", en el que también participó Guzmán, no corresponde a la doctrina clásica de la democracia burguesa.



Existe una variada suerte de postulados que van encaminando a limitar el concepto democrático burgués, pero en beneficio a lo esencial, podemos afirmar que hay dos temas matrices con los cuales el proyecto constitucional de la reacción capitalista puede ser catalogado directamente como antidemocrático. En primer lugar, está, sin lugar a dudas, la deformación de la estructura típica de los tres poderes que se contrabalancean y del principio capital de control y responsabilidad ante los electores por parte de los poderes del Estado. Frente a una esmirriada representación popular por lo demás tremendamente menoscabada por una serie de restric-

*La llamada "comisión Ortúzar", designada por la Junta militar, entregó su anteproyecto de Constitución a Pinochet el 18 de octubre de 1978. Es a ese anteproyecto a que hace referencia la crítica de Manuel Linares. El "Consejo de Estado" -también designado por la Junta- modificó levemente, aunque en nada esencial, algunos aspectos del "proyecto Ortúzar". Finalmente la Junta hizo sus propios "aportes", modificando el proyecto del Consejo de Estado en un sentido aún más dictatorialista y militarista, lo que fue sometido a "plebiscito" el 11 de septiembre de 1980, entrando en vigencia el pasado 11 de marzo. (Esta y las notas siguientes son de la redacción de C.O.S.)

ciones respecto de quienes pueden ser representantes- en una parte del Congreso -pues sólo la Cámara de Diputados es elegida por elección directa, en tanto en la de Senadores cerca de un tercio son viejos servidores del Estado designados ademocráticamente-, se levanta un verdadero superpoder en el Consejo de Seguridad Nacional, donde se concentra toda la esencia misma del carácter de clase del Estado de los explotadores, expresándose en la necesaria burocracia irreprensable, administradora del poder efectivo del aparato estatal, la que no responde ante ninguna masa electora sino sólo lo frente a sí misma, como inevitable producto de la existencia de una minoría expropiadora que únicamente puede mantener su poder a través de la exclusión de las masas trabajadoras en todo lo que está en relación al poder efectivo del Estado capitalista. Este Consejo de Seguridad Nacional formado mayoritariamente por la burocracia que no responde siquiera formalmente ante los electores (los tres comandantes en jefe de las FF.AA., el Director General de Carabineros, el jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, más el Presidente de la Corte Suprema y del Banco Central, en total 7 de 9 miembros, los restantes son el presidente del Senado, órgano de elección no democrática, y el Presidente de la República)* tiene dos atribuciones, entre otras, que le entregan, sin ninguna posibilidad del más mínimo control aún formalmente democrático, TODO EL PODER DEL ESTADO:

1º) Puede declarar el Estado de Sitio por 10 días sin consulta a ningún otro órgano del Estado y declarar el Estado de Emergencia durante 90 días, prorrogables, también en las mismas condiciones anteriores.** ¿Y qué significan estas situaciones jurídicas?: pues, nada menos que el control efectivo y arbitrario del poder.

Estado de Sitio implica:

a.- respecto a la libertad personal, su pérdida completa, pues cualquier ciudadano puede ser detenido, relegado o expulsado del país, por mera decisión del gobierno;

b.- respecto de las otras garantías constitucionales adquiridas por nuestra evolución histórica: se suspenden o restringen las libertades de preñ

*La Constitución "plebiscitada" redujo a siete los miembros del Consejo de Seguridad Nacional, eliminando al Jefe del Estado Mayor y al Presidente del Banco Central, con lo que se ratificó la preeminencia absoluta de los militares en dicho Consejo.

**Atribuciones mantenidas en la Constitución "aprobada" el 11/9/80, Art. 40, incisos 2º y 3º.

sa, locomoción, reunión, opinión, asociación, sindicación y se permite la censura de correspondencia y comunicaciones;

c.- en cuanto al control del Poder Judicial: se suspende el recurso de amparo (que protege la libertad individual, por lo que las razones del poder que dan en la impunidad absoluta), el recurso de protección (que cautela las otras garantías individuales), el Poder Judicial no puede calificar las medidas de la autoridad. En definitiva, queda reducido a la nada.

El Estado de Emergencia sólo se diferencia del de Sitio en que el primero no suspende la garantía a la libertad personal, pero que el contexto de la anulación del resto de las garantías constitucionales lo deja prácticamente en el mismo nivel de arbitrariedad que el Estado de Sitio.

En una palabra, el Consejo de Seguridad Nacional es el verdadero poder del Estado, en la visión del "proyecto Ortúzar", donde la violencia institucional logra plena autonomía de los ciudadanos, con lo cual se rompe radicalmente con la concepción liberal clásica de que la soberanía radica en el pueblo, y, por el contrario, se la reconoce a los Estados Mayores, en completa comunión con la teoría estatal antidemocrática de la Seguridad Nacional.

20) Entre las funciones del Consejo de Seguridad Nacional hay una que muestra hasta el asombro el grado de desconianza e incapacidad democrática que aqueja a la clase dominante: es la función que podríamos denominar de Gran Inquisidor. Este Consejo puede "representar a cualquier autoridad establecida por la Constitución, su opinión frente a algún hecho, acto o materia que, a su juicio, puede comprometer la seguridad nacional" (Art. 100 del proyecto). Si pensamos que a través de este Consejo habla el poder reconcentrado del Estado de Seguridad Nacional, el poder disuasivo, es decir, de presión moral que maneja es tan considerable que sin lugar a dudas todo el resto de las instituciones de este Estado van a quedar subordinadas a él.

En segundo lugar, otra idea matriz de este "proyecto Ortúzar" es la exclusión de la actividad pública y legal de "toda persona o grupo" que se atreva a "propagar doctrinas" que propugnen "una concepción de la sociedad, del Estado o del orden jurídico de carácter totalitario o fundada en la lucha de clases", porque ello "es ilícito y contrario al ordenamiento institucional de la República". Estas afirmacio-

*En el Texto definitivo (Art. 95), se intercaló esta "sutileza": "...a su juicio atente gravemente en contra de las bases de la institucionalidad o puede comprometer...".

nes sostenidas en el Art. 80, son falsas y contradictorias de punta a rabo.* Veámoslo. ¿Quién sostiene una "concepción totalitaria" de la sociedad, el Estado o las leyes, si no es aquel que plantea su propia concepción inmodificable, perenne? Pues, entonces, vámonos al Art. 122 de este proyecto Ortúzar y escuchémosle: "NO SE ADMITIRÁ A TRAMITACIÓN UN PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL cuyo objetivo sea legitimar las conductas que el Art. 80 (el que estamos analizando) de esta Constitución declara ilícitas y contrarias al ordenamiento institucional de la República, o aminorar las sanciones establecidas en ella respecto de quienes el Tribunal Constitucional declare responsables de haber incurrido en dichos actos".

¿De qué modo puede expresarse un totalitarismo para ser más radical que con las palabras del Art. 122 del proyecto Ortúzar: "NO SE ADMITIRÁ A TRAMITACIÓN"? Con esto se sostiene que el pueblo, al cual hipócritamente se le reconoce la soberanía en el Art. 50, no tiene derecho a legislar en determinados ámbitos.** La burguesía ha puesto de moda la palabra totalitarismo y los dictadores de hoy la usan para lanzarla sobre la cabeza de la revolución de los trabajadores sólo porque ésta intentó defenderse de la agresión, porque ejerció su derecho elemental a ser. Si el totalitarismo consistiera en el acto de afirmación de las clases, antagonicas, toda clase social que posee un proyecto histórico real sería totalitaria al intentar realizarlo, con lo cual el rasgo dejaría de tener sentido, pues a la burguesía le sabe a totalitarismo la sociedad socialista tanto como a los proletarios la capitalista. Pero nosotros, los revolucionarios, no podríamos ser tan hipócritas de acusar a nuestro enemigo por lo que también haremos, es decir, imponer nuestro proyecto de clase. Como vemos, nada se avanza desde este punto de vista formal, cual es el que usa la burguesía al hablar de totalitarismo. Y, en verdad, en el fondo esta palabra es un arma de ataque ideológico, disfrazado, contra la

*Dicho precepto persecutorio se mantuvo idéntico en el texto que impuso Pinochet (Art. 8 de la "Nueva Constitución").

**Lo dispuesto en el Art. 122 del "proyecto Ortúzar" fue "ablandado" por el Consejo de Estado y finalmente no se incluyó tal cual en la "Constitución de la Libertad". El texto definitivamente impuesto por la Junta establece que cualquier modificación al capítulo I (y a otros), al que pertenece el mencionado Art. 8, deberá contar con "La concurrencia del Presidente de la República y de los dos tercios de los miembros en ejercicio de cada Cámara", y esto durante dos períodos parlamentarios consecutivos, es decir, con la venia de 2 presidentes más dos veces 2 tercios del Senado más 2 veces 2 tercios de los diputados (Art. 118).

postura de clase revolucionaria consecuente, pues es inaceptable para los burgueses que sus esclavos pretendan a la libertad. Y que en el fondo los burgueses son totalitarios, aunque su propio pensamiento no acepte esta condición, queda completamente comprobado cuando contrastamos la afirmación de J. Guzmán en el sentido de que la dictadura era justificable moralmente porque el estado que el capital financiero buscaba construir en Chile era "esencialmente reversible, a diferencia de los totalitarismos", para decirlo con sus palabras.

El negarle la carga de clase que acompaña su actuación política es la forma típica de hacer política de la clase burguesa. Ella siempre actúa por el "bien común" y piensa que jamás cae tan bajo como para defender su interés de clase, ella busca la "unidad nacional", etc. Ahora que en esta benefactora actividad tenga que enfrentar el mal, a los "desconformados cerebrales" del Sr. Encina (refiriéndose a los revolucionarios), a "los que propugnan la lucha de clases", al "enemigo interno", a "los extremistas", etc., etc., ello sólo se debe a la fatalidad eterna de que al bien siempre le acompaña el mal, al cual, por supuesto hay que combatir, en una tragedia social sin fin. Esto, que es una tremenda falsedad, sólo efectiva porque la humanidad ha venido experimentando por varios miles de años la pugna de clases hasta convertirse en un prejuicio profundamente arraigado en la conciencia social, es tan válida como aquella que sostenía la inferioridad social de la mujer.

Pero volvamos a la contradicción de Guzmán. Vimos cómo él afirmaba la reversibilidad de su Estado, cuando hasta sus disposiciones expresas lo muestran como irreversible. A nosotros esto no nos asombra, pues es natural que la clase explotadora pretenda afirmarse, convertir en irreversible su "forma de vida"; lo único que buscamos es dejar claramente al desnudo su contenido clasista, más que nada para que las masas trabajadoras tengan plena claridad de cuáles son los contenidos de la pugna social contra los que luchan, impidiendo que la burguesía los oculte.

No obstante lo anterior, hay una cuestión que -siendo meramente formal- sí es de gran importancia. El proletariado chileno no puede acusar a la burguesía financiera de totalitaria por querer realizar su sociedad capitalista. Ya hemos visto que aquí no radica el problema totalitario. La verdadera raíz del asunto está en si una clase dominante, cualquiera que esta sea, no puede soportar las contradicciones que su propia sociedad genera dentro de los marcos estatales típicos, debiendo recrear una nueva visión de su dominación para hacerla permanente; entonces, esa clase se ha vuelto sobre sí misma, sin poder proyectarse a la historia, al futuro; en una palabra se ha cerrado su ciclo histórico efectivo.

En este mundo de confusiones en que nos movemos, estamos obligados a responder de antemano a quienes saltarán sobre este argumento para intentar devolvernos con ejemplos de revoluciones socialistas tales como la URSS. La cosa es por completo diferente: mientras las sociedades burguesas han mostrado todo su desenvolvimiento histórico, las revoluciones aludidas sólo son el preludio de la nueva sociedad que apenas si logra verse en medio del humo de batallas recientes. Además, sería completamente reaccionario quien atacara a los revolucionarios burgueses del siglo XVIII en Estados Unidos, Francia, etc., por emplear la violencia para luchar por sus ideales contra otra violencia que impedía el paso de la historia. Las nuevas revoluciones, levantadas sobre formaciones sociales capitalistas atrasadas, en la periferia del capitalismo mundial, debieron y deberán -otras que vienen- enfrentar tareas de industrialización y rearmación de sus sistemas productivos, de elevación de los niveles culturales de las grandes masas, de extensión de los beneficios de la sociedad moderna; tareas que por su magnitud, determinan a una mayor tensión social que inevitablemente se refleja en las formas estatales, rigidizándolas, tendiendo a que sea la violencia estatal el método preponderante de solucionar contradicciones sociales.

Pero quedarse en la apariencia, en la mera cuestión de la violencia estatal, sin llegar a comprenderse que tras ella se ocultan contenidos de clase, proyecciones históricas por completo diferentes, es nada más que quedarse en la superficie de los hechos. Mientras el totalitarismo es sinónimo de sistema político cerrado, que descansa en la exclusión de las masas trabajadoras del poder (como en la teoría de la Seguridad Nacional), la violencia de la revolución es el germen de un sistema abierto a la historia, de un sistema todavía poco claro, semioculto entre la sangre y la placenta que aún tiene sobre sí el nuevo mundo, de cuya prueba irrefutable nos habla la confianza de la revolución en las masas a las que organiza y arma para la defensa de la historia. ¿Hay alguna dictadura de Seguridad Nacional que pueda decir lo mismo, en América Latina, por no ir más allá, y que de compararse en el armamento y movilización de todo el pueblo de las magníficas revoluciones de Cuba y Nicaragua? Este hecho macizo es inobjetable, en cuanto a demostrar cuál es la violencia democrática del pueblo trabajador y cuál la violencia mercenaria y burocrática de una clase minoritaria.

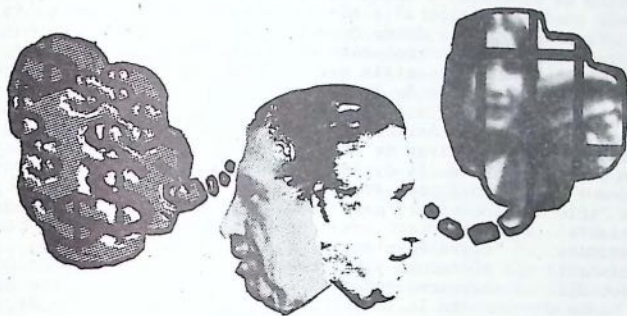
Quedarse con el problema de la violencia en un momento histórico en donde la convulsión es la característica -debido a que estamos en medio de una travesía tempestuosa y violenta- es asimilarse a una misera tabla en la superficie de las olas embravecidas, impedidos para comprender nada. Si imaginariamente una persona pudiera haber sido observador, cómodamente sentado frente a su pantalla de televisión, de los combates de la II Guerra Mundial y horrorizado de tanta

muerte y destrucción escribiera una apología contra la violencia, aquel buen señor no entendería para nada la historia de la humanidad. El mismo valor tiene el llamado de los pacifistas cuyos ojos sólo observan la superficie de la violencia social sin querer ver sus reales raíces, y la justificación que desde un verdadero y posible humanismo tiene la violencia revolucionaria de los trabajadores.

El proyecto Ortúzar es totalitario no porque emplee la violencia institucionalizada en forma desmedida y sin control, como acabamos de ver, sino porque convierte este hecho en forma de Estado permanente, no sólo porque se excluye para siempre a las masas del ejercicio del poder, sino, en verdad, porque niega a las masas siquiera la posibilidad de ejercer su actividad clasista; es decir, porque ha cerrado su sociedad a las contradicciones que ella misma está permanentemente recreando. Ahora, su dominación de clase es un puro voluntarismo, excluyendo ideológicamente a las fuerzas que el propio capitalismo ha creado, haciéndoseles insoportable la realidad. Pero de los "porfiados hechos" nadie puede escapar, ni siquiera aquellos que los niegan. Por ello, a fuerza de tanto negar, y condenar con las penas del infierno a quienes postulan la verdad histórica, científica, de la lucha de clases -como se hace al excluir a quienes sostengan esta concepción, a través del Art. 80-, con esa práctica no hacen más que confirmarla.

¿O acaso se puede interpretar de otro modo la teoría y la práctica de la Seguridad Nacional, donde con el principio de la "guerra interna" se organiza un feroz aparato represivo antipopular? ¿Acaso no se reconoce, en los hechos, la existencia de la más dura lucha de clases, cuando una dictadura impone ley tras ley, ante la declarada oposición de un pueblo desarmado, afirmación ésta que puede ser probada matemáticamente con el ejemplo del Plan Laboral?

Entonces, ¿es o no es democrático el proyecto Ortúzar? Pues no lo es, porque rompe el control popular del poder efectivo del Estado, entregándolo en manos de una institución no democrática: el Consejo de Seguridad Nacional, y porque ha cerrado su sistema político a las contradicciones que la propia dominación burguesa crea -entre explotadores y explotados-, excluyendo, como corolario lógico, a las otras expresiones político-ideológicas a través de las cuales actúan las clases explotadas y oprimidas de la sociedad capitalista. Exactamente, por cada uno de estos rasgos del proyecto Ortúzar, éste puede ser definido como dictatorial y totalitario, respectivamente.



E. DUROS Y BLANDOS: LAS DOS CARAS DEL JANO REACCIONARIO

La coyuntura que recién comienza a cerrarse, con la repolarización de las clases, en que ha sido la acción objetiva de la historia la que ha vuelto a mostrar los verdaderos bloques históricos que se tienen que enfrentar en la próxima fase de la revolución, ha dibujado los rasgos básicos del escenario dentro del que tendrán efecto las futuras batallas sociales. Y este nuevo terreno, semioscurecido, todavía, por las interferencias ideológicas que impiden ver con claridad la profundidad de los antagonismos y las fuerzas de los ejércitos enemigos, ha comenzado a ser intuido al interior de los destacamentos de la dictadura, en forma creciente, hasta llegar a adquirir forma de serias disputas. El índice más claro de que la repolarización de las clases -cierto es que aún a nivel puramente social, es decir, con un grado de contradicción relativamente leve-, está siendo captada y, por lo mismo, comenzando los primeros pasos de una nueva coyuntura (sin que nadie pueda adivinar la velocidad de los próximos), está dado por las expresiones de los representantes ideológicos más caracterizados de los bandos que se han formado con el objeto de enfrentar la nueva coyuntura. Así, J. Guzmán, en diciembre del año pasado: "...la existencia indefinida de todo plazo para un Gobierno conlleva la constante presión sobre su permanencia o su término, lo que a esta altura del proceso chileno perjudica su estabilidad...". Más lacónico, P. Rodríguez sostenía en enero de este año que "se está agotando el régimen de emergencia..." ("Cosas" N° 86, p. 68). Por último, desde la dirección proburguesa de la oposición llegaba el grito alarmado de C. Orrego: "...el tiempo apremia..." ("Reflexiones de Claudio Orrego", en "Hoy" N° 130, 16 al 22 de enero de 1980).

El problema de los plazos, del tiempo cronológico en política ha comenzado a tener nuevamente vigencia, sencillamente porque la "altura" a que ha llegado la dictadura es, exactamente, aquella donde debe replantear su táctica para enfrentar la nueva correlación de fuerzas. Sin desconocer las posibilidades de crisis que pueda emanar de esta diferenciación en el seno de la dictadura, es conveniente relevar la cuestión de que las alternativas en pugna tienen una limitada sustancia táctica, lo que, en otras palabras, significa dos alternativas de mantención de la dictadura. Guzmán plantea mantener la dictadura de hecho, tal como la conocemos y sufrimos, pues su particular visión de la democracia "sólo aparece viable para la segunda mitad de la década entrante" (op. cit.), sin tomar en consideración que, por añadidura, la "nueva democracia" que nos ofrece es lisa y llanamente una dictadura totalitaria, en la que hegemoniza a los débiles arabescos democráticos una obra gruesa que nada tiene que ver con la ideología liberal burguesa: la Seguridad Nacional. Rodríguez sostiene que "la fijación prematura de plazos podría hacernos retroceder todo lo avanzado" (El Mercurio, 13 de abril de 1980). Por tanto, ambos coinciden en que la actual dictadura debe mantenerse: el primero, aventurando cinco años más, el segundo, sin molestarse en fijar plazos.

Duros y blandos coinciden, además, en que la meta del régimen militar es crear un capitalismo desarrollado que sea la base real de una forma estatal con estabilidad, con lo cual su discrepancia con la fijación de plazos se torna completamente irrelevante. El propio Guzmán se acerca a los duros hasta confundirse con ellos cuando afirma: "No se trata pues de abreviar la duración del actual régimen, sino de fortalecer los requisitos para su prolongación estable por el lapso que sus objetivos requieran" (op. cit.). Recordemos, de paso, los objetivos de Guzmán en el sentido de alcanzar "un grado suficientemente alto de desarrollo económico, social y cultural (que) emerge como uno de los factores esenciales de una democracia seria y estable" (op. cit.), en donde las medidas tomadas y anunciadas por la dictadura (modernizaciones) son su materialización. Pues bien, ¿qué nos dice Rodríguez?: "La revolución que se opera en el agro, en la educación, en la justicia, en la salud, en la previsión, en el campo laboral, económico y administrativo, es el presupuesto del orden político constitucional de mañana. (...) Concluida la obra de modernización, cuyo objetivo principal es extender y profundizar la libertad hasta hacerla consustancial al espíritu de los chilenos, la institucionalización de la cúpula será tarea fácil" (op. cit.). Acá, nuevamente duros y blandos se confunden en una sola postura.

Por fin, también tienen plena conciencia en cuanto a la ideología estatal que debe organizar su legitimidad. Ya hemos visto cómo el proyecto Ortúzar entrega el poder real del Estado al Consejo de Seguridad Nacional. Escuchemos enton-

ces a Rodríguez, para oír lo mismo: "...corresponderá a las Fuerzas Armadas un papel protagónico, a través de un Consejo de Seguridad Nacional que cautele la evolución del régimen y resguarde los valores sustanciales de la nacionalidad, que no pueden quedar comprometidos en el devenir político..." (op. cit.). En el fondo, existe plena conciencia en la ideología de la Seguridad Nacional, la que entrega la soberanía a los estados mayores, arrebatándosela a su efectivo depositario: la masa trabajadora.

Toda la discrepancia de duros y blandos queda reducida a la famélica defensa de dos proyectos políticos de Estado, dos ideologías, pero en un contexto de completa subordinación de ambas a una tercera que es plenamente dominante: la Seguridad Nacional. Los duros defienden sus "instrumentos de participación" que reeditan la concepción fascista del Estado corporativo, mientras los blandos se juegan -quizás por melancolía- por la democracia liberal, pero encontrando las dos posturas, irreconciliables en otras circunstancias históricas, un denominador común dominante que las convierte en disputas de palacio, sin verdadera fuerza, que sólo son advertidas en el silencio de la noche pinochetista.

En particular, merece mención la suerte de esta especie de fascismo criollo, que debe llamar a su concepción corporativa: instrumentos de participación, a su teoría política: democracia representativa, y repudiar al "extremismo fascista", que debe aceptar todo el programa del capital financiero sin chistar ni querer acordarse de sus antiguos ataques a esa fracción burguesa; citemos, por ejemplo, lo que afirmaba el mismo Rodríguez sólo hace unos meses atrás en "La Tercera" del 18.6.79, p. 3: "¿En qué se tradujo esta estrategia económica? En dos hechos que favorecen escandalosamente a los intereses dominantes: a) El abaratamiento de la mano de obra, (...) y b) En la más fabulosa acumulación de recursos en manos del capital financiero... En presencia de estos antecedentes, ¿puede alguien pensar que no existe un propósito manifiesto de servir preferentemente a determinados sectores en desmedro de otros con el sutil pretexto de reconstruir la economía nacional?", y que por fin, carente de apoyo de masas debe refugiarse en la autoridad de "Su Excelencia" el dictador. ¿Qué decir de este fascismo ideológicamente inconsecuente, socialmente inexistente y políticamente burocrático (pues su lucha la vive entre los recodos de palacio)? Pues, sencillamente, que al igual que el liberalismo inconsecuente sostenido por los blandos, no son más que sombras de un pasado, instrumentalizadas por una nueva fuerza social e ideológica reaccionaria, antenas con las cuales este nuevo Leviathan pretende reconocer y orientarse en la terreno actual de la coyuntura política.

II. LA TRANSICION: ESCALERA DE EMERGENCIA PARA EL CAPITALISMO

En la revista "Hoy" NO 130 se ha expuesto en forma adecuadamente representativa la postura de la dirección opositora proburguesa de las clases medias, en el artículo ya aludido "Reflexiones de Claudio Orrego", debido a lo cual nos limitaremos básicamente a ese documento.

A. EL ESTADO DE ANIMO DEL CENTRISMO

Antes de entrar a examinar la proposición política del Sr. Orrego es casi indispensable detenerse en algunas de las afirmaciones que él hace respecto de J. Guzmán, porque demuestra cuál es el estado de ánimo de la alternativa que el primero representa.

Parece increíble que Orrego vea en la postura de Guzmán "la primera clara y nítida defensa de la democracia que se escucha desde el oficialismo", pues los conceptos que va a desarrollar más adelante sobre la democracia nada tienen que ver con la postura que sostiene la permanencia de la dictadura por lo menos cinco años más, condicionando a que se cumpla efectivamente las metas que para el capital financiero significue garantías de estabilidad política y, de suplemento, nos ofrece un remedo de la democracia liberal completamente subordinada a la ideología de la Seguridad Nacional, que no es otra cosa que la dictadura "en forma", para usar la expresión de A. Edwards.

Más aún, esa visión de Guzmán como un Quijote democrata que lucha por convencer a otros individuos que marchan junto a él, ávidos de poder, mueve a risa. Con rasgos novelescos, este sería el drama: "Acosado por quienes no quieren desprenderse de un ápice de poder, busca el camino de proponer el desprendimiento, pero en plazos que resulten lo suficientemente largos como para que nadie se sienta empujado". Nadie podría negar que el héroe es generoso.

Pero, ¿es efectiva la valoración que se hace de los "blandos", o, es, sencillamente, lo que se quiere escuchar de ellos? Las tesis del proyecto Ortúzar (de las que participa Guzmán como miembro de la famosa comisión) y las sostenidas por el propio Guzmán en nada permiten sostener que sea un defensor de la democracia. En sus planteamientos, aparece subordinada absolutamente a otra visión ideológica de la soberanía estatal. La explicación a esta contradicción parece provenir más del estado de ánimo que posee el pensamiento pequeño burgués de la vieja dirección de las clases medias, todavía choqueadas por la crisis de los años 70-73. Atemorizadas con su experiencia con el proletariado revolucio-



cionario (que no supo plantear adecuadamente su alianza con un sector que nada tiene que temer con su actividad y que, al contrario, le corresponde ser un aliado estratégico de su común revolución), esa dirección política todavía prefiere "ver" voluntad democrática donde no la hay, entrando en pugna con su postura analítica de la realidad actual. Todo pareciera indicar que la dirección pequeñoburguesa sólo llega hasta el estudio y constatación de los acontecimientos actuales, sin atreverse a sacar las conclusiones.

El centrismo como posición política -que hasta ahora tiene importancia entre las clases medias- puede ser definido como un punto de vista popular, crítico, pero que saca conclusiones burguesas que, al menos, sirven a la clase dominante. Hasta ahora, el centrismo ha tenido mirando a las clases medias hacia la burguesía, subordinada ideológicamente al universo teórico de esta clase. La contradicción que atraviesa el centrismo radica en que, aún rechazando los efectos de la existencia del capitalismo, es incapaz de escapar y romper con él. Veamos dos ejemplos.

C. Orrego exclama: "...¿por qué millones de chilenos vamos a aceptar una sociedad liberal individualista, basada en el lucro, como un dogma de fe, máxime cuando se nos ha impuesto por la fuerza y ha servido para dibujar un escandaloso mapa de la extrema riqueza frente a la extrema pobreza? ¿De dónde puede nacer la legitimidad de un orden social construido sin consenso alguno y contra la voluntad de prácticamente todas las fuerzas organizadas del pueblo chileno? Entonces, surge la pregunta clave: ¿Qué legitimidad puede invocarse para mantener al pueblo chileno en interdicción durante muchos años más, de manera de permitir la consolidación de esta contrarrevolución capitalista y elitaria? La respuesta es: "ninguna" (op. cit.). Junto a este párrafo notable por la valentía del autor y que le da pasos de gigante a su palabra, donde la fuerza de sus palabras parece darle más coraje, esperábamos arribar al consiguiente grito de rebelión contra la tiranía..., pero nos encontramos con que estos rugidos de león se convierten en suaves maullidos lisis. Ante la reimposición violenta del capitalismo, en lo que Orrego llama muy bien una "contrarrevolución", es completamente ridículo afirmar: "Lo que se pide en esta hora es sensatez y moderación" (op. cit.). Estas conclusiones pusieron de la tremenda subordinación del análisis anterior, frustrante.

Más adelante Orrego vuelve a la carga: "...¿está dispuesto el oficialismo a correr el riesgo de un pronunciamiento adverso del electorado y, en consecuencia, a ceder el poder a otra constelación de personas y fuerzas para que presidan la transición?" (op. cit.). El "no", que esta pregunta

ingenua tiene como respuesta, se encontraba claramente en el documento de Guzmán, por lo que es en verdad una pregunta inoficiosa, una pregunta hecha después de la respuesta, y la única explicación a su formulación es la secreta esperanza de escuchar, de algún lado, otra contestación.

B. EL PROYECTO POLITICO CENTRISTA: UNA UTOPIA SIN BASE HISTORICA

El proyecto político centrista, la democracia sobre la base del consenso de todas las clases representadas por las fuerzas moderadas (derecha democrática e izquierda reformista) es una utopía pues no tiene condiciones para desarrollarse en el grado actual de evolución capitalista. En Chile hemos llegado a un punto en que las soluciones tienen un marcado tinte clasista, en donde las ambigüedades sólo portan y alientan la crisis sin darle ninguna salida. En otras palabras, los gobiernos de negociación inter-clases antagónicas, cualquiera sean las mediaciones, no tienen posibilidad ni margen de maniobra. Es tan así que las propias palabras de Orrego han captado esta situación: "En el fondo de la discrepancia, hay un diferente diagnóstico acerca del país y sus habitantes (...) mientras el punto de referencia del oficialismo parece ser los cincuenta grupos económicos y las altas cúpulas militares, la oposición mira hacia el vasto mundo de los gremios, los sindicatos, los partidos, las iglesias, los estudiantes, etc. Y las respuestas son diferentes en cada caso, y los consejos diferentes. Y las aspiraciones antagónicas". (op. cit.)

Cabe preguntarse, entonces, ¿si las aspiraciones son antagónicas cómo justificar su posición de buscar "...un camino gradual y pacífico, por lo mismo que nace del consenso de todos y no de la imposición de algunos?" (op. cit.) ¿Es acaso responsable pretender un cambio "gradual y pacífico" cuando se comprueba a cada paso que el signo de los métodos de gobierno de la dictadura es la violencia, la negativa a la negociación real, en fin, la imposición pura y simple tal cual lo ha sostenido Orrego mismo? ¿Es coherente buscar el "consenso de todos" cuando se reconoce que las aspiraciones de los grupos sociales son antagónicas? Para ser más explícitos, al capital financiero se le hacen insostenibles las medidas que plantea el Sr. Frei en su plataforma, tales como el restablecimiento de las libertades y derechos humanos, los derechos sindicales y la abolición del Plan Laboral, tanto como para los trabajadores es completamente inaceptable que el futuro gobierno democrático se limite a "una política nacional, a través de impuestos, política de inversión y gastos que lleven a restablecer el equilibrio. Por lo menos a disminuir la brecha tan lacerante y a impedir que esa acumulación continúe" de parte de los grupos económicos, como lo plantea el Sr. Zaldívar (citas de Frei y Zaldívar de Hoy Nº 110 y 130 respectivamente).

Lo que se niegan o no pueden entender los centristas es que el capitalismo ha llegado a un momento de su desarrollo, en las condiciones de Chile como país periférico del capitalismo mundial, en que las necesidades de concentración de las fuerzas productivas -y por lo mismo de expropiación de los estadios atrasados de la propia burguesía (a lo que los marxistas llamamos centralización del capital) y de expropiación del trabajo de los asalariados (que nosotros llamamos acumulación)- se hacen imperiosos si este modo de producción desea continuar vinculado al mercado mundial, pues esta última relación es fundamental premisa de su funcionamiento. Por lo mismo, esta política económica de centralización y acumulación acelerada del capital a que ha sido sometida la economía chilena determina que democracia burguesa y capitalismo se tornen incompatibles, claramente en el período de reinserción en el capitalismo internacional y, posteriormente que sobreviva como una forma subordinada dentro de la ideología y Estado de Seguridad Nacional. Para decirlo con toda claridad: capitalismo y democracia son hoy incompatibles en nuestro país, por lo que todo democrata consecuente no puede andarse con rodeos respecto de la supervivencia de este modo de producción. Las ambigüedades sobre este tema condenan a la utopía y a la crisis de cualquier propuesta política. Por esta razón no puede aceptarse que, por ejemplo, el Grupo de los 24 entregue una propuesta donde se busque construir un "régimen verdaderamente democrático, fundado en el mayor consenso posible entre todos los chilenos", pues estas son buenas intenciones, pero sin ninguna base histórica efectiva. La verdad es que en nuestro país no hay condiciones reales para un consenso entre toda la población porque sus "aspiraciones" son "antagónicas", como sostiene Orrego (cita de los 24, Hoy N° 117, separata). La peculiaridad de nuestro país en la actualidad es que este antagonismo no es un mero hecho latente, un factor que existe en las profundidades de la base social sólo detectable por análisis teórico, sino que al contrario, está en la superficie política de la realidad, cuya prueba más irredarable es la dictadura misma.

Continuar afirmando la conciliación entre burguesía financiera y trabajadores -hablamos de la burguesía financieramente porque es ella quien hegemoniza indiscutiblemente el resto de las fracciones burguesas, y de trabajadores para abarcar al proletariado y las clases medias, pues son estos términos sociales los que concretizan la contradicción del capitalismo chileno- corresponde a la actitud de un clasismo pequeñoburgués completamente falto de posibilidad histórica (aunque quizás sí de posibilidad política cuando la burguesía financiera ya no pueda mantener la dictadura en sus propias manos) y que mira servilmente hacia la clase dominante. Esta postura no puede más que intentar levantar una concepción de árbitro de la lucha de clases, donde el Estado como poder del "bien común" maneja el curso de las

contradicciones del capitalismo. Así, entonces, el Estado, en su papel regulador, permite la coexistencia de dos principios antagónicos -planificación y mercado- donde "...la combinación y conciliación entre estos mecanismos corresponde, en cada momento, a los órganos de decisión determinados por el régimen político" (proposición de los 24); del mismo modo: "Se afirma la necesidad de evitar toda concentración excesiva de poder económico que pueda constituir una amenaza a la vigencia real de las libertades democráticas" (idem). Esta tesis, profundamente reaccionaria y falsa, tiende a desconocer el impulso hacia el desarrollo de las fuerzas productivas, para cuyo efectivo avance no hay más camino que la concentración, fenómeno este último que no es problema verdadero sino tendencia inevitable para una adecuada satisfacción de las necesidades humanas en el mundo moderno creado a partir del capitalismo. El problema real está en superar la concentración en manos particulares, pues esto regenera y acentúa la irracionalidad económica que exige la mantención de ricos y pobres, opresores y oprimidos, instruidos e ignorantes. Pretender crear cortapisas a los grupos económicos con leyes y controles antimonopólicos para evitar la concentración es un esfuerzo tan estéril como cortar el césped para evitar que este continúe saliendo, cuando de lo que se trata es de cortarlo de raíz. Entonces, mientras se "impide" la concentración económica sin tocar definitivamente a los grupos económicos, "corresponde (...) al Estado corregir las distorsiones que se puedan producir como consecuencias de las diferencias de poder, riqueza, ingreso, educación, y otros factores..." (idem). Esto se parece mucho al sadismo hipócrita de aquellos que se alegran ante la existencia de los menesterosos pues así pueden ejercer su caridad. "Se reconoce al estado un rol activo como promotor del desarrollo nacional" (idem). Esta política económica pequeñaburguesa que ve en el Estado la fuerza neutral, del bien común, capaz de regular y limar las asperezas del capitalismo sin salirse de él, en el Chile actual ya no sirve a la burguesía ni a los trabajadores. El fetichismo estatista es una producción ideológica de la pequeña burguesía que busca un alero protector en medio de la ley selvática del capitalismo, concebido como un ente suprasocial, representante de la "justicia", al cual pueden hacerse peticiones y rogativas, olvidando que la actitud del Estado está directamente determinada por la clase o clases que mantienen su control, y que la verdad a que tienen que enfrentarse las clases medias es: o gobernar con la burguesía o con el proletariado, interrogándose concretamente respecto de cuál de estas otras clases está en condiciones de respetar e incorporar sus particulares intereses junto a los propios. Por de pronto, el curso objetivo de la historia está mostrando que la alianza con las clases dominantes del capital se ha tornado virtualmente imposible y que ya es hora de que sus representantes vayan tomando conciencia de las reales perspectivas que señala el devenir nacional.

C. MARXISMO O DETERMINISMO ECONOMICO:UNA CRITICA GRATUITA

En su crítica a Guzmán, Orrego dice lo siguiente: "Sostener que sin libertad económica no puede haber libertad política y que la primera es condición de la segunda, es sostener la tesis principal del materialismo histórico: no hay más verdad que la expresada en la infraestructura económica y las relaciones de producción. Paradojalmente, la historia muestra que la libertad política tiene una enorme autonomía en relación a la libertad económica, aún cuando, evidentemente, ningún fenómeno social puede ser totalmente autónomo de las relaciones que le unen a su medio ambiente. Pero ciertamente, no hay causalidad mecánica entre uno y otro" (op. cit.).

Esta tesis-acusación contra el marxismo ha venido convirtiéndose en un lugar común para aquellos que buscan descalificar a nuestra doctrina bajo el cargo de anti-democrática, pues sacrificaría la "libertad mientras se construyen las condiciones objetivas para que ella sea posible" (Orrego, op. cit.).

En primer lugar, es necesario dejar taxativamente en claro que esta acusación es falsa por completo. Jamás el marxismo ha visto que no haya más verdad que la económica. Rigurosamente, esa es la postura que la burguesía sostiene desde siempre, con la cual la política pierde todo condicionamiento humanista, convirtiéndose en una mera técnica de la dominación. Maquiavelo es la resultante natural, en la política, de Adam Smith en la economía. El pecado de Marx ha consistido en revelar la esencia íntima del movimiento social burgués y los burgueses han respondido cargando sus propias culpas al marxismo. No es ninguna casualidad sino fruto de la más plena concordancia con la clase a la que representa, el que J. Guzmán sostenga que primero debe haber un grado alto de desarrollo económico para que pueda existir una democracia burguesa (por lo demás, que, para este caso en particular, sólo de ella tiene el nombre). Noventa años atrás, Engels hubo de responder a ciertas acusaciones, muy parecidas a las de Orrego, dando como argumento lo que este último hoy día usa contra el marxismo. Escuchémosle: "Según la concepción materialista de la historia, el factor que en última instancia determina la historia es la producción y reproducción de la vida real. Ni Marx ni yo hemos afirmado nada más. Pero si se nos obliga a decir que el factor económico es el único determinante, entonces se transforma la primera proposición en una frase hueca, abstracta y absurda. La situación económica es la base, pero los diferentes factores de la superestructura ejercen igualmente su influencia sobre el curso de las luchas históricas y, en muchos casos, determinan las formas de modo preponderante" (cita a J. Bloch, 21 septiembre 1890). Pero este insigne fun-

dador del marxismo no se queda en esta refutación a Orrego desde la tumba. Así continúa: "En la apreciación de acontecimientos y de series de acontecimientos tomados de la historia al día, nunca será posible remontarse hasta las últimas causas económicas" (Prólogo a Las Luchas de Clases en Francia -1848-50, de Marx). ¿Qué queda de las afirmaciones de Orrego? Sencillamente nada más que una incomprensión increíble de la teoría a la que pretende criticar. Ha confundido por completo dos niveles completamente distintos de análisis social. Cuando el marxismo afirma la determinación en última instancia de la sociedad burguesa por la economía, está ubicado a un nivel de abstracción de esta forma social. Por el contrario, cuando sostiene que en "los acontecimientos tomados de la historia al día, nunca será posible remontarse hasta las últimas causas económicas", está al nivel de la realidad concreta y compleja, al nivel de la política, es decir, en el lugar donde desembocan todas las aguas parciales para expresar al hombre histórico en toda la riqueza de sus matices. El hombre es la política, o sea, todas las manifestaciones clasistas en su libertad, en la acción, en otras palabras, en medio de las correlaciones de fuerzas de la coyuntura política. Y en este nivel, un estado de ánimo puede -y de hecho así es-, puede más que miles de fábricas.



Por otra parte, sería completamente inexplicable el hecho de la revolución, de la ruptura de las viejas relaciones de producción, si sólo la economía fuera el factor dinámico de la historia, tanto en cuanto a las fuerzas que la realizan como por los objetivos que se trazan, pues, mientras en el primer caso, no son las clases proletarias las que se ponen en camino por sí solas sino que requieren la conformación de un núcleo conductor que se gesta y evoluciona en el marco de la ideología, en el segundo, la lógica económica es por completo determinada por la conciencia de las

necesidades humanas, excepto cuando la revolución misma debe completar determinados procesos históricos en el desarrollo de las fuerzas productivas, con lo cual se crea un factor que retrotrae el avance social hasta que la nueva sociedad no logra dotarse de su propia base material, con el consiguiente retraso además en las manifestaciones de la superestructura.

El mero reflejo de la economía en la realidad política a lo más que llega es a reproducir sus propias condiciones de existencia, pero nunca a su negación automática. Si no fuera así, los partidos revolucionarios no tendrían ningún papel que cumplir, bastaría con laborar en alguna empresa y esperar tranquilamente...

En cuanto al corolario de la acusación, en el sentido de que tanto los revolucionarios como los reaccionarios sacrifican la libertad del pueblo en aras de crear las condiciones para la misma, aclaramos dos cuestiones: a) No puede asimilarse, como si fueran equivalentes, la violencia burocrática elitista y mercenaria de los capitalistas con la violencia de masas de los trabajadores, sencillamente porque ambas expresan dos mundos, dos concepciones sociales cuya cualidad se expresa no en la violencia misma sino en la forma en que aquella se manifiesta. Para los trabajadores su dictadura o dominación social está obligada, como condición, a ser antes una democracia, pues la voluntad de miles y miles de seres humanos sólo puede convertirse en tal una vez que ha completado un proceso de formación de aquella voluntad, mientras que para la burguesía, la democracia es un medio de su dictadura o dominación de clase. Si para los explotados la democracia es condición de su dictadura, para los explotadores es exactamente lo contrario. b) La pregunta de si "la libertad política debe ser sacrificada" mientras se construyen sus condiciones está en un nivel de generalidad tal que falsea por completo la respuesta, pues Orrego parte de la base de que existe una sola libertad, lo que es completamente falso en las sociedades clasistas, donde la libertad de uno significa la opresión de otros. En otras palabras, siempre hay una libertad sacrificada en la sociedad burguesa, del mismo modo que cuando la revolución despliega sus alas hay una clase que gime en opresión: la burguesía.

Por tanto la pregunta de Orrego revela una incompreensión total del significado real de la palabra libertad, con fundiéndola por su concepto más abstracto y, por tanto, más alejado de la única verdad: la libertad histórica y de clase, la que siempre está en acción. Mientras la historia está en movimiento siempre es la libertad la que está realizándose, la libertad concreta, de una clase.

III. EL PROYECTO DEMOCRÁTICO DE LOS TRABAJADORES: ALGUNAS PROPOSICIONES PARA UNA DEMOCRACIA ESTABLE EN CHILE

A. BLOQUE HISTORICO POPULAR: PROLETARIADO Y CLASES MEDIAS

En toda forma de Estado su fisonomía y condición de estabilidad está dada por la clase o las clases que le sirven de sostén y por la relación de estas últimas con el resto de la sociedad. Sobre el particular, después del golpe militar que facilitó el proceso de consolidación y extensión de las relaciones de producción del capital financiero, se facilitó extraordinariamente la reconstitución de los bloques de intereses sociales, en forma objetiva. En el grado de monopolización actual de la economía se produce un proceso que vuelve a poner de relieve los intereses efectivos de donde se separan y antagonizan las clases, restableciendo, hasta ahora solamente en los hechos sin que redunde en voluntad política, una realidad semioculta por los acontecimientos del período 70-73: la existencia de un bloque social popular constituido por la inmensa mayoría de la nación, de proletarios urbanos, rurales y mineros, junto a las clases medias (pequeños propietarios del campo y la ciudad, pequeños comerciantes, profesionales, empleados particulares y públicos, estudiantes, etc.), cuyos intereses son coincidentes, en primer lugar, porque son afectados por la política económica del capital financiero, en segundo lugar, por la existencia de la dictadura que les impide organizarse y luchar efectivamente por sus derechos y necesidades, y, en tercer lugar, porque la raíz de sus males se encuentra en la supervivencia de un sector social que para mantenerse requiere la subordinación del resto de la sociedad: los grupos económicos. Convirtiéndose en un requisito de la política del bloque social popular la abolición de estos intereses oligárquicos, transformando en propiedad de toda la sociedad, y poniéndolo a su servicio, este potencial económico y cultural.

Sobre la base de esta inmensa mayoría social puede levantarse una República Democrática de Trabajadores, resultante de la alianza estratégica de clases medias y proletarios, que entregarían tal grado de estabilidad política a las instituciones del nuevo Estado que la democracia, en su sentido formal, sería completamente factible dentro del nuevo marco histórico, brindando todas esas posibilidades que en el capitalismo sólo son farsa.

B. PROLETARIADO Y CLASES MEDIAS: BASE DE UNA DEMOCRACIA REAL

En nuestro país existen condiciones excepcionales como para realizar una efectiva democracia sobre la base del poder de los trabajadores. A diferencia de otras sociedades atrasadas, en las que la alianza de la mayoría explotada del pueblo estaba constituida por un reducido proletariado, por lo general inexperto en el ejercicio de la actividad política, que ni siquiera tenía una cultura democrática formal, de un bajo nivel cultural y, por último, aliados a un campesinado pobre e inculto (sin contar las difíciles circunstancias que creaba la agresión imperialista) -todo lo cual creaba un cuadro de primitivismo institucional que hacía indispensable la dictadura como forma de gobierno-, en Chile la proletarianización ha llegado a todas las esferas de la actividad económica, siendo mayoritaria la clase obrera en las minas, la industria urbana y el agro. Todo lo cual determina la existencia de un núcleo de importancia decisiva en la clase obrera industrial, con su cultura, junto al cual se levantan unas clases medias mayoritariamente urbanas, gran parte de las mismas disponen del conocimiento acumulado por la sociedad chilena y, por lo mismo, está conformado el puente de plata por donde debe transitar la importante ascensión de todos los explotados hacia su culturización, hacia la apropiación de la civilización anterior, pudiendo proyectarse efectivamente hacia el futuro. Poseer un aliado potencial urbano y culto en vez de uno atrasado y agrario es indiscutiblemente una tremenda diferencia histórica que pasa a convertirse en la base material de una democracia de trabajadores no solamente real en los contenidos sino también en la forma, posibilitándonos la incorporación y superación de todo el aporte democrático que la burguesía hizo en la historia.

El 4 de septiembre de 1970 no es un accidente en la historia del país, ni mucho menos un puro problema técnico de la dominación como inevitablemente debe verlo un J. Guzmán; pues para la burguesía la democracia es sólo un medio para la mantención de la explotación capitalista. Por el contrario, expresa mucho más una modalidad propia de la revolución socialista en nuestra patria, una posibilidad de construir una democracia basada en un bloque social que permitirá levantar formas de poder capaces del libre ejercicio de los partidos populares, de las organizaciones de las masas, de los derechos humanos y sociales fundamentales. Aquí es preciso valorar como importante el aporte que el "Grupo de los 24" hace en cuanto a los regímenes de excepción, a la reivindicación de la soberanía popular, a los partidos políticos. La negación absoluta del pasado histórico sólo puede hacerlo una clase en decadencia y, aún así, sólo será una postura ideológica, jamás una realidad. Por ello valoramos

los aportes históricos de la democracia formal, los que se convierten en un patrimonio inestimable para el ejercicio del poder por los trabajadores. Sin embargo, no podemos callar lo que nos parece una inconsecuencia principal en el planteamiento de los "24" y es la que dice relación con la base económica y política del nuevo Estado democrático. Obviar el problema de la supresión del capital financiero, de los grupos económicos, es, en verdad, sacarle el bulto a la tarea más importante, a la premisa sin la cual la democracia será un cascarón vacío. Del mismo modo, referirse sólo a un tipo de generación y uso del poder democrático a través de la elección universal y el parlamento nacional, desvinculándola del ejercicio concreto del poder en cada lugar donde viven y se desarrollan las masas ciudadanas es volver a recrear la democracia formal, en donde el poder -para los trabajadores- se limita a una elección cada cierto tiempo, manteniéndose la separación entre la sociedad civil y el poder del Estado. Planteamos que esta separación debe superarse por medio de la creación de centros de poder popular en cada ámbito concreto donde un grupo de individuos deba enfrentar la magna obra del trabajo, la educación, el deporte, lo militar, la recreación, en síntesis, en cada lugar donde tiene lugar el proceso de humanización, de vida en sociedad. El poder debe dejar de ser extraño a los ciudadanos. La solución burguesa a esta realidad pasa, sencillamente por la exclusión de las masas de la actividad del Estado, pasando a ser extraño porque deja de incumbirles. Esta falsa alternativa no se cambia en lo esencial con la sola de democracia formal. Por el contrario, esta democracia formal pasa a un nuevo estadio de su evolución y enriquece su contenido cuando se encuentra como un elemento conformante de la democracia de los trabajadores.

Se ha venido haciendo un lugar común, creado por la prensa reaccionaria, la acusación de que la democracia de los trabajadores no es más que una forma de la dictadura del proletariado, por lo tanto una forma de la violencia arbitraria. Conviene dejar las cosas en su lugar. En primer lugar, el concepto dictadura del proletariado está ubicado al nivel más general desde donde es posible hablar del Estado como una forma histórica concreta. Para entendernos, corresponde a la categoría de "tipo de Estado", o sea, a la relación que guarda la organización de la violencia que tiene por función conservar las relaciones sociales dentro de un contexto de clases antagónicas, con la relación básica que organiza el orden de la sociedad en su globalidad. En el caso de la sociedad burguesa, la característica propia del tipo de Estado capitalista consiste en la separación entre economía y Estado, con lo cual éste adquiere una autonomía bastante alta de su base determinante. Lo público y lo privado son lo característico del Estado en el capitalismo, y con ello se expresa la dictadura de la burguesía, pues ella se constituye en clase dominante dentro de las relaciones de

producción, en lo privado, por lo cual lo público no le preo cupa, puede ser asumido por todas las clases mientras manten gan las relaciones que en lo privado concretizan la dictadu ra del capital. Dictadura de la burguesía es sinónimo o per manencia de las relaciones entre obreros y capitalistas en lo privado, por lo que la forma más democrática de un Esta do levantado sobre esa forma de explotación será siempre la dictadura de la burguesía. En este nivel de análisis cabe la expresión "dictadura del proletariado", es decir a la re lación que el Estado, en el socialismo, guarda con la rela ción determinante de esta sociedad: la conciencia social, que se libera de las relaciones fetichizadas antihumanas del mercado burgués, y se pone al servicio del hombre y sus ne cesidades. La dictadura del proletariado, es decir, el ti po de Estado Socialista, se caracteriza por la superación de lo público y lo privado, dentro de una síntesis donde el po der se convierte en instrumento de dirección social (pensa mos en los órganos de planificación, por ejemplo), al servi cio del hombre liberado y de la participación efectiva en los propios problemas por parte de las masas, adquiriendo por requisitos de existencia, una modalidad democrática y des centralizada el nuevo poder. Si para la burguesía la demo cracia es un medio de su libertad, de su dictadura, para los trabajadores la dictadura no puede ser más que un medio de su democracia. Donde se materialice el Estado Socialista, la dictadura del proletariado no puede ser sino una forma de Estado democrático, pues ésta es la única que permite la expresión de los miembros de la sociedad, de las grandes ma yorías para ejercer su poder. Si la dictadura aparece no puede ser más un método de gobierno, pero si aquella se tor na forma de gobierno, es decir que se haga total y permanen te, con ello se desnaturaliza la posibilidad misma del so cialismo. La democracia es la constante definitoria del Es tado de trabajadores, pues impedidos de expresarse y de de cidir las cuestiones sociales, no existe, para las masas ex plotadas, nada que las convierta en individuos libres, huma nizados. Así, entonces, aún cuando el Estado de trabajado res deba defenderse de la agresión capitalista interior y ex terna, esta actividad jamás podrá cubrir toda la acción del Estado, ni aún cuando emplee la violencia directa, ni nece sariamente deberá adquirir esta única forma. Dentro de una forma de gobierno necesariamente democrática, la violencia sólo puede llegar a ser un foco de la violencia directa den tro del Estado de trabajadores, jamás puede llegar a ser su elemento central.

C. EJERCITO Y R.D.T.

En tanto las Fuerzas Armadas son las organizaciones de la violencia directa, son, por lo mismo, el elemento central de cualquier Estado. Y dada la capacidad que estas institu ciones tienen para determinar la capacidad de acción políti

ca del resto de la sociedad, el problema más grave respecto de ellas, dentro del Estado, es el de evitar que su acción perturbe la expresión efectiva de los ciudadanos. Los bur gueses han buscado la solución a esta cuestión por la vía de convertir a los militares en "eunucos" políticos, elemen tos neutros que no tienen voluntad ni pensamiento político propio (lo que no es más que otra de las ficciones legales de la burguesía al estilo de esa que dice que en Chile no hay clase privilegiada), concibiéndolos como garantes últi mos del orden burgués, o bien reconociendo abiertamente a las Fuerzas Armadas como sus representantes políticos, cuan do se desmorona la democracia formal. Pero nunca, salvo al inicio de su ciclo histórico, han logrado controlar este ins trumento básico de su dominación, pues, por último dependen de él para asegurar su existencia. Así, entonces, los ejér citos han devenido en instituciones elitistas separadas del pueblo y monopolizadoras de la capacidad militar de la so ciedad, convertidos en verdaderos "señores de la guerra", al decir de Mills, con capacidad para decidir sobre la liber tad o la opresión de las masas trabajadoras.

El nuevo Estado de trabajadores debe cumplir la función propia de todo Estado, para lo cual necesita de una organi zación de la violencia directa, de una fuerza armada. Una vez aquí, el viejo problema de la relación militares-socie dad vuelve a plantearse, pero la solución es completamente diferente en la medida en que la República Democrática de Trabajadores ya no es un Estado propiamente tal, es decir, que ya no es una organización para mantener la dominación de una clase explotadora, sino que, al contrario, es una forma política que debe tender a suprimir las diferencias socia les, las clases, y con ello debe tender a perder su sentido como tal instrumento de opresión. El índice de esta nueva situación aparece en la necesidad de realizar el armamento de todo el pueblo trabajador, como garantía de capacidad y control democrático de las masas hacia sus representantes políticos, concretizándose al mismo tiempo la solución del problema de la separación entre lo público y lo privado de la vieja sociedad burguesa, al socializar la esencia tanto como la existencia del Estado de una fuerza burocrático-mi litar capaz de enseñorearse de la sociedad entera, cuando es esta misma sociedad la que ha roto el monopolio de las ar mas. El pueblo en armas no es una mera consigna sino una tesis de la mayor trascendencia histórica que permite abrir el camino a la solución del problema militar del Estado, y con ello, al problema del Estado para la sociedad.

No obstante esta fórmula general, es conveniente espe cificar que en un sistema de Defensa Nacional Popular, so bre la base del armamento de las masas trabajadoras, organi zadas en unidades de Reserva Activa por centro de actividad social (fábricas, colegios, fundos, poblaciones, etc.), se rá necesario un segundo nivel, con un cuerpo especializado

y altamente tecnificado, capaz de movilizar a más de un millón de hombres de la reserva activa, conformando un pequeño ejército profesional, trabajadores de la defensa nacional que participan en igualdad de derechos en las instituciones del poder popular.

D. ORGANOS DEL PODER POPULAR

Las formas concretas que deberá adquirir el nuevo Estado de trabajadores, donde se expresa el poder de las masas no es una tarea a decidir a priori. Engarzarse en una discusión sobre si es necesario un Tribunal Constitucional o una nueva Contraloría, caer en la discusión de los tecnicismos del poder futuro es sencillamente jugar a las adivinanzas, esquivar los problemas reales de hoy. Más allá de ciertos principios básicos, el resto queda librado a la historia por venir, y lo que es en verdad una urgencia consiste en precisar cuáles son las formas a través de las que conformaremos la fuerza histórica necesaria que nos permita realzar nuestra República Democrática de Trabajadores. En la medida que un Estado no es más que una fuerza convertida en fuerza dominante, el problema de la creación y crecimiento de la fuerza propia capaz de construir la R.D.T. pasa a ser un tema capital.

Al llegar aquí entramos directamente en el tema de la estrategia para el período actual de la lucha de clases, de sentrañando la contradicción principal y la forma adecuada de su tratamiento, saliéndose de la cuestión de los proyectos de clase para internarse en la de las estrategias.



LA ESTRATEGIA DE LA DICTADURA MILITAR

Robinson Pérez

En el seno de las fuerzas políticas opositoras a la dictadura militar pinochetista se está desarrollando un creciente debate sobre la estrategia a seguir contra el régimen.

Ha surgido esta preocupación teórico-política en la oposición debido, principalmente, a dos factores: en primer lugar, el decidido impulso dado por el régimen militar a su propia institucionalización, creando un marco jurídico al sistema que coloca a la oposición frente a un dilema objetivo acerca de su naturaleza y fines reales; y en segundo lugar, por la constatación generalizada del agotamiento de una forma del quehacer opositor, que no alcanzó nunca el carácter de una auténtica estrategia opositora que articulara la globalidad de fuerzas políticas y sociales activas tras ciertos objetivos centrales que produjeran efectos visibles en el Estado, permitiendo apreciar con claridad la perspectiva de un cambio del régimen militar.

Nos encontramos pues, en una coyuntura particularmente trascendente donde las definiciones que se adoptan alcanzan rango estratégico, en la medida que se realizan como opciones básicas frente al sistema político autoritario: de integración, de adaptación o de desestabilización y derrocamiento.

UN INTENTO DE MODIFICACION TOTAL

Con el correr de los años de dictadura y de realización de sus medidas, fue quedando claro que no se trataba de un

cuartelazo tradicional, de la sola interrupción política sangrienta de la democracia liberal chilena y de un proyecto que no tuviera la coherencia necesaria para una modificación de toda la vida social y política del país.

La intervención golpista de las Fuerzas Armadas chilenas se realizó y sigue adelante para consolidar la dominación de una reducida capa empresarial monopolista. Esta tesis básica de la izquierda chilena ha sido demostrada por el mismo funcionamiento del régimen militar y clarificada por sucesivos estudios de la concentración del poder económico.⁽¹⁾

Hoy día, la interrelación entre economía y política, entre el modelo económico concentrador y excluyente y el régimen político autoritario de participación restringida marginal, entre Fuerzas Armadas y monopolios, es la matriz de análisis para entender el funcionamiento del sistema de dominación, que comprende necesariamente la nueva estructura económica y el régimen militar.

La fase actual del desarrollo de la dictadura militar se caracteriza por dos procesos de avance interdependientes: en el control de la economía por el capital financiero y en la institucionalización forzada de un régimen político autoritario y militarizado.

Por un lado, se avanza en la descentralización de ramas del aparato estatal -disminuyendo su dominio e influencia en la gestión económica directa y en servicios públicos como salud, educación, previsión- y al mismo tiempo se fortalece el núcleo del Estado, con aumento del potencial militar y represivo de las Fuerzas Armadas, centralizando el poder político en una cúpula restringida y minoritaria de generales, monopolistas y grupos de apoyo del régimen y persnalizando el poder estatal en Pinochet. Estos procesos interdependientes deben ser considerados como un fortalecimiento del sistema de dominación global.⁽²⁾

La construcción de este sistema de dominación político, autoritario y de participación restringida marginal, que

(1) Los dos estudios más recientes sobre los resultados del proceso de centralización de la propiedad en una capa monopolista son los de Roberto Cerri López, Algunos antecedentes respecto de la centralización y concentración económica en Chile (borrador de discusión), y el de Fernando Dahse, Mapa de la extrema riqueza.

(2) Mientras el Gobierno realiza una campaña a favor de la "desestatización", fortalece paralelamente la capacidad militar del Estado: en 1973 los efectivos militares eran 60.000, aumentando en 1978 a 85.000 (The International Institute for Strategic Studies); además han aumentado notablemente las compras de armamento en cantidad y calidad.

significa todo un cambio radical en la tradicional forma de democrática-liberal de Estado en Chile, se desarrolla sobre la base de un plan estratégico de movilización de las fuerzas del Estado, de los monopolios nacionales y la banca internacional que sostienen al régimen. Existe improvisación en lo secundario y coyuntural, pero hay coherencia y planificación en lo principal y permanente de la dictadura militar.

En la fase actual se aprecia como esta estrategia tiene sus conductores, su tiempo de desarrollo, su ritmo de implementación, sus fuerzas internas y externas, sus objetivos mediatos e inmediatos.

LA CONDUCCION DEL REGIMEN

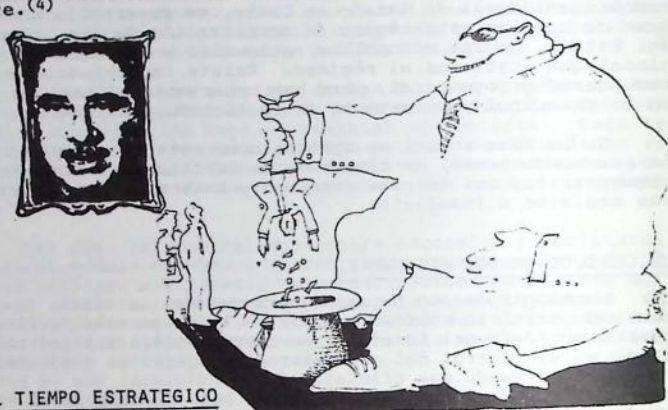
En el plebiscito de septiembre pasado, la clase dominante depositó su confianza política en la persona de Pinochet como "Jefe del Estado". Su fuerza política sigue radiando en el control del generalato del Ejército, desde donde ha ido creando una oficialidad incondicional que le permite dirigir al Ejército y sobre esa base dominar en el seno de las otras ramas de las Fuerzas Armadas.

El régimen militar brasileño avanzó en su institucionalización por la vía de mantener una participación colegiada de las Fuerzas Armadas con una rotación del cargo de Jefe de Gobierno y de Estado. El régimen militar chileno evidencia como rasgo dominante -a diferencia de aquel-, la personalización del poder político: durante los próximos 8 años de vigencia del articulado transitorio de la Constitución, Pinochet tiene más atribuciones jurídico-políticas en su calidad de dictador "de derecho" que las que tenía como dictador de facto.⁽³⁾

Sin perjuicio de esta conducción superior unipersonal, desde el inicio del régimen militar la capa empresarial monopolista se ha reservado la conducción económica del Estado. Los ministros claves del área económica han surgido de los clanes financieros, con un poder tal que han enfrentado políticamente a ramas de las Fuerzas Armadas para imponer la política económica, aprestándose ahora a dilucidar con sectores del Ejército la propiedad de las empresas estratégicas.

(3) La vigésima cuarta "disposición transitoria" faculta a Pinochet para: 1) declarar el estado de "peligro de perturbación de la paz interior", sin necesidad de acuerdo de ninguna otra institución; quedando facultado para: 2) arrestar a personas hasta por 5 días "en sus propias casas o en lugares que no sean cárceles"; 3) "restringir el derecho de reunión y la libertad de información"; 4) "prohibir el ingreso al territorio nacional o expulsar de él" a chilenos o extranjeros; 5) relegar por 3 meses dentro de Chile, no cabiendo recurso en contra. Desde el 11 de marzo último comenzó a aplicar estas disposiciones, previa dictación del Estado de Emergencia.

cas del Estado, particularmente las de la Gran Minería del Cobre.⁽⁴⁾



EL TIEMPO ESTRATEGICO

En septiembre pasado se ratificó la conducción estratégica del modelo de dominación, definiéndose también que el tiempo estratégico mínimo para su profundización y consolidación es de ocho años más, período en el que regirán las 29 "disposiciones transitorias" -que fue a lo que Pinochet daba prioridad en su "plebiscito"-, las que elevan la arbitrariedad a la categoría de norma jurídica.

Los 8 años venideros, de fuerte dictadura "legal", son, por tanto, decisivos para nuestro pueblo: es el tiempo que se han dado los sectores dominantes para cambiar la tradicional conciencia democrática del pueblo, modificar el sis-

⁽⁴⁾ La nueva ofensiva contra la propiedad estatal de empresas denominadas "estratégicas" se viene desarrollando a partir del reajuste ministerial del 29 de diciembre de 1980, con el traslado de José Piñera -hombre clave del clan Cruzat en el Gobierno- desde el Ministerio del Trabajo al de Minería. La prensa oficialista ha desatado una campaña destinada a sensibilizar a la opinión pública y particularmente influir en las decisiones del Gobierno en esta materia. Así por ejemplo uno de sus analistas sostenía que "el control hegemónico de CODELCO en la gran minería del cobre, especialmente su control de yacimientos aún no explotados, parece estar quemando esta área de desarrollo de la economía nacional". (Eduardo Justiniano, *Realidad* N° 20-21, enero-febrero de 1981). El general Gastón Frez, máximo ejecutivo de CODELCO, había señalado que "el cobre está en manos del Estado chileno por una decisión histórica. Es necesario que permanezca como empresa estatal". (Entrevista de Raquel Correa en revista *Cosas* del 18/12/80)

tema político anterior y completar la reestructuración de la economía.

A partir de octubre del año pasado se desarrolló un debate a través de la prensa de la dictadura sobre los objetivos de la estrategia en esta fase, en torno a dos grandes opciones: simple consolidación del régimen o profundización de los cambios estructurales.

TRIUNFO DE LA LINEA DE OFENSIVA

Por un lado se argumentaba que había llegado el momento de consolidar lo avanzado, que los logros económicos eran suficientes y debía procederse a cierta redistribución del ingreso, limitar el avance de las modernizaciones en la economía y estructura social para implementar una política de alianzas, e incluso se planteó la necesidad de diseñar una política de cierta apertura hacia el centro.⁽⁵⁾

La prensa vinculada a los clanes financieros, por su parte, señaló de manera uniforme que aún no había llegado la hora de consolidar, que la única forma de estabilizar el sistema era profundizando el proceso de cambios en la economía y la sociedad, no importando el costo momentáneo que tuviera en lo relativo a las alianzas.⁽⁶⁾

Este debate entre defensiva (o contención) y ofensiva, entre consolidación o profundización del modelo, se resolvió en la práctica con la implementación acelerada de un conjunto de medidas de Gobierno que implicaban el triunfo de la línea ofensiva y profundización del modelo propiciado por los clanes financieros: nueva legislación sobre régimen de pensiones, nueva ley general de universidades, traspaso de la educación primaria a tutela de los municipios, derogación de los Colegios Profesionales, supresión de los Tribunales del Trabajo. En tres meses, con manu militari acompañada siempre de la sorpresa táctica y una constante ofensiva, el gobierno impuso estas medidas generando una masa opositora

⁽⁵⁾ Por ejemplo Federico Willoughby: "El país está satisfecho de los logros obtenidos sin sectarismos ni imposiciones (!!). Ahora es preciso consolidar lo obtenido. Para ello la fórmula puede ser CONCLIR MAS QUE IMPONER y unir más que dividir". (*La Tercera*, 26/1/81)

⁽⁶⁾ *El Mercurio* resumió así la opinión oficial del sector financiero-nopolista: "Luego de grandes triunfos económicos, parece natural que algunos personeros de Gobierno piensen que ha llegado el momento de consolidar los logros y de no seguir inquietando a nuevas áreas sociales... Las modernizaciones comportan la transformación profunda del país. Hay que seguir en tal camino. El régimen no puede permanecer inmóvil: O AVANZA O SE COLOCA EN UN SEVERO RIESGO". (Semana Política del 2/2/81)

potencial de un millón de chilenos (profesores primarios y universitarios, profesionales y técnicos colegiados, jubilados y estudiantes universitarios).

Para profundizar el modelo de dominación en la fase actual y contener a su vez a esa gigantesca masa opositora que tal proceso genera (de modo potencial), es que la clase dominante requiere ese largo tiempo político autoritario. Pro fundización del modelo significa necesariamente prolongación del autoritarismo y la represión. Por esta misma razón en la fase actual la apertura política y el consenso no consti tuyen una necesidad de la clase dominante ni una línea de ac ción de la dictadura militar.⁽⁷⁾

Con esta línea general, se puede afirmar que en los pró ximos años de profundización del modelo, los principales ob jetivos estratégicos de la dictadura son: privatizar la eco nomía nacional, estructurar una nueva institucionalidad so cio-económica, articular un sistema de alianzas internacio nal, desarticular el bloque social opositor, modificar la es tructura político-partidista e integrar al sistema a las fuer zas sociales y sectores políticos de centro.

ROL DE LA PRIVATIZACION

La privatización de la economía significa la liquida ción del Estado empresarial surgido en la década del 30 y el traspaso de sus áreas y funciones sociales a la tutela y dominio del capital privado. En la fase actual, esta priva tización se traduce en una intensa presión por parte de los grupos económicos por terminar con las denominadas empresas estratégicas del Estado y en una línea de avance de las de nominadas "7 modernizaciones" de la economía y las funcio nes sociales del Estado.

Dicha privatización es al mismo tiempo la culminación de un proceso de reestructuración de la economía capitalis ta chilena y de inicio de una reformulación del Estado en sus funciones políticas, por la vía de ir creando un nuevo aparato de hegemonía privada basado en el sector empresarial (que incluye todos los niveles de la educación). De reali zarse este gran objetivo del régimen, el capital monopolis ta vinculado a las transnacionales no solamente dominará sin contrapeso en la economía sino que en la vida social, con trolando el trabajo, la ocupación, el ingreso, la educación, la previsión y la salud de la población.

(7) Pinochet en una reciente entrevista resumió el estado de ánimo y la conducta que seguirá el Gobierno: "No van a haber cambios... Pensar que habrá apertura es algo muy lejano a la realidad. No la habrá". (La Tercera, 8/3/81)

Al mismo tiempo se ha avanzado en la derogación de to da la legislación económica con contenido estatizante y se han establecido normas constitucionales que consolidan juri dicamente las nuevas relaciones de producción y cambio.⁽⁸⁾

La imposición de este inflexible modelo económico neo liberal ha significado un alto costo social, y su culmina ción aumentará ese costo y el descontento social. De allí la poca flexibilidad política del régimen en la llamada fase de transición y, por el contrario, la acentuación del au toritarismo y la represión como complemento de las medidas de profundización del referido modelo económico.⁽⁹⁾

BUSQUEDA DE LA SEGURIDAD EXTERIOR

La articulación del sistema de alianzas externa es un objetivo permanente de todo Estado. Sin embargo, en el caso de la dictadura militar chilena ha sido un objetivo de es pecial importancia para su seguridad general, por los cons tantes problemas fronterizos que ha protagonizado en un mar co de serio aislamiento diplomático internacional por la re presión que ha llevado adelante. Su línea prioritaria se orientó a desarrollar relaciones privilegiadas con la ban ca norteamericana y europea y los gobiernos de Brasil, Sud-áfrica e Israel, a fin de lograr un apoyo financiero y arma mentista que garantizaran la continuidad del régimen.⁽¹⁰⁾

(8) Durante 1980, como fruto del dilatado trabajo de una comisión mix ta de empresarios y funcionarios del Ministerio de Economía, se de rogó toda la legislación que facilitaba la intervención empresarial del Estado. De otra parte, en la Constitución se establecen, en los artículos 19 Nº 24 -sobre el derecho de propiedad- y los artículos 97 y 98 -sobre el Banco Central-, disposiciones largamente exigi das por el sector monopolístico empresarial.

(9) El informe de la Comisión Chilena de Derechos Humanos señala que en 1980 se realizaron más de 3.000 detenciones ilegales y se decreta ron 104 relegaciones por tres meses sin pasar por la justicia, se registraron 270 recursos de amparo no acogidos por los tribunales, 8 muertos en circunstancias no aclaradas, 273 profesores perdieron sus cátedras y 26 estudiantes universitarios fueron expulsados o suspendidos.

(10) En 1975 Brasil le vendió a Chile productos por 68 millones de dóla res llegando en 1979 a la cifra de 362 millones; dentro de esos mon tos se encuentran adquisiciones de tipo militar como los diez bu ques patrulleros Anchova. La visita del presidente Joao Figueiredo, en octubre pasado, acompañado de 150 empresarios brasileños, ha estado orientada a reforzar esa tendencia. La Junta chilena ha comprado en Israel misiles antitanque y de ra dio medio. La reciente visita a Tel Aviv del jefe de la FACH y mien

Hoy día el cuadro externo de la dictadura aparece más favorable, por el fortalecimiento de vínculos políticos y comerciales con el gobierno brasileño de Figueiredo, la reciente regularización de las relaciones diplomáticas con Perú, el favorable fallo del Vaticano en relación al litigio del Beagle y particularmente la orientación de la nueva administración norteamericana de mejorar las relaciones políticas con el Gobierno de Pinochet.

Si bien la imagen externa de la dictadura no se va a sanear, dado su alto grado de ilegitimidad ante la opinión pública mundial, el frente internacional ha dejado de ser para ella un factor desestabilizador -como potencialmente lo fue en años pasados-, y tiende más a ser un respaldo a su política de profundización del modelo en los próximos años. Solamente la deuda externa, que alcanza la suma de 11.239 millones de dólares, se proyecta como eventual factor crítico para el sistema en este aspecto.

DESARTICULACION SOCIAL

El otro gran objetivo del régimen en estos años de transición hacia su futura institucionalidad, es la desarticulación del bloque social opositor.

La inflexible aplicación del modelo económico y político ha ido generando una vasta masa descontenta con el régimen y marginal al sistema. En los últimos años se han volcado a este campo de la crítica opositora algunas capas sociales que fueron parte integrante del régimen en su primera fase, como los camioneros, taxistas, taxibuseros, profesionales y técnicos colegiados.⁽¹¹⁾

bro de la Junta, Fernando Matthei, ha estado destinada a fortalecer vínculos de todo tipo con este país, en vistas a aumentar las adquisiciones de carácter bélico, en particular instrumental sofisticado y aviones.

En febrero de 1981 Pinochet concedió el agreement al primer embajador de Sudáfrica en Chile, John Reimond Dutton, culminando una larga, secreta y oscura historia de colaboración entre ambos regímenes. Algunas semanas antes el gobierno de Santiago había comprado a Sudáfrica misiles tierra-aire "Crotale" por valor de US\$ 40 millones.

(11) En diciembre de 1979 se constituyó un comando gremial de pequeños y medianos propietarios y comerciantes para defenderse de los embates de la política económica oficial. Las declaraciones de sus dirigentes son innumerables. Dos ejemplos: "...estamos viviendo bajo una dictadura económica" (León Vilarín, presidente de los camioneros, a raíz de un decreto de liberación del precio de la gasolina, en septiembre de 1978. Hoy N° 68. "Basta de que un grupo de señoritos de segunda, de tercera y hasta de cuarta categoría, apoyados en las bayonetas de las FF.AA. y de Orden, pisoteen a los gremios" (Juan Jara, presidente de los taxistas, en una asamblea del gremio, luego de

A diferencia del fascismo europeo, que construyó un sistema político basado en una fuerte movilización e integración de las masas a la vida política, el régimen militar chileno se ha desarrollado -por las características draconianas del proceso de reestructuración del capitalismo chileno- sobre la base de la desmovilización social y una débil integración de las fuerzas sociales al sistema político. Esta oposición potencial de un conjunto de fuerzas sociales descontentas y marginales al sistema, constituye el principal problema político del régimen, la debilidad más notoria del sistema de dominación y por tanto un factor de desestabilización potencial.

Por este potencial desestabilizador es que la dictadura militar sigue desarrollando una línea de acción orientada a dividir las fuerzas sociales, descohesionarlas, desmovilizarlas e integrarlas progresivamente al sistema.



Dado que uno de los objetivos centrales de la dictadura militar ha sido la reestructuración de la economía capitalista chilena, su esfuerzo principal se orientó a afrentar prioritariamente a la clase obrera. En la primera fase del régimen militar, esencialmente destructiva, su línea de acción fue lograr la desmovilización obrera por la vía de prohibir el funcionamiento de la organización sindical y el derecho a huelga, licenciar a vastos contingentes de trabajadores industriales -en forma directa y por medio del cierre de empresas que resultaba del proceso de centralización de la propiedad-, fomentar el paralelismo sindical y reprimir sistemáticamente a los sindicalistas activos. (En la me

una protesta de 300 taxis por el centro de Santiago, en abril de 1980. Hoy N° 143. A raíz de esas declaraciones Jara fue a la cárcel).

La eliminación de los Colegios Profesionales, en enero de 1981, desató una protesta masiva de los afectados, los que a través de plebiscitos internos repudiaron la medida del Gobierno en porcentajes superiores al 95%, salvo los de Veterinarios y Agrónomos que bordearon el 80% (la directiva del Colegio de Profesores no se atrevió a hacer la consulta a sus bases).

dida que su capacidad de hegemonizar es muy limitada, esta característica destructiva del régimen sigue presente en las fases siguientes en que intenta edificar el nuevo sistema político).

Este congelamiento de la oposición obrera en un período de recesión aguda no podía durar mucho tiempo. A partir de 1977 se inicia una reiterada movilización de sectores de la clase obrera -cobre, portuarios, trabajadores de la construcción- que obligan a la dictadura a diseñar un nuevo proyecto de contención más estable de la oposición laboral.

En la segunda fase del régimen militar se trata de integrar a la clase obrera al actual sistema. Se inicia con el Plan Laboral -una de las 7 modernizaciones- a inicios de 1980. Este plan laboral tiene un claro objetivo económico -establecer un mecanismo de negociación favorable a los empresarios-, y un prioritario objetivo político: institucionalizar el conflicto social en un margen tolerable para el régimen. Ideado para neutralizar a la clase obrera, la implementación del plan sigue siendo uno de los objetivos preferenciales para los años de transición.⁽¹²⁾

La misma táctica de desmovilización social e integración forzada al sistema, se está aplicando actualmente con el estudiantado universitario y los sectores medios. Tal es uno de los objetivos principales de la reciente Ley General de Universidades, el traspaso del magisterio a tutela municipal y la derogación de los Colegios Profesionales. El Gobierno militar busca integrar a dichos sectores al esquema de mercado libre y privatización general de la sociedad, y al mismo tiempo desmovilizarlos por la vía de limitar su capacidad de organización interna y de presión real.

En su línea de ir desarticulando la oposición social-potencial y real- para dar estabilidad al sistema, la dictadura ha ensayado una táctica desmovilizadora y desorganizadora del conjunto y al mismo tiempo ha implementado una táctica hacia cada fuerza social activa. La masificación relativa de la lucha opositora, con activación solamente de sectores sociales de vanguardia, demuestra que hasta el momento el régimen ha logrado en cierta medida su objetivo desmovilizador-estabilizador. Si prosigue ese proceso de desarticulación del movimiento de masas, podrá efectivamente estabilizar el régimen.

⁽¹²⁾ El 2 de octubre de 1980 José Piñera, el artífice de la institucionalidad laboral, hacía un balance del primer año de aplicación del Plan Laboral intentando demostrar que la huelga ya no era un recurso de la acción obrera. Según sus datos, de 1.653 proyectos presentados por 450.000 trabajadores, sólo en 50 casos se produjeron huelgas comprometiendo a 21.750 trabajadores.

CAMPAÑA ANTI-PARTIDOS

En el proyecto estratégico de la dictadura militar de construir un sistema político diferente a la democracia liberal tradicional, ocupa un lugar central la modificación definitiva del régimen de partidos políticos.

Este objetivo se ha llevado a la práctica por la vía de reprimir sin contemplaciones a los partidos de la izquierda chilena desde un comienzo, buscando su desaparición y neutralización, a través del exterminio de sus cuadros dirigentes -como sucedió con la operación desaparecidos de los años 1975 y 1976- y por la vía de constreñir sus lazos con las fuerzas sociales del país.

Al mismo tiempo de reprimir a la izquierda, se declaró en receso toda la estructura político-partidista, lo que afectó especialmente a los partidos democráticos de centro, para proceder en 1977, una vez asentado plenamente el dominio pinochetista y de los monopolios, a disolver todos los partidos políticos. Era el inicio del plan de institucionalización del régimen militar.

La campaña de despolitización general impulsada por la dictadura está orientada al desprestigio sistemático de todos los partidos políticos, sin excepciones, y constituye una pieza clave en el proceso de consolidación del régimen. La despolitización social significa el aislamiento de los partidos con las diversas fuerzas sociales, como parte del proceso de desmovilización social y de quiebre de la organización de la sociedad civil chilena.

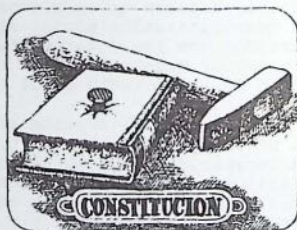
Esta despolitización social, o neutralización definitiva de la acción de los partidos políticos, es coherente con su incapacidad para estructurar un partido o movimiento oficialista. La clase dominante chilena basa su dominio político y su relación con la sociedad en la acción directa del Estado, de la dictadura sin intermediación de partidos, por que el carácter excluyente del modelo económico limita toda intermediación o negociación al estilo de las existentes en una democracia liberal.

La Constitución pinochetista contiene un conjunto de disposiciones que se orientan a limitar el desarrollo de todos los partidos políticos. Para que entre en vigencia el artículo 19 N° 15 de dicha Constitución, previamente van a impulsar una ofensiva sostenida contra los partidos políticos de centro e izquierda, a fin de modificar su carácter y potencialidad de desarrollo. Esta ofensiva comenzó en 1980 con un aumento generalizado de la represión que afectó a casi todos los partidos de izquierda y que sigue en plena aplicación.

Otro camino para dificultar la potencialidad de desarrollo de estos partidos es estimular su integración parcial y progresiva al régimen, debilitando globalmente al bloque político opositor.

La línea central para impedir definitivamente que los partidos jueguen algún rol importante en el futuro consiste en el proceso de descentralización parcial del Estado, con lo que se limita estructuralmente la tradicional capacidad negociadora de los partidos en un régimen democrático. Es la vía concebida para transformarlos de hecho en partidos del sistema, en la medida que su accionar se desenvolvería en el marco jurídico establecido, con posibilidad de administrar el Gobierno pero sin afectar la naturaleza del Estado.

La creación de la nueva superestructura jurídico-política en Chile -que es la negación de la forma democrática de Estado-, se basa también en la culminación de esta larga operación de desnaturalización de los partidos políticos, modificando definitivamente la correlación política de los tres tercios de 1970, a favor de los grupos monopolistas. En su discurso del 11 de marzo pasado, Pinochet criticó a las "oligarquías partidistas", sentenciando luego que en esta fase "los partidos políticos seguirán sufriendo restricciones de variada intensidad".



INSTITUCIONALIDAD AUTORITARIA

En la estrategia de la dictadura ocupa también un lugar central el avance a través de una institucionalidad autoritaria de transición.

Esta institucionalidad parcial se manifiesta en la vigencia de un marco jurídico constitucional transitorio y el proceso de descentralización de funciones socio-económicas del Estado, generando un nuevo aparataje de hegemonía privada al que nos hemos referido antes.

El marco jurídico-constitucional de la transición es un conjunto de normas autoritarias para avanzar en la legiti-

ción del régimen. En la fase actual esta legitimación pasa por la aplicación y reconocimiento de la legalidad de la transición. A ello viene el procedimiento utilizado con Andrés Bello, exigiéndole la aceptación del actual ordenamiento jurídico, lo que significa reconocer la legitimidad de la conducción del Estado por las Fuerzas Armadas y el régimen en su integridad.⁽¹³⁾

Al mismo tiempo que se pretende avanzar en la legitimación del régimen, la juridicidad de la transición se enfila a redefinir el rol de los partidos de centro y sectores de izquierda, forzándolos a integrarse al sistema. De esta manera, la precariedad jurídica que Pinochet se ha autoacordado resulta funcional a la implantación de la nueva institucionalidad política, del nuevo Estado.

Las denominadas 7 modernizaciones -reformas previsional, laboral, educacional, administrativa, judicial, del aparato de salud y reordenamiento del sector agrícola- son la base para crear una nueva institucionalidad socio-económica y para reformular el Estado. En la medida que condensan objetivos políticos y económicos de modo coordinado, tales medidas reformadoras concentran el esfuerzo principal de la estrategia de profundización del modelo de dominación, en el aspecto "constructivo" del nuevo orden político que se pretende establecer.⁽¹⁴⁾

Estas modernizaciones -o la reforma conservadora-, significan el inicio de la reformulación del Estado en sus funciones socio-económicas e ideológicas, el que se desprende de la tutela y control de áreas de la sociedad para traspassarlas a la atención y dirección por parte del sector empresarial.

(13) En su defensa Zaldívar llega a afirmar: "Reconozco la existencia de un gobierno establecido, de un ordenamiento jurídico y una Constitución que se aplican". (Hoy N° 182, 20/1/81)

(14) La decisiva importancia de las 7 modernizaciones es puesta de manifiesto constantemente por los principales analistas del régimen. Así por ejemplo: "Sólo un resuelto impulso a las modernizaciones y una constante capacidad creadora para mantener la iniciativa política librarán al Gobierno de tal desgaste" (Jaime Guzmán en Encicla del 31/12/80); "el camino esencial... en una primera etapa del nuevo período está en el vigoroso impulso de las 7 modernizaciones sociales, cuya concreción y afianzamiento por otra parte representan una de las razones de ser de la transición misma" (Editorial de la revista Realidad N° 20-21, enero-febrero 81); "las modernizaciones comportan la transformación profunda del país. Hay que seguir en tal camino hasta el punto en que sea de veras imposible o extremadamente difícil el regreso al socialismo" (El Mercurio, 2/2/81).

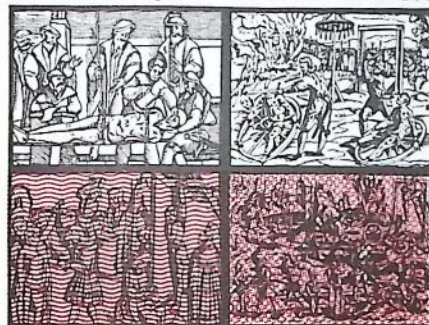
Sobre la base de estos cambios socio-económicos, que "El Mercurio" califica de "verdadera revolución silenciosa", los sectores dominantes esperan poder aplicar con éxito la Constitución definitiva a fines de la presente década. La institucionalidad jurídico-política del futuro tendrá como cimientos esta institucionalidad socio-económica a construir plenamente durante la transición. (15)

La estrategia de profundización del régimen militar por tanto, no significa un tránsito a formas democráticas sino a la perpetuación del sistema, neutralizando definitivamente las posibilidades de la oposición a un cambio del régimen. Toda apertura política se hará, desde el punto de vista de los sectores dominantes, una vez culminado el proceso de profundización del modelo. Todo consenso será un consenso autoritario, forzado e impuesto. Y la forma jurídica constitucional de 1989 se encargará de cerrar las posibilidades de modificación legal del sistema hacia formas democráticas. El régimen militar tiende a ser indefinido y el sistema de perpetuarse. Este es el desafío que enfrentamos.

(15) El Mercurio sostenía el 6/1/80: "Son importantes sin duda los esquemas jurídicos, los mecanismos de equilibrios y contrapeso de poderes... pero todo eso entra en vigor cuando se divisa el esquema social y político que dicha formulación constitucional debería expresar". En su edición del 12 de marzo de este año, la revista Qué Pasa editorializaba: "El éxito o fracaso de la Constitución definitiva (!) se jugará justamente durante los años transicionales en cuanto: se implementen, completen y afiancen las modernizaciones".



Patricio Quiroga — FUERZAS ARMADAS



Y VIOLENCIA

**LAS FASES
DE LA
REPRESION
EN CHILE**

EL MARCO HISTORICO DEL PROCESO REPRESIVO

La acción golpista-fascista ejecutada por las Fuerzas Armadas el día 11 de septiembre de 1973, sería la base para la recomposición del sistema capitalista en Chile, imponiendo un nuevo modelo de acumulación y dominación que hace trizas el sistema de relaciones políticas basado en las representaciones democrático-burguesas. "El nuevo autoritarismo nada tiene que ver con la tradicional dictadura, que aún subsiste en Centroamérica, ni con el anterior ciclo militar, que predominó en la región alrededor de 1930. Las recientes intervenciones militares no son campañas de caudillos. El nuevo autoritarismo surge en países con alto nivel de desarrollo económico (como la Argentina y Brasil) y con larga tradición democrática (Chile)... Los golpes militares de la última década se caracterizan porque las Fuerzas Armadas toman el poder como institución (la jerarquía militar desplazando al caudillo), por buscar establecer un nuevo Estado (proclaman no ser un régimen transitorio) y por no apoyarse en fuerzas civiles (rechazo de los partidos políticos)". (1)

(1) Norbert Lechner, La crisis del Estado en América Latina, El Cid Editor, Caracas, 1977, págs. 31 y 32.

En el marco de referencia explicitado, las Fuerzas Armadas pasan a constituirse en el brazo ejecutor que impone los dictados de un sector de la clase dominante.

En resumen: el golpe de Estado fascista de 1973 fue dado en forma institucional, por el conjunto de las Fuerzas Armadas y Carabineros, los que de esa manera funden al propio Estado con sus tradicionales aparatos represivos. Las Fuerzas Armadas se convirtieron en la fuerza dominante del aparato del Estado a la vez que en la fuerza de sustentación del fascismo en el poder.

Como consecuencia de los cambios operados la totalidad de la estructura económico-social chilena sería adaptada a un nuevo modelo de dominación-represión, en el cual desde la perspectiva de la coerción se observan los siguientes rasgos:

- 1.- Liquidación de las libertades y derechos democrático-burgueses; cese de los principios (en su acepción también burguesa) de igualdad y de inviolabilidad de la persona humana.
- 2.- Derogación de las organizaciones de representación parlamentaria.
- 3.- Concentración y centralización burocrática del poder ejecutivo en un grupo minoritario.
- 4.- Destrucción del estado de derecho (burgués), empleo de la represión en forma sistemática sin atención a los derechos fundamentales consagrados internacionalmente (grado máximo de empleo de la represión). Aparición del Terrorismo de Estado.
- 5.- Prohibición de partidos, sindicatos y otras instituciones que asumen la representación del movimiento obrero y popular.
- 6.- Campaña de "guerra psicológica" sostenida; amedrentamiento y búsqueda de consenso en torno a representaciones manipuladas desde los aparatos ideológicos del Estado.

La mantención de esta situación será el "leit motiv" de la dictadura fascista. Para tal efecto se han elaborado en los siete años de práctica terrorista, diversas modalidades destinadas a paralizar a través de normas y métodos policíacos la protesta del movimiento democrático.

VIOLENCIA, REPRESION Y TERROR

"El poder político, hablando propiamente, es la violencia organizada de una clase para la opresión de otra".⁽²⁾ La violencia en las relaciones entre las clases es una constante histórica que se ha expresado en cada una de las sociedades clasistas. Del grado de profundidad y peligrosidad que adquieren los sectores populares en la lucha entre dominantes-dominados, depende la magnitud de la violencia (tanto reaccionaria como revolucionaria). Así, la violencia toma forma a través de la organización de la represión. En el sistema capitalista se trata de organizar la represión con el fin de mantener en los márgenes del sistema económico, político, social y cultural a las fuerzas progresistas.

La diferenciación entre las distintas formas que asume la violencia, la represión y el terror es imprescindible para enfocar problemas de la lucha de clases bajo las condiciones específicas en que ésta se presenta actualmente frente a las fuerzas del cambio social.

En toda sociedad burguesa pueden darse dos tipos de empleo de la violencia. Tomamos la argumentación de Lenin: "...la burguesía de todos los países pone en juego inexorablemente dos sistemas de gobierno, dos métodos de lucha para defender sus intereses y su dominación, dos métodos que se alternan o entremezclan, formando distintas combinaciones. Se trata, en primer término, del método de la violencia, método que niega toda concesión al movimiento obrero, método que apoya todas las instituciones viejas y caducas, método que rechaza de plano las reformas... El otro método es el del "liberalismo", el de dar pasos hacia el desarrollo de los derechos políticos, hacia las reformas, las concesiones, etc."⁽³⁾

Todo Estado democrático-burgués busca gobernar por hegemonía, siendo la represión violenta una excepción y no una constante. En el Estado de Excepción (en sus múltiples formas), la violencia represiva es una actitud sistemática (normal para el detentor del poder); allí la violencia represiva adquiere su límite máximo. Al unísono con el comienzo de la liquidación del movimiento obrero y popular, comienza a imponerse un "sistema de terror" encaminado a envolver todos los tejidos de la vida social, tanto los de la sociedad política como los de la sociedad civil.

⁽²⁾ Carlos Marx, "Manifiesto del Partido Comunista", Obras Escogidas en 3 tomos, Ed. Progreso, Moscú, 1973, T.1, pág. 129.

⁽³⁾ V.I. Lenin, "Las divergencias en el movimiento obrero europeo", Obras Escogidas en 12 tomos, Ed. Progreso, Moscú, 1976, T.3, pág. 404.

La práctica del terror se expresa en todas las estructuras que componen la formación económico-social nacional: 1) en la estructura jurídico-política se manifiesta en la marginalidad a la que es sometido el movimiento popular; el efecto inmediato es el "congelamiento de la lucha de clases" (en forma temporal); en la región de lo jurídico se expresa en el cese de las garantías más elementales para la persona humana; 2) en el nivel ideológico el sistema de terror se manifiesta en los efectos que sobre las conciencias y el subconsciente cobra la permanente acción de los aparatos ideológicos del Estado; y 3) en el nivel económico (el más estudiado) el terrorismo encuentra forma en la extrema polarización de la relación trabajo asalariado/capital y en la tradicional solución a favor de este último elemento de la contradicción.

El sistema de terror abarca al conjunto de la población, tanto a civiles como a militares. En nuestra Patria el conjunto del movimiento popular ha sido sistemáticamente sometido a una vorágine de violencia represiva y terror que alcanzó los límites máximos que un pueblo pueda soportar.

En la historia de estos años de dictadura fascista en Chile es factible dimensionar la represión a través de la secuencia de decretos, normas, leyes, etc., que han ido imponiendo en un proceso cuyo objetivo central es la eliminación física de las expresiones políticas de las fuerzas antifascistas.

El proceso de represión antipopular en Chile abarca a lo menos cuatro fases, cada una de las cuales tiene sus rasgos específicos, los que es necesario conocer y analizar, sobre todo en la perspectiva de evaluar sustancialmente al enemigo de clase en la empresa de descomponer sus fuerzas.⁽⁴⁾

LAS FASES DE LA REPRESION DESDE EL GOLPE DE ESTADO HASTA HOY DIA

PRIMERA FASE: LA REPRESION MASIVA Y DESCOORDINADA

La primera fase abarca el período que va desde el 11 de septiembre de 1973 hasta el 18 de junio de 1974, fecha de la fundación de la DINA.

⁽⁴⁾ Al respecto es de una contemporaneidad extraordinaria la siguiente tesis de Lenin: "Sin "desorganización" del ejército no se ha producido ni puede producirse ninguna gran revolución. Porque el ejército es el instrumento más fosilizado en que se apoya el viejo régi-

Ante la magnitud que había alcanzado la movilización del movimiento popular, la necesidad de consolidación de la contrarrevolución en el poder llevaría a las Fuerzas Armadas y Carabineros a desencadenar una violencia represiva sin parangones en los anales históricos de los golpes de estado perpetrados en el continente.

La estrategia de los militares chilenos se basaría en el tipo de "guerra relámpago" orientada al aniquilamiento de las fuerzas del movimiento popular. Dentro de esta concepción de la guerra, en lo que el factor sorpresa es decisivo, los pasos tácticos inmediatos para derrotar al gobierno de la Unidad Popular fueron aislar el centro de las principales ciudades de las periferias populares, el corte de las comunicaciones, combates de corta duración y de gran intensidad, la intimidación psicológica y el aislamiento de los focos de resistencia. Las Fuerzas Armadas y Carabineros desataron una extrema violencia generalizada, con controles policiales y militares, intimidación, fusilamientos colectivos y selectivos, la utilización del recurso inhumano denominado "Ley de Fuga", torturas colectivas, etc. Estas acciones comenzaron a llevarse a la práctica desde el mismo día del golpe a tempranas horas de la mañana.

La masividad de la represión fue condición necesaria para imponer el modelo fascista de resolución a la crisis de hegemonía existente en el país.

El hecho de que el golpe de Estado se perpetrara en forma institucional, sin graves fracturas en la orgánica de las FF.AA., posibilitó una suerte de división contrarrevolucionaria del trabajo represivo. El aniquilamiento y persecución del movimiento popular correspondió, en esta primera fase, a las estructuras existentes en las Fuerzas Armadas. "En los meses inmediatamente siguientes a la implantación del presente régimen, las detenciones eran realizadas normalmente por las Fuerzas Armadas y por la policía ordinaria. Posteriormente esta actividad fue realizada por los servicios de Información del Ejército (Servicio de Inteligencia Militar, SIM); de la Marina (Servicio de Inteligencia Naval, SIN); de la Fuerza Aérea (Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea, SIFA) y de los Carabineros (policía militarizada, Servicio de Inteligencia de Carabineros, SICAR), así como por el Servicio de Investigaciones (oficina de Investigaciones de la policía civil)".⁽⁵⁾

men, el baluarte más petrificado de la disciplina burguesa y de la dominación del capital, del mantenimiento y la formación de la masa sedumbre servil y la sumisión de los trabajadores ante el capital." Lenin, "La revolución proletaria y el renegado Kautsky", Obras Escogidas en 3 tomos, Ed. Progreso, Moscú, T.3, pág. 109.

⁽⁵⁾ Chile Informativo, N° 75, México, 1975, pág. 2.

La orientación estratégica general fue la de aniquilar las fuerzas vivas del enemigo (ello costaría a la izquierda por lo menos 30.000 víctimas), empresa en la que colaboraría también la clase dominante a través de sus representaciones políticas (PN, DR, P. y L. fundamentalmente), entregando información y a veces actuando directamente.

Los objetivos estratégicos parciales de la contrarrevolución en el poder durante la fase son:

1º. Junto a la eliminación física de militantes del movimiento popular se intenta destruir la organización social que había articulado éste. Así la represión es enfocada prioritariamente contra los partidos de representación obrera y popular (especialmente el PS, PC y MIR), a la vez que dirigida con singular saña contra las organizaciones obrero-sindicales aglutinadas en la CUT. Otro punto de aniquilamiento fueron los militares patróticos (en la Marina, FACH y Carabineros especialmente), con lo que se quebraba definitivamente una cierta influencia de la izquierda en las FF.AA.

El hecho de que los presos políticos hayan sido considerados como "prisioneros de guerra", en un país que fue decretado en "Estado de Guerra Interno", da cuenta de la situación de violencia terrorista en que fue sumido Chile.

2º. El segundo objetivo estratégico parcial fue el amedrentar a la población a través del terror. De esa manera se imponía la organización de las masas populares para una actividad de resistencia al golpe. Condición indispensable para el éxito del plan golpista era producir el aislamiento entre partidos-masas, relegando a los partidos a la clandestinidad más absoluta (situación agravada ante partidos que por más de cuarenta años venían actuando en el espacio legal del sistema político, con períodos de persecución mucho menos dura en el caso del PC o el MIR). Los partidos de izquierda, partidos de masas, experimentarían una ruptura de la línea central de mando, corte de comunicaciones entre dirección y base, falta de información, etc.

3º. Esta fase significaría para el movimiento popular el comienzo de una retirada estratégica, en que los niveles de actividad se concentran en la sobrevivencia. Sin embargo, la propia masividad y arbitrariedad de las acciones de aniquilamiento, permitió que algunas estructuras fundamentales de los partidos sobreviviesen a la destrucción fascista. La falta de una adecuada información sobre la izquierda y la incapacidad para procesarla conspiraría contra el objetivo de destruirlas definitivamente. Las insuficiencias de información política y la falta de coordinación entre los diversos servicios de inteligencia, permitiría al fin y al cabo a los partidos obreros y populares ir readecuando sus estructuras orgánicas a la nueva situación. De esta circuns-

tancia el nuevo bloque que pasó a controlar el poder extraería una lección: la necesidad de producir inteligencia y co-ordinar sus aparatos represivos.

Tras el "putch" las Fuerzas Armadas actúan cohesionadas como institución en función de consolidarse en la dirección del Estado. Sin embargo, a pesar de la unidad en torno a ese propósito, a su interior y especialmente en el seno del Ejército se desarrollaría un profundo proceso de pugnas entre grupos rivales, cada uno de los cuales contaba con un proyecto específico.

Tal rivalidad, que se expresa también en divergencias en las fuerzas civiles de la gran burguesía, explica la falta de centralización en la conducción del accionar de los organismos represivos. Es un período de liderazgo compartido entre distintas fracciones militares y civiles del nuevo bloque dominante (el que atravesaba por el momento de su conformación), situación que determina la falta de un liderazgo totalizador que asumiese la tarea de aunar al conglomerado golpista en torno a una sola dirección. Es el precio que debió pagar la reacción, debido a la lógica compartimentación de los propósitos e información política entre los diversos sectores que propiciaban el derrocamiento del gobierno no constitucional de Salvador Allende.

Es el momento en que se sella la alianza entre el sector fascista (nucleado en torno a Pinochet y sus incondicionales) y "Patria y Libertad" (cuyo aparato de informaciones es puesto al servicio del fascismo de uniforme). Por otro lado surge un sector "populista" (Bonilla es su más preclaro representante) que reclamaba por la imposición de un proyecto reformista.



SEGUNDA FASE:
ESTRUCTURACIÓN CENTRAL DE LA REPRÉSION



Contreras

Es el lapso que comienza con la creación de la DINA (Decreto-Ley Nº 521 del 16 de junio de 1974) y se extiende

hasta su cese formal y legal, en agosto de 1977, cuando surge la Central Nacional de Informaciones (CNI).

En esta fase se produce un importante reajuste de los servicios de seguridad del régimen. La experiencia de casi un año señalaba a los jefes de la contrarrevolución la necesidad de organizar sistemáticamente la violencia contra el movimiento popular, para lo cual era necesario dar cuerpo a un aparato "preventivo y represivo con amplitud de acción y manejado en el más completo silencio".⁽⁶⁾ Se intentaba de esa forma coordinar la acción de los aparatos represivos del sistema, poniendo término al importante margen de autonomía con que habían actuado hasta entonces cada uno de ellos. Tal coordinación de las estructuras de inteligencia pasaría a ser fundamental para lograr una mayor efectividad en la represión, con una dirección más selectiva, no obstante que la intimidación masiva no se dejó de lado. Para llevar a cabo esos propósitos entraría en escena un nuevo sistema a cuya disposición se colocaron abundantes recursos de infraestructura y medios humanos (personal de inteligencia del Ejército, destacados torturadores de los diferentes servicios de inteligencia, activistas de "Patria y Libertad" y lumpen).

La aparición de la DINA fue posible porque en el nivel de las relaciones políticas se habían producido variaciones que consolidaban a Augusto Pinochet en la dirección del Estado. En la versión de un panegirista del régimen, "el 29 de junio de 1974, en sobria ceremonia cumplida en la sede de gobierno el Presidente de la Junta Militar, general Augusto Pinochet Ugarte, asume las funciones de Jefe Supremo de la Nación, conforme a lo dispuesto en el Estatuto Jurídico de la Junta de Gobierno".⁽⁷⁾ Poco después, el 16 de diciembre del mismo año, Pinochet sería designado "Presidente de la República".

La alianza entablada entre el fascismo civil y militar permitió a Pinochet consolidar su liderazgo en el cuerpo de generales del Ejército, lo que implicó un deterioro en la capacidad de maniobra política de los sectores "populistas"; al mismo tiempo, la subordinación a la DINA de los servicios de inteligencia de las otras ramas de las FF.AA. y Carabineros (especialmente SIFA y SICAR) señalaba que las contradicciones internas (por un mayor peso en la conducción del Estado) se resolvían a favor del Ejército.

En el propósito de erradicar a las fuerzas populares de la escena política coinciden tanto Pinochet y sus incondicionales, como el generalato de las Fuerzas Armadas, el gran

⁽⁶⁾ Hoy, N° 158 (30/7 al 5/8 de 1980).

⁽⁷⁾ Walterio Millar, *Historia de Chile*, Ed. Zig-Zag, Santiago, 1977, pág. 336.

capital, la pequeña burguesía ultranacionalista-fascistizada (tanto civil como militar), los intelectuales del sistema y parte de la capa burocrática estatal.

El hecho reseñado más arriba sería la causa de profundas desaveniencias entre el general en Jefe y algunos miembros del cuerpo de generales (sobre todo en el sector pro-DC). Los casos más conocidos son los protagonizados por Oscar Bonilla y Arellano Stark. Al primero sus críticas a la línea que fue predominando presumiblemente le costaron la vida. En el caso de Arellano Stark, luego de una intensa pugna semi-pública, debió hacer abandono de las filas del Ejército. Ello implicó para la DC una dura derrota política, ya que perdió a dos generales en ejercicio representantes de sus posiciones. Con lo que se diluían sus posibilidades de presión en la perspectiva de una salida política sin crisis de la situación producida luego del golpe.

La consolidación de Pinochet en las alturas del poder político marca un hito fundamental en la historia de la contrarrevolución en Chile. La DINA adquirió rango de instrumento de poder del Ejército por sobre todas las otras instituciones de las Fuerzas Armadas. En esa estructura se centralizaría la actividad de inteligencia y contrainteligencia, la que sería enfilada no solamente contra la población civil sino también al interior de los cuerpos castrenses, transformándose así en un poder omnímodo que abarcaba a la sociedad civil y política. La DINA pasó a constituirse en la estructura dominante de la dictadura fascista.

La acción de la DINA y su dependencia de los dictados del "Jefe Supremo" permitirían a Pinochet concentrar la práctica del poder -lo que le daría una autonomía relativa para la toma de decisiones con respecto a los demás integrantes del bloque dominante-, ya que en esa fase se gobierna sólo por medio de la represión-coerción. La nominación del entonces coronel Manuel Contreras en la dirección de la DINA, en detrimento del general Odlanier Mena -Director de Inteligencia del Ejército en aquel entonces- es lógica, por cuanto el modelo "brutal" del primero garantizaba de mejor forma el control del poder por parte de Pinochet.

El plan estratégico general de la fase que pone en marcha la DINA consistiría en la profundización de la tarea de aniquilamiento del potencial revolucionario de las fuerzas populares. Golpeando a las direcciones revolucionarias y a los cuadros de nivel medio se pretendió aislar definitivamente a las organizaciones populares de su sostén clasista de masas. A través de la selección previa del cuadro que debía ser eliminado se intentaba hacer más eficaz la represión, ya que el método de represión masivo no había bastado.

El nuevo plan operativo general contemplaba las siguientes acciones de aniquilamiento:

10. Eliminación de cuadros dirigentes de nivel nacional (en esta perspectiva tanto el PS (1975) como el PC (1976) sufren sendos golpes con la captura de las direcciones encabezadas por Exequiel Ponce y Víctor Díaz respectivamente).
20. Desaparición de cuadros activos y medios de la resistencia (el número de desaparecidos superaría los 2000).
30. Eliminación de dirigentes o potenciales dirigentes en el exterior (éste es el marco del asesinato de Carlos Prats, Orlando Letelier, y el intento sobre Bernardo Leighton).
40. Eliminación física o política de los generales disidentes (Bonilla (1975), Arellano (1975), Justiniano (1976) en la Marina, etc.).
50. Eliminación de las "fricciones institucionales" (transfiriendo el poder al Ejército).

Los métodos más socorridos por la DINA serían la simple eliminación física (caso de los detenidos-desaparecidos, fusilamientos, etc.), tortura "científica",⁽⁸⁾ prisión, amedrentamiento, etc., todos crímenes de lesa humanidad. Por otra parte la DINA sería estructurada para que actuase a través de redes tanto nacionales como internacionales.⁽⁹⁾

Sin embargo pese a la saña del nuevo despliegue represivo en el intento de eliminar la resistencia popular la acción de la DINA no lograría los resultados esperados. La DINA no mostró la efectividad requerida por el fascismo, si tuación claramente apreciable a partir de 1977.

⁽⁸⁾ Los diversos métodos empleados en la tortura (aislamiento, manipulación de las percepciones, postraciones prolongadas, minamiento de la personalidad, indulgencia ocasional, demostraciones de omnipotencia, abatimiento, sugerencia a la colaboración, etc.) tienen por objetivo anular la voluntad de lucha del combatiente de la resistencia, a la vez que entrega una posibilidad para recopilar información como para penetrar los partidos. Al respecto véase el trabajo La Fabbri ca della Tortura del psicólogo social Stefano Mistura, Bertani Editore, Verona, 1978.

⁽⁹⁾ Luego del asalto al "bunker" de Somoza, por parte de los patriotas nicaragüenses, fueron requisados documentos que comprueban fehacientemente la extensión y coordinación de la contrarrevolución continental. Entre otros fue capturado uno que dice relación con las actividades de PENETRACION de la DINA en las filas de la izquierda chilena exiliada en América Latina. El documento lleva el sugerente título "Situación de la Subversión en Chile".

El movimiento popular no es aniquilado y aprende a vivir en el marco de las nuevas condiciones; el movimiento obrero comienza a salir de su letargo, sumándosele incluso sectores mesocráticos; en 1977 comienzan a registrarse las primeras huelgas desde 1973 (El Teniente, familiares de desaparecidos y otras); por primera vez en lo que va de dictadura fascista el movimiento obrero desafía a la represión para celebrar el Primero de Mayo; de los círculos más golpeados por el terror (familiares de detenidos-desaparecidos y presos políticos) surge la protesta abierta. Por su parte los partidos de tradición obrera y popular se reestructuran logrando generar nuevas direcciones y entregando línea a su militancia (es el momento del Primer Pleno Clandestino del Partido Socialista).

En fin, la lucha de clases rompe el "congelamiento" en el cual estaba constreñida, registrándose acciones que son el preludio de nuevas etapas de lucha.

En el plano internacional las reiteradas condenas a la dictadura en Naciones Unidas aislan cada vez más a ésta de la comunidad internacional. La ola internacionalista se veía además fortalecida por los ecos de repudio que despertó el asesinato de Orlando Letelier. La dictadura se ve atrapada así por una revitalización de la repulsa mundial que es tallase el mismo 11 de septiembre de 1973.

Los elementos más arriba descritos posibilitarían que en el cuerpo de generales se expresen severas críticas a la excesiva concentración del poder en manos de Pinochet y una activa oposición a las prácticas de la DINA (ejemplos: la si tuación respecto al menor Veloso y el caso de los Padres Columbanos; en ambos casos la Fiscalía Militar falla contra la DINA). Estas reacciones se producen en un momento en que al creciente aislamiento externo se suma la proximidad de la conmemoración del 100 aniversario de la Guerra del Pacífico y las cada vez mayores tensiones con Argentina por problemas limítrofes no resueltos. Al mismo tiempo se critica la excesiva entrega del patrimonio nacional a consorcios extranjeros, sobre todo empresas estratégicas.

A esas posturas en el cuerpo de oficiales se suma la de importantes fracciones de la burguesía financiera que comienzan a clamar por un cambio en las modalidades de la represión. En 1976 y 1977 se cumplió una nueva fase en la reorganización de la economía y el Estado. Desde 1973 a 1976 se había completado en lo sustancial el ciclo de centralización y concentración de los medios de producción. En esta situación se apreciaba un retraso por parte de la burguesía financiera, en el campo político: había que ampliar la base de sustentación del régimen, lo que le permitiría pasar a formas más estables de dominación en el Estado de Excepción. Esto implicaba disminuir el uso de la fuerza.

Sectores lúcidos políticamente (pensando en la perspectiva de eternizarse en la práctica y control del poder) reclamarían nuevas formas de utilización de la fuerza en la lucha contra la "subversión", reduciendo la aplicación de la coerción-represión en favor del consenso y hegemonía. Se trataba de mantener reguladas las medidas "duras" y de no recurrir a medidas extremas; esto implica penetrar al enemigo para desarticularlo en el momento preciso y entregar una nueva imagen del acto represivo. De no procederse así tornaba se imposible buscar alguna forma de consenso, y por esa vía paliar la protesta internacional.

Esta concepción preventiva por sobre una de actuación inmedatista y violenta, se impondría posteriormente entre la mayoría de los sectores en el poder. Implicaba girar de la violencia sistemática y abierta a la inteligencia política, lo que en la práctica se produciría con la aparición de la CNI.

Finalmente Pinochet debió ceder (en el Ejército llegaría incluso a crearse un Estado Mayor Presidencial, presidido por el general Alfredo Covarrubias), permitiendo el acceso del generalato a las fuentes de información de la DINA y desarticulando a ésta. Ello significaba una mayor participación del generalato en el ejercicio del poder y una restricción del espacio de maniobra de "Patria y Libertad".

En julio de 1977, en Chacarillas, Pinochet anunciaría el plan de institucionalización de la dictadura fascista. En el horizonte político se perfilaba una estrategia global de implantación de un remedo de democracia burguesa, muy restringida, con las Fuerzas Armadas como sus cauteladoras reales y permanentes. Era un triunfo de los sectores de la gran burguesía proclives a una "apertura", bajo una fórmula en la que Pinochet imponía también algunos de sus criterios "inmovilistas". Con este cambio tenía que cambiar igualmente la forma de la represión.



TERCERA FASE:
LA INTELIGENCIA POLITICA

A través de los decretos-leyes 1876 y 1878, de agosto de 1977, se disolvió la DINA y se creó la Central Nacional

de Informaciones. Con ello comenzaba una nueva fase de la represión en Chile.

Según el artículo 11 del decreto-ley 1.878 la CNI sería "la continuadora legal de la Dirección de Inteligencia Nacional para todos los fines patrimoniales". Con respecto a su ligazón con el gobierno, en el mismo decreto se planteaba que la CNI "se vincularía con el Supremo Gobierno a través del Ministerio del Interior". La DINA, en cambio, había dependido directamente de la Junta de Gobierno.

Qué se esconde tras esta medida que afectó al sostén principal del régimen? Qué variaciones se producen tanto en la sociedad civil como en la sociedad política que hacen necesaria esta determinación? Es que las fuerzas de la revolución ya no constituyen alternativa alguna de poder? Está desarticulado el movimiento popular? Se produce un avance gradual en la búsqueda de consenso para gobernar? Estas son todas interrogantes que deben contestarse a la luz de las condiciones que impone la lucha de clases.

El planteamiento de Chacarillas marcaba un esfuerzo por institucionalizar el régimen imperante. Con esto terminaba el período en el cual la inteligencia y la represión eran obra de grupos operativos de aniquilamiento. La represión comenzaría a operar con nuevas formas y métodos. Se llevaría a cabo un trabajo basado en la inteligencia política. La misión fundamental de los aparatos de inteligencia sería la de "recoger, centralizar y organizar información" (10) con el objeto de impedir el despegue de los sectores antagónicos al gobierno de facto.

Este nuevo tipo de trabajo tendría tres objetivos centrales: dar tranquilidad a la población (medida para impedir la creciente falta de apoyo al régimen), mejorar la deteriorada imagen internacional y bajar la vigilancia revolucionaria de las organizaciones populares (entregando con ese fin un espacio semi-legal de expresión política a la oposición, especialmente a la centrista).

La práctica del terrorismo abierto había fracasado, y bajo las nuevas condiciones no se podía intentar liquidar a toda la oposición. Se necesitaba un mínimo de consenso, para lo cual se vislumbraba incluso la necesidad de permitir una cierta izquierda funcional al sistema (a través de un proyecto "socialdemócrata" muy aguado, lo que explica también los esfuerzos tendientes a crear la imagen de un Partido Socialista destrozado).

(10) Hoy, op. cit.

En las acciones de inteligencia política se pone el acento en la rigurosidad y prolijidad del trabajo por sobre los excesos cometidos por la DINA de Contreras. Así se explica el cambio de timón en la dirección de inteligencia: Odlanier Mena representaría al profesional especializado en tales menesteres, y con tal propósito es llamado desde su puesto de embajador en Uruguay.

Para poner en escena los planes de desarrollo de la CNI entraría en funcionamiento un poderoso equipo de profesionales, los que elevarían sustancialmente la actividad del trabajo enfocado contra las fuerzas anti-sistema. "El Mercurio" del 4 de noviembre de 1974 daba cuenta de ello: "Se ha constituido así un Estado Mayor de la CNI formado en un 65 por ciento por civiles, profesionales como abogados, médicos, expertos en ciencias políticas, en lo que significa un cambio importante, tanto en la constitución interna como en sus funciones".

Este cambio es de una enorme trascendencia, ya que no sólo señala la salida del personal de primera hora reclutado sin selección, sino una nueva cualidad que adquiere la inteligencia. Es un paso determinado por los cambios que se operan en la lucha de clases: a estas alturas de la confrontación la izquierda en general adquiere madurez en la lucha clandestina, lo que se expresa en el hecho de que los partidos populares no sólo sobreviven a la represión, sino que evidencian un crecimiento cuantitativo y renovación en calidad. Debe notarse también que se ha ido formando una nueva capa social vanguardizadora, que se reconstituye el tejido social destruido en 1973, que existe un nuevo estado de ánimo en las masas populares, que los partidos de tradición popular están reconstituidos a lo largo de todo el territorio nacional, que se reconstituye el nexo partidos-masas en forma progresiva, y que la oposición utiliza en forma bastante eficiente el espacio semi-legal. Debe constatar, sin embargo, que a pesar de estos significativos avances se aprecia en la izquierda confusión ideológica y la falta de una estrategia global de poder.

La inteligencia política de la dictadura fijaría como objetivos estratégicos:

10. Desestructuración del movimiento revolucionario. En ese sentido las acciones son dirigidas a:
 - a) detectar los focos de insurgencia e investigar su proyección política;
 - b) penetrar las organizaciones revolucionarias (en lo posible a nivel direccional);
 - c) practicar detenciones en el momento de comenzar acciones desestabilizadoras del régimen.

20. Aniquilamiento selectivo de cuadros, produciendo de paso amedrentamiento (un caso en las filas del PS es el asesinato de Daniel Acuña).

30. Montaje de redes de penetración:

- a) en Chile; así se mantiene información al día de las actividades de la resistencia y a la vez se trata de "orientar" a la izquierda; estas acciones funcionan a través de reclutamiento o chantaje;
- b) en el exilio; se busca acumular información sobre las actividades políticas, ideológicas y de otro orden de la izquierda, a fin de obstruir su incidencia en el interior, obstaculizando -entre otras cosas- el ingreso de cuadros de distinto tipo al país.

A pesar de los cambios operados, redes de la disuelta DINA continuarían operando en forma mimetizada. Estas redes están conformadas por entusiastas adherentes de la eliminación como método por excelencia. En esa forma grupos de la disuelta DINA cumplen el rol de recurso en última instancia del sector más ultra que promovió el golpe de 1973 (la pequeña burguesía ultranacionalista-fascistizada), los que siguen manteniendo contactos y "lealtades" de parte de Pinochet, como queda en evidencia con el encubrimiento que éste le ha dado a los responsables de las actividades terroristas de los comandos "Carevic", "Vengadores de Mártires" y similares.

La fase de la inteligencia política coincidiría con la apertura de una fuerte pugna entre los sectores "aperturistas" o "blandos" y la fracción de los "inmovilistas" o "duros", los que sustentan visiones distintas sobre el futuro derrotero político chileno. Se contraponen, así, dos posiciones por el control de los aparatos represivos (represión institucionalizada vs. terrorismo abierto).

Las discrepancias se agudizarían especialmente en el primer semestre de 1980. La caída de Cubillos, en marzo, y la ejecución del coronel Roger Vergara, en julio, marcaron los puntos más álgidos de esa pugna, de la que Pinochet se erige en árbitro, quien no pierde de vista la urgencia de detener el auge del movimiento protestatario antidictatorial (entre enero y julio del 80 se produjeron 1.203 detenciones reconocidas y 80 relegaciones).

El 8 de julio de 1980, el presidente del Consejo de Estado, Jorge Alessandri R., entregó el anteproyecto de una nueva Constitución al "Jefe de Estado". El 10 de agosto el "Presidente de la República" llamaría a un segundo plebiscito "a lo Pinochet", asegurándose las riendas del poder por 17 años más, y paralizando e imponiéndose así a la polémica entre "blandos" y "duros", por lo menos por un tiempo. De

hecho los plazos para la "transición" anunciados en Chacarillas quedaban superados, alargándose la permanencia de las Fuerzas Armadas en el poder. En este aspecto se puede hablar de una derrota para los "blandos", los cuales buscaban afanosamente acortar la permanencia uniformada en la administración del poder político.

Para la nueva fase que se abriría a partir del "plebiscito" y posteriormente con la entronización de Pinochet en el cargo de Presidente de la República, el 11 de marzo de este año, se haría necesario una nueva forma de aplicación de la represión.

Que los ciudadanos chilenos a quienes el presente Decreto, residentes en el extranjero, constituyen un peligro para el Estado, y

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 del Decreto Ley No 604, de 1974,

DECRETO:

Prohíbese el ingreso al territorio nacional a los siguientes ciudadanos chilenos:

- ACOSTA OVALLE ROSA LUISA
- ACOSTA AYARA RENE
- ARIBANDA PEREZ MARIA ADRIANA
- ARIBANDA FUENZALIDA SILVA CRISTINA
- ALONSO FUENZALIDA ALEJANDRO
- ALONSO VARGAS GABRIEL ADILTO
- ALONSO PERA ALBERTO
- ALONSO OVIDIO
- ALONSO ERNESTO

CUARTA FASE: LA REPRESIÓN "INSTITUCIONALIZADA"

La cuarta y actual fase del terror y la represión en Chile comenzó a mediados de 1980. El periclitaje de los generales (R) Odlanier Mena y Ernesto Baeza (los días 23 de julio y 12 de agosto del año pasado) en las direcciones de la CNI y de Investigaciones, es el momento que permite datar el inicio de la represión "institucionalizada", que se corresponde con el intento de institucionalización de la dictadura.

A partir de ese año Pinochet se empeña en configurar un gobierno con marcados ribetes unipersonales, única fórmula que se ha mostrado capaz de impedir una ruptura "suicida" entre las fracciones "blanda" y "dura" que sostienen al régimen. Para tal efecto daría curso a una serie de maniobras sobre la base de mantener al PDC y a la UP en la periferia del sistema político autoritario, además de arbitrar y luego sofocar, para terminar finalmente imponiéndose sobre las distintas tendencias que componen el bloque dominante. Para imponer su proyecto de poder personal Pinochet necesitaba a la vez acentuar su dominio sobre los aparatos represivos del Estado.



Humberto Gordon

Toda esta perspectiva venía siendo preparada de antemano. En ese sentido la maniobra de acumulación de poder por parte del "Presidente de la República" sería posible por la concatenación de los siguientes factores: 1) predominio pinochetista en el cuerpo de generales (a estas alturas el Consejo de Generales que dio el golpe de Estado ha sido reemplazado por jóvenes coroneles que se empujaron en la escalafón a la sombra protectora de Pinochet, los generales DC ya no existen y Herman Brady -el hombre de mayor peso tras Pinochet- abandonó el Ejército en 1979), 2) Las discrepancias institucionales han sido limadas; el rol fundamental en la administración del país lo ejerce el Ejército, además el foco más peligroso de disidencia fue liquidado con el llamado a retiro de Leigh y su cuerpo de generales de la FACH. Los dos aspectos anteriormente indicados señalan que las Fuerzas Armadas están tras Pinochet; el elemento que las une es la resistencia a jugar un rol secundario en el caso de conformación de un gobierno civil. 3) Las crecientes controversias entre fracciones distintas del bloque dominante debilita a los diversos sectores que pretenden erigirse por sí mismos en alternativa de poder. 4) El curso hacia la confrontación abierta adoptado por los Estados Unidos entregó a la dictadura un sólido respaldo internacional, circunstancia optimizada con la elección de Reagan. 5) El frente de oposición democrática se encuentra dividido: la DC sufre la presión del juego interno de tendencias, la iglesia aglutina pero no dirige el enfrentamiento a la dictadura y la UP se debate en medio de profundas divergencias en lo que se ha dado en denominar la "crisis de la izquierda"; en síntesis, la oposición no es alternativa real.

Estos parámetros tanto nacionales como internacionales permitirían a Pinochet imponer su posición.

El plebiscito y la ulterior nominación del "Jefe Supremo" significó el fin de las ilusiones en una salida política evolutiva de la crisis permanente de la dictadura. La alternativa que se presenta no es otra que una salida de ruptura, preparando la crisis orgánica del fascismo. Frente a esta perspectiva el "nuevo Presidente" necesita de la concentración del poder represivo en un férreo puño, dándole a la vez un aspecto de legalidad.

El atentado perpetrado en la persona del teniente coronel Roger Vergara, Director de la Escuela de Inteligencia del Ejército, el 15 de julio de 1980; la serie de secuestros en esos mismos días⁽¹¹⁾ y una secuela de hechos vic-

(11) Solamente en el mes de julio de 1980 se registraron los secuestros de las siguientes personas: Gonzalo Romero E., Mario Romero E., Guillermo Hormazabal, Bernardo Armijo Latorre, Norma Orellana, Antonio Reynaldos, José Eduardo Jara (posteriormente fallecería a consecuencia de las torturas a que fue sometido), Cecilia Bejares Al-

lentos serían utilizados para crear el clima propicio para la maniobra en ciernes: una nueva reorganización del aparato de seguridad del régimen. Ello significó la salida de Odianier Mena de la dirección de la CNI (renunció el 24 de julio) y la nominación del general Gordon en calidad, además, de coordinador de todos los servicios de seguridad del Estado. Entretanto en Investigaciones Ernesto Baeza fue también en la práctica obligado a renunciar luego que se comprobó que el COVEMA actuaba desde dentro de su servicio y sin su conocimiento. Ambas maniobras aparecen claramente planeadas de antemano.

Nuevamente Pinochet concentraba el recurso de la represión. Al respecto las declaraciones del general Gordon son en extremo sugerentes cuando señaló: "Hay una sola línea que es la institucional y esto es seguir las órdenes del Jefe de Estado".⁽¹²⁾

Bajo las nuevas condiciones de la lucha de clases, en que Pinochet debe privilegiar su imagen de "Presidente de la República", sin abandonar su condición de Comandante en Jefe del Ejército se ve obligado a distanciarse relativamente de las funciones habituales de este cargo, ante lo cual se ve obligado a colocar en los mandos claves a hombres de su absoluta confianza. (Debe recordarse que el generalato ya le había impuesto un Vicecomandante en Jefe que puede, en los hechos, facilitarle o dificultarle su control del Ejército según le sea personalmente más o menos adicto). De esta forma, la concentración del poder en Pinochet se realiza a través de dos mecanismos: el que le otorga la nueva Constitución, y a través de la línea de mando del Ejército.

La cuarta fase de la represión estaría centralizada en los siguientes frentes: los partidos populares, el sindicalismo clasista (incluyendo las confederaciones campesinas "Ranquil" y "Unidad Obrero Campesina"), el sector estudiantil y docente universitario y la Iglesia Católica.

La represión asume la siguiente dirección hasta ahora observada:

10. Inteligencia política, con la consabida tática de detectar, detener, aniquilar y penetrar. En este último plano se acentuó el rol de la diversión ideológica, consistente en profundizar las desavenencias entre las fuerzas de izquierda, lo que se traduce en la virtual paralización de acciones comunes.

zamora. Los secuestros fueron realizados por el denominado "Comando Vengadores de los Mártires o COVEMA".

(12) El Mercurio 30/7/80.

20. Inteligencia de combate. Se trata de recopilar antecedentes sobre el origen y desarrollo de las organizaciones de contrapoder al fascismo, su fuerza moral, la personalidad de sus líderes y sus relaciones con la población, con el objeto de eliminar a las entidades que se planteen el derrocamiento de la dictadura. Actualmente se preparan fuerzas selectas para el combate con la "extrema izquierda".
30. La represión oculta. Esta es una nueva forma de represión, asumida por comandos terroristas como el COVEMA, "Versus Comunismo", "Asociación de Católicos Anticomunistas", "Frente de Liberación Antimarxista" (FLAMA), etc. Dichas organizaciones realizan acciones terroristas ("trabajo sucio") de las cuales el gobierno formalmente se desentiende.
40. Inteligencia psicológica, a través de la manipulación realizada por los aparatos ideológicos del Estado, los que intentan dar curso a un estado de pasividad forzado de las masas populares. En este sentido deben interpretarse los esfuerzos ideológico-propagandísticos de la dictadura tendientes a mostrar una izquierda sin perspectiva histórica ante un régimen estable que hace uso del principio de autoridad.

En la nueva fase se busca mantener a la izquierda reducida a participar políticamente en los espacios semilegales y clandestinos aislados de las masas populares. En esencia se trata de mantener reguladas las acciones de la izquierda para, en el momento en que éstas traspasen cierto límite, ser liquidada.

Finalmente debe constatar que la represión ya no se justifica tan sólo política ni ideológicamente, sino también jurídicamente, para lo cual el Estado cuenta con una nueva Constitución que santifica la violencia como recurso para salvaguardar los intereses del bloque dominante.

DOS CONCLUSIONES FINALES

1. Los propios órganos de información de la gran burguesía entregan informaciones que las fuerzas revolucionarias deben aglutinar en toda su dimensión:

(13) Según cable de EFE del 4/2/81 "el Ministerio de Defensa chileno está organizando un escuadrón antiterrorista con unos 150 agentes especiales, que empezarán a actuar a partir de abril".

"Obtener y procesar información referida a la seguridad nacional es un problema de índole profesional más que policial, según las cuentas que se sacan en la CNI. Se asegura que un 95 por ciento de la información requerida procede de fuentes abiertas; el cinco por ciento restante hay que buscarlo por procedimientos "especializados", entre los cuales caben las intercepciones de radio, la intercepción de códigos y en casos extremos el espionaje". (14)

Impúdica manifestación de omnipotencia! Sin embargo no basta constatar el hecho; al respecto la izquierda debe llegar a plantear el antídoto que asegure su eficacia política. Para ello es menester:

- a) impedir la entrega gratuita de información al enemigo de clase;
- b) variar las formas de discusión en las cuales se ha constreñido la izquierda (parte de la vieja herencia de discusión parlamentaria, problema especialmente agudo en el exterior).

2. Ante las actuales condiciones de la lucha de clases se transforma en un imperativo generar los mecanismos partidarios que ayuden a salvaguardar la seguridad de la seguridad de la organización. Esto debe ser parte de un proceso que conduzca a que sea el conjunto del Partido el que sea capaz de salvaguardar su integridad orgánica y política. Una tarea de este carácter es naturalmente lenta y progresiva.

(14) El Mercurio 4/11/79.



LA AMENAZA MILITARISTA DEL CONSERVANTISMO DE REAGAN

Alex Schubert

Pareciera ser que con cada elección presidencial, la sociedad norteamericana quedara sometida a una profunda discusión en torno a sus propios valores morales e ideológicos, sobre su papel en el mundo, el significado de sus alianzas políticas y, más que nada, sobre la naturaleza y profundidad de las amenazas que realmente o sólo imaginariamente penden sobre ella.

Durante su campaña electoral, el discurso de Ronald Reagan estuvo caracterizado por el predominio de posiciones conservadoras tradicionales y neoconservadoras. Hacia el final llegaron a primar estas últimas y ello quizás explica la ausencia de tan connotados personajes republicanos en el Gabinete reaganista como William Simon y Henry Kissinger.

Para los neoconservadores norteamericanos, la derrota electoral de Carter ponía término a un período de decadencia del poder de los Estados Unidos. Según ellos, Carter era culpable de los siguientes pecados:

- haber permitido la profundización del proceso de debilitamiento económico de los EE.UU., cobijando la iniciativa privada y descuidando los intereses económicos de los EE.UU. en el exterior;

- haber adormecido a la nación norteamericana frente a los peligros del comunismo, haberla desarmado ideológicamente frente a sus constantes amenazas y haber permitido la propagación de un sentimiento de impotencia frente a la pérdida de poder;
- haber cohibido unilateralmente la mantención y el despliegue del poder militar norteamericano;
- haber atribuido al conflicto "Norte-Sur" una importancia desmesurada, pretendiendo que el conflicto "Este-Oeste" había perdido importancia frente al "Norte-Sur";
- haber orientado la política norteamericana hacia las "fuerzas de cambio" en el Tercer Mundo.

En definitiva, según Norman Podhoretz, editor de la revista neoconservadora "Commentary", Carter "pidió del pueblo norteamericano que reconociera la impotencia de los Estados Unidos y que se sometiera a la inevitabilidad de su decadencia".⁽¹⁾ Con Reagan, en cambio, llegaba un hombre a la presidencia que estaba dispuesto no sólo a frenar tal decadencia sino a reconstituir el "poder Americano".

Los lineamientos ideológicos básicos del programa neoconservador conducente a tal reconstitución es lo que analizaremos en este artículo.

EL NEOLIBERALISMO ECONOMICO DE REAGAN

La ideología del reaganismo es una mezcla de principios doctrinarios neoliberales, neoconservadores, imperialistas y militaristas. La creencia en un "futuro mejor", caracterizado por un predominio global de los "valores americanos", y que sólo puede ser alcanzado superando poderosos enemigos, expresa la vieja creencia imperialista del "Manifest Destiny" del siglo pasado. Pero, a diferencia de la concepción original del "Destino Manifiesto" -según la cual Dios había asignado a los Estados Unidos la misión de evangelizar al mundo con sus supuestos "valores" de libertad, etc.-, el "futuro" de hoy consiste, en cierta medida, en una vuelta al pasado, a aquella situación posterior a la Segunda Guerra Mundial, cuando la hegemonía norteamericana no era discutida ni amenazada seriamente. Ya no se trata tan sólo de establecer un poderío como para imponer universalmente los "valores americanos"; la tarea planteada por el reaganismo consiste, también, en poner término a la erosión de tales valores dentro de la propia sociedad norteamericana.

(1) Norman Podhoretz, "The New American Majority", en Commentary, Vol. 71, No 1, 1981, pág. 24-25.

El reaganismo es, en cuanto a concepción social, una crítica al consenso capitalista establecido durante las últimas décadas en los países desarrollados. Este consenso, según el análisis de J.K. Galbraith, se fundamentaba en la triple convicción siguiente:

- que el Estado debía realizar una conducción económica global, tanto para reducir la inflación y la cesantía al mínimo, como para evitar las crisis coyunturales;
- que el Estado debía proporcionar aquellos servicios que la iniciativa privada normalmente descuida o simplemente no entrega, como vivienda popular, salud, locomoción urbana, etc.;
- que era necesario establecer un compromiso social que protegiera a las personas más débiles y necesitadas.⁽²⁾

El ataque neoconservador -reaganista- contra este consenso tiene su fundamento en la doctrina neoliberal de von Hayek, Friedman y otros, que ha sido sintetizada por Henry Lepage,⁽³⁾ incluyendo toda la amplitud de sus vulgaridades teóricas. Según Lepage, el "capitalismo de mañana" tendrá las siguientes características:

En primer lugar, no habrá un Estado que regule la economía. La política económica habrá muerto casi completamente; lo que subsista de ella será sólo el mínimo requerido para satisfacer demandas muy reducidas; pero para que esto ocurra será necesario educar a la sociedad, enseñándole a pedir cada vez menos intervención estatal en la economía y a darse cuenta que todos los males económicos tienen una causa común: la distorsión del libre funcionamiento del mercado. Los economistas liberales son llamados a aportar a esta campaña educativa demostrando aquella verdad mediante sus trabajos "científicos", y mientras esta verdad se impone, la política estatal debe estar regida por un fuerte principio de austeridad.

En segundo lugar, en el futuro, el capitalismo será (¿nuevamente o no?) el sistema social "más eficiente". Pero los liberales, según Lepage, en vez de fijar las metas de tal eficiencia, deben fijar los procedimientos para lograrla. Hayek es incluso más categórico: los liberales no deben preocuparse si tal eficiencia conlleva desigualdad social o injusticias, pues es precisamente la desigualdad la

(2) John K. Galbraith, "Angriff der Konservativen", en Die Zeit, 27.2.81.

(3) Henry Lepage, Der Kapitalismus von Morgen, Frankfurt, 1979. Las citas siguientes se refieren al último capítulo.

que conduce a la eficiencia, ya que corresponde a la propia esencia humana. El "igualitarismo" es rechazado categóricamente. Por eso, según Lepage, "la afirmación básica de los liberales no es que la sociedad del mañana será de tal o cual forma, sino que la forma de sociedad liberal (es decir, el capitalismo, porque para mí liberalismo y capitalismo son la misma cosa) es aquella que conduce más eficientemente a la sociedad hacia sus objetivos..." (pág. 231).

Esta "eficiencia" no es, sin embargo, sólo de tipo económico, sino que además es concebida como expresión de la optimización de las preferencias individuales de la sociedad. Pero precisamente por haber perdido su contenido puramente económico o "material", las "preferencias" de los individuos sólo pueden ser realizadas dentro de una organización social que a ellos les permite desenvolverse al máximo. Según Lepage, lo que importa no es la libertad colectiva sino la libertad individual. Sólo así será posible que ella dé a sus integrantes el máximo de libertad posible para ejecutar sus decisiones y realizar sus preferencias individuales.

Todo esto requiere -según los neoliberales- "desmistificar" al Estado y desarrollar otro concepto de lo que la sociedad entiende por "bien común". Es necesario que la sociedad comprenda que la "politización del mercado" ha creado obstáculos casi insuperables para el desarrollo económico. El Estado se ha transformado, según ellos, en un instrumento de "explotación" de la sociedad por parte de una casta de burócratas. Por eso, el "Estado benefactor" no es más que una gran estafa. Además, también es necesario desmistificar la creencia de que mediante una política keynesiana se puede asegurar el pleno empleo pues, según afirma Lepage, ha quedado demostrado que tal política sólo genera inflación. Del mismo modo hay que terminar con la opinión de que la educación estatal gratuita es beneficiosa pues, muy por el contrario, ella genera mediocridad e impide realizar el principio de la igualdad de condiciones. La protección del medio ambiente, de la salud, de la seguridad en el trabajo, etc., todo ello debe volver a ser regulado por el mercado, porque promete ser muchísimo más eficiente que el Estado.

Consecuente con esta visión neoliberal y con su contenido "neonacionalista" (que analizaremos más adelante) el programa de gobierno de Reagan parte de los siguientes postulados:

En lo nacional,

- que la inflación ha menoscabado el bienestar y la riqueza creada por los individuos, amenazando la confianza de los norteamericanos en su futuro;
- que Estados Unidos ha perdido su primacía industrial y su capacidad competitiva;

- que el gobierno se ha transformado en un monstruo inepto, fastidioso, intruso y caro;
- que la democracia existente en aquel país sólo produce mediocridad y estancamiento, debido a que cohibe el libre desenvolvimiento de los individuos para someterlos a equivocadas reglamentaciones en supuesto beneficio de las libertades colectivas.



En lo internacional,

- que los aliados, a los que Estados Unidos rescató de las ruinas de la Segunda Guerra Mundial (Europa), hoy desafían el poderío norteamericano;
- que los antiguos enemigos, a los que Estados Unidos hubo de derrotar (Japón), hoy superan a ese país en productividad y comercio;
- que el "poder Americano" es desafiado por las crecientes ambiciones de la Unión Soviética y por su poderío militar;
- que Estados Unidos ha pasado a ser víctima de una interminable extorsión por parte de los países miembros de la OPEC;
- que Estados Unidos se enfrenta a un Tercer Mundo caótico y hostil, más interesado en una confrontación que en una "cooperación" con aquel país.

Las mismas bases de la democracia y del "poder Americano" deben, pues, ser reestructuradas. Esta reestructuración de la democracia se pretende realizar con medidas que conduzcan a la "despolitización" del gobierno (o Estado), a "racionalizar" la economía y a eliminar las restricciones que impiden el libre desenvolvimiento de la "iniciativa privada".

Estas recetas se diferencian notablemente de aquellas del Trilateralismo. Esta, aunque popularizó la concepción sobre la "ingobernabilidad de las democracias", junto a la receta de reducir la participación de los grupos sociales en

las decisiones políticas -reduciendo así paralelamente las crecientes expectativas y demandas con respecto al Estado-, planteó que era necesario aumentar el grado de planificación económica. Según Huntington y otros, frente a la crisis que se vivía, era necesario aumentar la participación del Estado en la acumulación capitalista, si bien junto a ello se hacía imprescindible disminuir la carga social que sobre aquel pesaba. Concordaba con ello el planteamiento de Brzezinski en cuanto a la necesidad de diseñar y dar vida a las "nuevas instituciones" internacionales, que sustituyeran el sistema de Bretton Woods y permitieran "integrar" armoniosamente las élites de los países ricos en materias primas del Tercer Mundo dentro del sistema "trilateral".⁽⁴⁾

La ofensiva conservadora se dirige hacia otra meta. Ella está orientada hacia una drástica disminución de la participación del Estado en el proceso de distribución de la riqueza social. Precisamente, según Milton Friedman, el Estado no distribuye la riqueza, sino la usurpa; no fomenta su creación, sino la cohibe. Y lo hace porque se ha politizado. Debido a esta "politicización", el Estado ha sido sometido a las determinaciones de mayorías, obligando a sus representantes políticos a desviar cada vez más recursos desde fines productivos hacia fines improductivos o el consumo. Por lo tanto, para restablecer el poderío económico de Estados Unidos, junto a una racionalización de la economía es necesario "despolitizar" al Estado.

El primer mecanismo que el gobierno de Reagan ha propuesto para lograr esa meta consiste en una drástica reducción de los gastos sociales del Estado y en una igualmente drástica reducción de los impuestos directos. Además, en la aplicación de una fuerte política antiinflacionaria de corte monetarista.

Según la teoría de la "economía de la oferta", o "supply-side economics" -nombre que se ha dado la concepción de moda en Estados Unidos-, reducir la inflación mediante el control de la cantidad de dinero en circulación puede realizarse en forma paralela a un fomento del crecimiento económico. Con medidas monetaristas se controla el aumento de los precios; con reducciones de impuestos se estimula la actividad económica. Las metas propuestas son, entonces, reducir la tasa de inflación en 1982 a 8,3%, a 7% en 1983 y en 1984 a tan sólo 6% (para los años posteriores se prevén tasas aún inferiores). En cambio, las tasas de crecimiento económico real se desarrollarían de la manera siguiente: 4,2% para 1982, 5% para 1983 y 4,5% en 1984.

⁽⁴⁾ Véase Zbigniew Brzezinski, "Between Two Ages: America's Role in the Technocratic Era, N.Y. 1970; Richard Cooper, Karl Kaiser y M. Kosaka, "Towards a Renovated International System", *The Trilateral Commission*, Triangle Paper 14, 1977.

Para lograr estas metas, el presupuesto fiscal de Reagan para el año 1981/82 establece una reducción global de los gastos fiscales cercana a los 50 mil millones de dólares, alcanzando un volumen total de 654 mil millones. Sin embargo, debido a la simultánea reducción de los impuestos directos cercana al 10% (30% en tres años), el déficit fiscal para 1982 se calcula en 54 mil millones de dólares. Este déficit disminuiría en los años siguientes, para producirse un superávit a partir de 1984. Las empresas y personas de más altos ingresos recibirían, por concepto de menores impuestos, una suma equivalente a 6.400 (1981), 44.200 (1982) y 161.400 millones de dólares (1984), sumas que según la teoría irían a aumentar los ahorros y las inversiones productivas. La reducción del gasto fiscal se logrará cortando totalmente o reduciendo los aportes fiscales a una serie de programas sociales tales como subsidios alimenticios, subsidios de cesantía, subsidios de entrenamiento profesional, préstamos para estudiantes, asistencia médica, etc. Además, se eliminarán varios subsidios fiscales de tipo industrial -como el desarrollo de combustibles sintéticos, los subsidios a ferrocarriles-, estableciendo, paralelamente, la obligación de autofinanciamiento para una serie de instituciones fiscales. En cambio, los gastos militares aumentarán a sumas astronómicas, ascendiendo desde 159 mil millones de dólares en 1981 a 250 mil millones en 1984 y a 336 mil millones en 1986. Consecuentemente, según explica *The Economist* (16 de mayo 1981), "incluso ajustados por concepto de la inflación, los aumentos (de los gastos militares, A.S.) serán ampliamente superiores a los aumentos durante la guerra de Vietnam".

La orientación global del programa económico está clara. Se trata de realizar conjuntamente las siguientes tareas:

- iniciar una distribución regresiva del ingreso, tanto en favor de los individuos de mayores ingresos como de las empresas. Con ello, se dice, aumentarán las inversiones y los ahorros, concentrando el dinero en quienes supuestamente son capaces de orientarlos hacia fines productivos;
- limitar la esfera de acción económica del Estado; hasta 1986, según estas proposiciones, los gastos fiscales no abarcarán más del 19% del Producto Social, en comparación con el 23% del año 1980. Nuevamente el objetivo es "liberar" recursos productivos y entregarlos a disposición directa de las empresas y personas;
- disminuir y limitar la regulación gubernamental de las actividades productivas, tanto en cuanto a reglamentaciones burocráticas como a disposiciones sobre protección del medio ambiente. Se pretende así aliviar la carga que pesa sobre una serie de industrias altamente contaminadoras del medio ambiente y sometidas fuertemente a regulación y supervigilancia estatal;

- limitar la oferta de dinero, para controlar el aumento de los precios;
- aumentar el "poder Americano" mediante el restablecimiento de su primacía militar.⁽⁵⁾

A pesar de su coherencia ideológica, tal como lo ha indicado John K. Galbraith, las contradicciones prácticas de las proposiciones económicas del gobierno de Reagan son evidentes. Reagan "habla de mayores gastos militares, cuestión segura. Y promete impuestos más bajos, que están casi seguros. Y promete disminuir todos los gastos del gobierno federal cortando aquella parte relativamente pequeña... de los gastos civiles. Esto no lo puede hacer - y si a pesar de ello lo hace, se va a hacer muy impopular. Pero si los impuestos bajan y si los gastos se mantienen o aumentan, entonces la política fiscal bajo Reagan será más inflacionaria que en el pasado. Además, la nueva administración propone eliminar los procedimientos bastante primitivos que hoy existen para controlar los precios y los salarios. Ellos no pueden ser tolerados por aquellos sabios que alegan contra cualquier tipo de intervención estatal y que contemplan con adoración religiosa al mercado, aunque éste ya no exista más que en forma degenerada. Por eso, será necesario confiar más que nunca en la política monetaria".⁽⁶⁾

Las proyecciones sobre el monto del déficit fiscal de los próximos años pareciera confirmar los temores de Galbraith. Pero hay, además, otras razones que bien pudieran verificar la opinión de aquellos que creen que el programa de Reagan terminará en un desastre.⁽⁷⁾ Así, por ejemplo, su poner que con la "desregulación" de los precios de la energía podrán solucionarse los problemas del abastecimiento energético de los EE.UU. -y sus repercusiones internacionales- no es más que una fantasía coherente con la mitología neoliberal. Lo más probable es que junto con el renovado empuje inflacionario de tal "desregulación" se modifique la estructura del consumo energético en favor de las capas de mayores ingresos. Pero es muy poco probable que con esta medida la producción interna de petróleo aumente sustancialmente o que las grandes compañías petrolíferas, que durante décadas han determinado la orientación de la política de importación de petróleo, se sienten con los brazos cruzados a

(5) Véase Jim Campen, "Economic Crisis and Conservative Economic Policies: US Capitalism in the 1980's", en *Radical America*, Vol. 15, Nos. 1-2, 1981, pág. 43 y sgts.

(6) *Die Zeit*, 6.3.81.

(7) Entre quienes creen que el programa fiscal de Reagan en vez de frenar, aumentará la inflación, se encuentran Wassily Leontief, Lester Thurow y destacados economistas de Wall Street. Véase *The Economist*, 16.5.81.

ver cómo el "mercado" les echa a perder el negocio. Además, si para combatir la inflación se sigue recurriendo básicamente a la política monetaria, como prevé Galbraith, las altísimas tasas de interés prevalecientes en el mercado financiero norteamericano no sólo terminarán por arruinar una parte sustancial de las actividades económicas nacionales, sino impondrán una recesión económica mundial de enormes proporciones. Esta recesión estará caracterizada por una "guerra de tasas de interés" y una proliferación de medidas proteccionistas. Y por último, si la "desregulación" no conduce pronto a un renovado impulso económico, disminuyendo la cesantía, o si debido al relajamiento de los controles estas tales se vuelven a producir accidentes como el de la planta nuclear de Three Miles Island, etc., es muy difícil que no se repita la experiencia del tatcherismo británico, donde la erosión de su apoyo popular es demasiado evidente.

Si a pesar de estas razones el programa económico de Reagan ha encontrado una mayoría parlamentaria (incluyendo a la oposición demócrata de la Cámara de Representantes), seguramente ello se debe a que dicho programa "o algo muy similar a él fue lo que los votantes demandaron firmemente".⁽⁸⁾ Incluso entre los demócratas pareciera existir la opinión de que si bien no es posible asegurar el éxito del programa, tampoco se puede predecir con seguridad su fracaso. "Sus chances dependen, en buena medida, de la psicología, pero quizás -sólo quizás- tal psicología emerja, gracias a la corriente de opinión que prevalece actualmente en el país". Así, gracias a los neoliberales, el destino de la economía mundial ha quedado sometido a los vaivenes de la psicología norteamericana.⁽⁹⁾

Sin embargo, sería equivocado pensar que el fracaso de tal programa económico implique automáticamente el desmoronamiento del reaganismo como programa político de los Estados Unidos. Podhoretz seguramente apunta hacia lo cierto cuando expresa su convicción de que "mientras exista la impresión de un movimiento hacia el resurgimiento del poder Americano, en un sentido amplio, la nueva mayoría (política del reaganismo, A.S.) seguirá existiendo, aún cuando dentro de los próximos dos o tres años las políticas económicas de Reagan sean menos que plenamente exitosas".⁽¹⁰⁾ Además, el gobierno de Reagan puede perfectamente crear dentro de los Estados Unidos una corriente de opinión pública que culpe a los aliados de no aportar "su" parte a la recuperación nor-

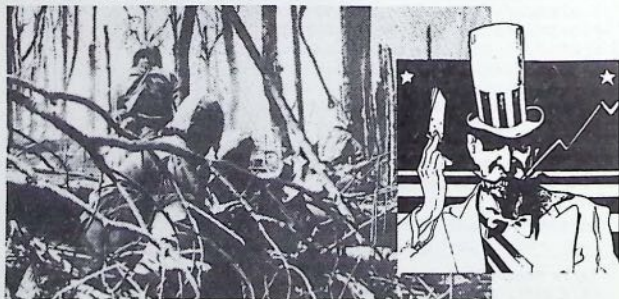
(8) Felix Rohatyn, "A Matter of Psychology", en *New York Review of Books*, 16.4.1981, pág. 14.

(9) *Id.*

(10) N. Podhoretz, "The New...", pág. 26.

teamericana, a la "seguridad" internacional, etc., y extorcionarlos así para que efectivamente "contribuyan". De la misma forma, los EE.UU. pueden exigir que los países del Tercer Mundo financien una buena parte de los costos de la política neoliberal, negándose consecuentemente a satisfacer las múltiples demandas de estos países en el sentido de una reestructuración concertada del actual orden -o desorden- económico internacional. Todo ello posibilitaría que Reagan logre imponer exitosamente un reajuste del actual sistema financiero internacional, garantizando el predominio del dólar y de los intereses norteamericanos, además de la aceptación "voluntaria" u obligada de restricciones comerciales y financieras por parte de las economías capitalistas desarrolladas (como, por ejemplo, las restricciones a las exportaciones de automóviles japoneses hacia los EE.UU.), el estancamiento del diálogo "Norte-Sur", la subordinación de la solución de los problemas energéticos de Europa occidental a los intereses norteamericanos, y, por último, la aceptación de una creciente participación, por parte de sus aliados europeos, en los gastos militares de occidente, en especial en cuanto al financiamiento de la OTAN.

La mera enumeración de estos múltiples problemas económicos internacionales -para cuya solución hasta ahora el gobierno de Reagan no ha presentado ningún proyecto global coherente- muestra que las condiciones de su realización trascienden la economía norteamericana y dependen del éxito del restablecimiento hegemónico global de los Estados Unidos en el mundo. Por eso, para comprenderlo es imprescindible analizar los supuestos internacionales de su realización. Y ellos están contenidos en el complemento internacional de la ideología neoconservadora y neoliberal cual es el "neonacionalismo" norteamericano.



LAS CONCEPCIONES GENERALES DEL "NEONACIONALISMO" NORTEAMERICANO

La meta básica de la política exterior norteamericana, según la concepción del "neonacionalismo", consiste en res-

tablecer el poderio indiscutido de los Estados Unidos en el mundo. Para ello se plantea:

- poner término a la política de distensión (Setente) o "retirada estratégica" (según la nomenclatura neonacionalista) y sustituirla por una nueva versión "moderada" o "global" de la vieja política de contención;
- revertir el proceso de "aislamiento" o "finlandización" de los Estados Unidos en el mundo;
- modificar el equilibrio mundial de fuerzas militares en favor de los Estados Unidos, logrando una ventaja nuclear sobre la URSS;
- ejercer un control militar directo sobre las zonas de "interés vital" de los EE.UU. ubicadas en el Tercer Mundo;
- apoyar todos los regímenes "amigos" de los EE.UU. en el Tercer Mundo, cualquiera sea su naturaleza represiva o autoritaria, a manera de contribuir a su estabilidad y detener el avance del "expansionismo soviético".⁽¹¹⁾

En síntesis, la política exterior de Reagan se basa en el principio que anunciara durante su campaña electoral de establecer la "paz y la seguridad" mediante el "poder".⁽¹²⁾

"Poder: esta palabra se ha transformado en consigna de la Nueva Ortodoxia proclamada por Reagan y sus publicistas", escribe Stanley Hoffman (Universidad de Harvard).⁽¹³⁾ "Revertir la decadencia del poder americano: en esto consiste su contenido esencial. Poder fue lo que Carter no quiso emplear; el poder es lo que la nueva administración debe reconstituir; política de poder, en eso consiste el juego de las naciones. Por eso: debemos comenzar por el poder".

Consecuentemente, para clarificar los "propósitos del poder Americano", los ideólogos reaganistas han propuesto un programa global que define los "intereses vitales" de los Estados Unidos.

En un extremo de estas proposiciones están ideólogos como Norman Podhoretz, Jeane Kirkpatrick, y otros. Según Podhoretz, junto a otras tareas, una de las más importantes a realizar por el gobierno de Reagan consiste en implementar "un programa de rearme que haga invulnerable nuestras defen-

(11) Véase Horst Dippel, "Die aussenpolitischen Vorstellungen der amerikanischen Neokonservativen", en *Europa Archiv*, Folge 17, 1980, pág. 528 y sgts.

(12) Ronald Reagan, "Frieden und Sicherheit für die achtziger Jahre", en *Europa Archiv*, Folge 15, 1980, pág. 467 y sgts.

(13) Hoffman, "The New Orthodoxy", en *New York Review of Books*, 16.4.81, pág. 26.

sas y que nos de el poder tanto para contener al expansionismo soviético como para proteger nuestros intereses vitales en el Golfo Pérsico".⁽¹⁴⁾ Y para ello no sólo será necesario restablecer la superioridad nuclear de los EE.UU. sobre la URSS sino, además, garantizar el acceso norteamericano a las zonas de "interés vital" mediante una presencia militar directa en aquellos lugares. Por eso, concluye Podhoretz, si la consigna "no más Vietnam" significaba cercenar al poder norteamericano, "no más Irán" significará asegurar que los EE.UU. nunca más estarán expuestos a ser empujados indefensamente de uno a otro lado; igualmente, "la liberación de Afganistán" será de que a no ser que "bajo ciertas circunstancias" los EE.UU. intervengan militarmente en los países del Tercer Mundo, "nos encontraremos a merced de nuestros enemigos".⁽¹⁵⁾

Menos extrema pareciera ser otra variante del neonacionalismo. Por ejemplo, Robert Tucker, asesor de Reagan durante la campaña electoral (el que no ha sido designado en ningún cargo oficial del gobierno), si bien coincide con la descripción de Podhoretz sobre el proceso de decadencia del "poder Americano", propone una política diferenciada. Según aquel, los Estados Unidos se enfrentan hoy a una seria disyuntiva en la definición de sus metas de "seguridad".⁽¹⁶⁾ Por un lado, bajo las actuales circunstancias, volver a una "versión expansiva de contención" crearía una grave amenaza de enfrentamiento entre la URSS y los EE.UU. Una política de tal naturaleza "de hecho debe llevar a Moscú el mensaje de que el reloj será atrasado en por lo menos 15 años, que el status de igualdad acordado con la URSS hacia fines de los años sesenta ya sólo tendrá un sentido honorífico y que los EE.UU. no están dispuestos a aceptar a la URSS como potencia global".

Pero, por otro lado, la necesidad de contener el "expansionismo soviético" hace imprescindible disponer de una política adecuada a ello, ante lo cual Tucker propone su política de "contención moderada". Cuáles serían las bases de tal "contención moderada"?

En primer lugar, el reconocimiento de que el equilibrio militar se ha ido modificando en favor de la Unión Soviética

⁽¹⁴⁾ Podhoretz, "The New...", pág. 25.

⁽¹⁵⁾ Podhoretz, *The Present Danger*, New York, 1980, pág. 89.

⁽¹⁶⁾ Robert Tucker, "The Purpose of American Power", en *Foreign Affairs* Vol. 59 Nº 2, 1980, pág. 267. Véase también: Interview with Robert Tucker", en *Saïs Review*, Nº 1, Winter 1981, The John Hopkins University, pág. 83 y sgts.

ca y que el poder occidental se ha deteriorado en zonas básicas de su sobrevivencia, tales como el Golfo árabe-pérsico. En consecuencia, se requiere definir áreas geográficas de interés primario y otras de interés secundario. Entre las primeras se encuentra Europa occidental y los países del Golfo árabe-pérsico. Entre las segundas estarían los países de Centroamérica y otras regiones del mundo.

Para restablecer la "seguridad" en aquellas zonas de "interés primario", según Tucker, hoy es imprescindible reanudar un programa de rearme. "En las dos áreas más críticas de preocupación para los EE.UU.; los medios necesarios... son del tipo militar" (pág. 25). Pues, "mientras en Europa los propósitos del poder Americano consisten tanto en disuadir como repeler una agresión armada soviética, en el Golfo Pérsico el propósito es asegurar el acceso a las fuentes petrolíferas de aquella región" (pág. 253).

Sin embargo, según el mismo Tucker, entre Europa y el Golfo árabe-pérsico hay una diferencia fundamental, porque el "enemigo" en Europa es claramente identificable (la URSS), en cambio, en el Golfo no lo es. Allí, en los países del Golfo se encuentra la llave de la seguridad de todo el mundo capitalista. Si la Unión Soviética se "apoderara" de las fuentes de petróleo árabes y persas, la economía europea quedaría paralizada de golpe. "... la pérdida del acceso al Golfo por parte del Occidente equivaldría a poco menos que un golpe mortal contra la estructura global de intereses americanos establecida con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial" (pág. 249). Pero debido a que las amenazas contra el "acceso" occidental al petróleo del Golfo pueden provenir del propio desarrollo interno de los países respectivos, teniendo la URSS una participación sólo "periférica", Tucker concluye en la necesidad de resolver tanto un "dilema político" como un "dilema estratégico". El primero consiste en tener y expresar la voluntad de mantener la "seguridad" de la zona y manifestarla con una presencia militar convencional adecuada, tanto de fuerzas terrestres como marítimas y aéreas. El "dilema estratégico" a resolver consistiría, entonces, en repeler mediante la guerra nuclear cualquier intento soviético por apoderarse de la zona. Sea como sea, según Tucker y con él muchos otros, tanto los problemas "políticos" como los "estratégicos" sólo podrán ser resueltos con un gigantesco programa de rearme convencional y nuclear.⁽¹⁷⁾

Si a pesar de todo, las proposiciones de la política de "contención moderada" resultan tener una apariencia más realista que las de la "contención global", ello radica en que la primera considera que el orden interno de los Estados sólo plantea una amenaza limitada a la seguridad de los Esta-

⁽¹⁷⁾ Véase p.ej. Paul H. Nitze, "Strategy in the Decade of the 1980s", en *Foreign Affairs*, Vol. 59, Nº 1, 1980, pág. 95.

dos Unidos. El neonacionalismo de Podhoretz considera enemigo a cualquier país "comunista". En cambio, los "moderados" aceptan como legítimas las supuestas aspiraciones globales de la URSS y por eso aceptan que determinados países pueden tener buenas relaciones con ella sin representar automáticamente un peligro para los Estados Unidos. Además, también creen en la existencia de un amplio margen para la cooperación entre ambas superpotencias. La proposición moderada "sugiere mucho más competencia que cooperación", escribe Tucker. Pero en la propia "competencia" implícitamente se acepta que no todos los conflictos en el mundo son expresiones de la rivalidad Este-Oeste, sino que son entendidos como el campo donde tal competencia se realiza. Se acepta así que los EE.UU. tendrán que "reconciliarse con la perspectiva de un mundo en el cual una gran y quizás creciente parte de él, no perteneciente a las democracias industriales, se resista a aceptar la influencia Americana" (pág. 265).

A pesar de su "realismo", la política de "contención moderada" no es menos intervencionista y militarista que cualquier otra que pretenda tomar los intereses vitales o no de los EE.UU. como última instancia determinante de la paz o la guerra. Si intervenir en Centroamérica depende tan sólo de la definición de los intereses norteamericanos amenazados, ya sea como "primarios" o "secundarios", todos los países siempre quedarán expuestos a la amenaza de intervención. Basta sólo que las protestas sociales adquieran un determinado grado de rebeldía, para que la calificación cambie y la amenaza se concrete. "La definición de nuestros intereses de seguridad no es evidente por sí misma", escribe acertadamente Hoffman. "No toda posición en el mundo es defendible, y no todas valen la pena ser defendidas contra todo tipo de amenaza potencial. Por ejemplo, la Nueva Ortodoxia no esclarece si se ha de resistir tan sólo la expansión del poder militar soviético (o cubano o vietnamita). O es que debemos resistir el establecimiento de regímenes que entran en una relación con la URSS similar a la de Cuba? O debemos resistir al establecimiento de cualquier régimen apoyado por Moscú y Cuba? Tucker adopta la posición intermedia, pero es una posición difícil: cómo saber de antemano?" (18)

El problema con el neonacionalismo norteamericano no sólo radica en que es imposible saber de antemano qué entienden Reagan, Weinberger, Haig y otros por intereses vitales "primarios" y "secundarios", y en saber cuáles serán verdaderamente las diferencias prácticas de tal diferenciación abstracta. Más allá, la concepción fundamentalmente bipolar del actual acontecer mundial, con el "Occidente" a un lado y con

el "Oriente" al otro, amenaza con otorgar a todos los conflictos internacionales un carácter eminentemente militar.

Debe tenerse en cuenta aquí lo que Stanley Hoffman ha llamado la "crisis de complejidad" y la "crisis de posibilidades" de los Estados Unidos. Fuera del aumento de la presión interna sobre el Estado y la sociedad norteamericana en su conjunto, provocado por un creciente acceso organizado a las determinaciones políticas por parte de los diferentes grupos sociales, y por el fracaso de las reformas dirigidas a contener tal presión, deben agregarse los profundos cambios acaecidos en el mundo con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial. Uno de los más significativos de estos es la poderosa emergencia de los países del Tercer Mundo en la escena política internacional, cuya importancia es tal que el propio neonacionalismo norteamericano pareciera postular que "sin descuidar Europa" es precisamente aquí donde debe ser frenado el "expansionismo soviético". Sin embargo, los países del Tercer Mundo no son homogéneos internamente, ni sus aspiraciones internacionales necesariamente coinciden. Incluso entre ellos existen profundas contradicciones, que no sólo son un legado del colonialismo sino que tienen una raíz histórica o religiosa más profunda. La deplorable y lamentable guerra entre Irán e Irak lo confirma. Pero a pesar de ello, existen aspiraciones y demandas comunes del Tercer Mundo frente al mundo industrializado y de la propia población frente a la estructura social y política que existe en cada uno de los países.

En un mundo más complejo, las posibilidades de conducción del desarrollo internacional son menores -a no ser que exista una convicción conjunta de que los problemas deben ser resueltos armónicamente, creándose las instituciones correspondientes. Para el neonacionalismo norteamericano, sin embargo, no existe tal conclusión. De la misma manera en que todos los problemas internos de los Estados Unidos han de ser resueltos mediante la "liberación" del "mercado", los problemas internacionales han de ser resueltos mediante el "poder Americano", expresado por su poderío militar. En vez de profundizar en el desarrollo de los mecanismos políticos, diplomáticos e ideológicos, se pretende subordinar los registros de acción internacional a la mera acción o amenaza militar.

No hay nada más categórico, como ejemplo, que la concepción del neonacionalismo sobre las demandas del Tercer Mundo planteadas dentro del diálogo "Norte-Sur". Según Podhoretz, "en todos los conflictos con el 'Sur', los EE.UU. siempre han debido estar atentos a la posibilidad de confrontación con el poder militar del 'Este', pues a pesar de su proclamación como neutral, para todos los efectos políticos una buena parte del 'Sur' está al lado del 'Este' y en contra del Oeste". Así se habría comprobado en la Conferencia de los Países No Alineados en La Habana (1979). Además,

(18) Hoffman, "The New Orthodoxy", págs. 26-27.

el objetivo final de todas las actividades de la Unión Soviética en el Tercer Mundo consistiría en la "extensión del control del 'Este' sobre aquella parte del 'Sur' ubicada en el Golfo Pérsico, para así ganar el predominio político sobre el 'Occidente'".⁽¹⁹⁾

La pluralidad de origen de los conflictos en el mundo queda reducida así a la expresión del "expansionismo soviético", sus posibilidades de solución y manejo reducidas a la amenaza o intervención militar. Se ve, entonces, la coincidencia y complementación entre la ideología neoliberal y neo conservadora y el neonacionalismo. A la "dictadura del mercado"⁽²⁰⁾ que se pretende establecer en el interior de los Estados Unidos corresponde, en el plano internacional, la dictadura de las armas norteamericanas.

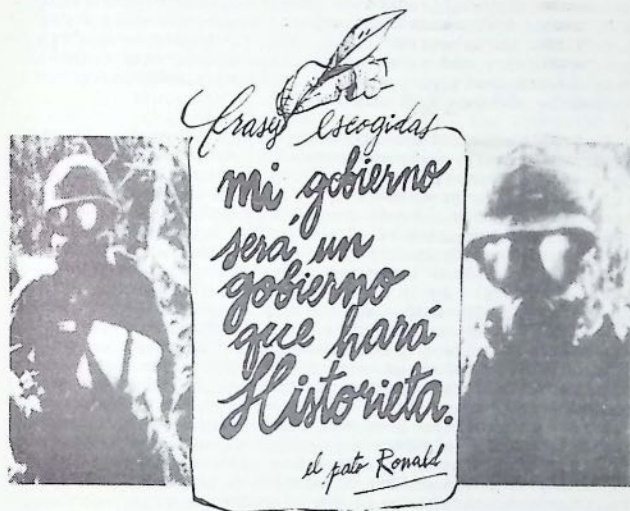
Hoy nos enfrentamos con un "consenso neonacionalista" que -sólido o no- amenaza con la intervención militar norteamericana en cualquier parte del Tercer Mundo y con la guerra nuclear para el caso que estas intervenciones no tengan el efecto deseado. El juego de "pensar lo impensable", de hacer cálculos estratégicos sobre la 1 1/2, 2 ó 2 1/2 guerras nucleares, obviamente ya no tiene nada que ver con una intención disuasiva. Lo que el neonacionalismo norteamericano pretende hacer es iniciar una guerra ofensiva en el Tercer Mundo, para demostrarle a la Unión Soviética que no está dispuesto a ceder y que si es necesario pedirá la guerra nuclear. Se pretende demostrar en la práctica, como lo decía Reagan hace poco en la Universidad de Soth Bend (Indiana), que actualmente se escriben las últimas páginas de aquel "comunismo, que ya ni siquiera intentaremos criticar, sino al que simplemente consideraremos como triste y grotesco capítulo de la historia de la humanidad".⁽²¹⁾

Sin embargo, lo más probable es que no sea el "comunismo", sino el reaganismo el que pase a la historia como otra caricatura más de un gigante imperialista en decadencia, cuyo último recurso ha quedado reducido a dar manotazos militaristas en el mundo entero. Pero en su enfrentamiento con este gigante, los pueblos que luchan por su libertad y por condiciones humanas de vida habrán de pagar todavía un precio muy alto.

(19) N. Podhoretz, "The Present...", pág. 52 sgte.

(20) Véase Denis Clerc, "Ordre Social et dictature du marché", en Le Mon de Diplomatie, mayo 1981.

(21) Véase Frankfurter Rundschau, 18.5.81.



EL NEONACIONALISMO NORTEAMERICANO Y AMERICA LATINA

Durante el gobierno de Carter, sus críticos no se cansaron de llamar la atención sobre las "inconsistencias" e "incoherencias" de su política exterior que no hay duda realmente existieron. A los pocos meses del gobierno de Reagan, por lo menos en cuanto a América Latina se sabía cómo habrían de ser superadas tales inconsistencias. De ahora en adelante toda la política exterior norteamericana tendría una meta clara: combatir el avance del comunismo. Jeane Kirkpatrick -actual embajadora de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas- se encargaría de dar a conocer los lineamientos de tan audaz y novedosa política.

Según Kirkpatrick,⁽²²⁾ el más grave error de Carter, en cuanto a América Latina, radicó en no haber sido capaz de "enfrentarse a los problemas de la expansión soviético/cubana en el área", sino, por el contrario, haber "contribuido positivamente" a aumentarlos, induciendo "una enajenación de las naciones más importantes, un crecimiento del neutralis-

(22) Jeane Kirkpatrick, "U.S. Security and Latin America", en Commentary, Vol. 71, N° 1, enero 1981. Véase también su artículo "Dictatorships and Double Standards", Commentary, noviembre 1979.

mo, una desestabilización de gobiernos amigos, una ampliación de la influencia cubana y un decaimiento del poder de los EE.UU. en la región" (pág. 29). Por lo tanto, "una de las primeras y más urgentes medidas de la administración Reagan será analizar y revisar el trato a América Latina y el Caribe por parte de los EE.UU."

Cuáles serían los parámetros de este nuevo "trato"? En primer lugar, según Kirkpatrick, debía partirse de una revisión completa y global no sólo de la política de Carter, sino también de la filosofía del "establishment" del Departamento de Estado. Sería necesario diseñar una "nueva filosofía", que comprendiera el profundo error de aquellos que (como Linowitz y otros) supuestamente planteaban que los Estados Unidos debían abandonar su presunción hegemónica en América Latina. Según Kirkpatrick, los EE.UU. debían separarse de aquella equivocada actitud que veía con desagrado la existencia de una política de "relaciones especiales" hacia América Latina y que criticaba que ésta fuera considerada una "esfera de intereses" de los EE.UU. Toda esta visión "revisiónista", que falsamente creía que los EE.UU. estaban al "lado equivocado de la historia", que exigía llegar a un acuerdo sobre el Canal de Panamá, que demandaba normalizar las relaciones con Cuba, que pedía la liberalización del comercio internacional -es decir, un trato justo para las mercancías provenientes de los países del Tercer Mundo- y la internacionalización de la ayuda económica, que pretendía promover la vigencia de los derechos humanos, que rechazaba categóricamente cualquier intervención militar directa de los EE.UU. y que, por lo tanto, exigía que EE.UU. se pusiera al lado de las "fuerzas del cambio" - toda esta concepción debía ser superada en los EE.UU., si este país pretendía reconstituir otra vez su poder en América Latina (pág. 30).

En su reemplazo, la nueva política reaganista hacia América Latina, según Kirkpatrick, requería de lo siguiente:

- "pensar en forma más realista acerca de la política latinoamericana, acerca de las alternativas frente a los gobiernos existentes y acerca del monto y el tipo de ayuda y el tiempo que se requeriría para mejorar las vidas y ampliar las libertades de las personas del área",
- "evaluar en forma más realista el impacto de las diferentes alternativas sobre la seguridad de los EE.UU. y sobre la seguridad y autonomía de las otras naciones del hemisferio",
- "abandonar el trato (approach) globalista, que niega las realidades culturales, de carácter, geografía, economía y de la historia" (pág. 40).

Con este nuevo realismo, al gobierno norteamericano en adelante le sería posible diferenciar entre regímenes "auto

ritarios" y regímenes "totalitarios". Los primeros son -según Kirkpatrick- aquellos gobernados por un "autócrata", apoyado por un ejército privado, que más que a la idea abstracta del Estado le obedece a él o su familia. Este autócrata tolera una oposición limitada, pero cuando es amenazado por una oposición radical, recurre a la ley marcial. Además el autócrata se apodera de una gran parte de los recursos del Estado para enriquecerse personalmente y no realiza intento alguno por modificar la distribución del ingreso o riqueza del país. Sin embargo, el autócrata permite que las sociedades se "modernicen", en un proceso de evolución, porque el propio dinamismo del crecimiento económico va integrando cada vez más personas en el sector "modernizante", mientras las demás mantienen su ritmo de vida dentro de las acostumbradas relaciones familiares o personales.

Así, por ejemplo, las naciones de Centroamérica son del tipo "autoritario". "Exceptuando México, las naciones de Centroamérica son bastante pequeñas y bastante pobres en comparación al standard norteamericano. Entre ellas existen diferencias económicas y sociales significativas". Pero a pesar de ello, todas pertenecen al grupo de naciones "modernizantes", pues si bien existe pobreza, analfabetismo, desnutrición y malas condiciones habitacionales, también existe progreso económico. La población no vive descontenta porque se desenvuelve en relaciones cotidianas sin "disturbios del ritmo de intercambio habitual entre trabajo y ocio" (23).

Como puede apreciarse, el "realismo" de Kirkpatrick a la nueva filosofía reaganista se fundamenta, como escribe acertadamente Farer, en un alto grado de "excentricismo" y en un "casi demencial recuento de las realidades políticas de América Latina" (24). No puede extrañar entonces la descripción de los regímenes "totalitarios", que no permiten "evolución" alguna, donde toda la sociedad queda sometida a un Estado controlado por un partido político, que toma todas las decisiones en una reducida cúpula, inaccesible al control social. El régimen de Pinochet queda así reducido a la apacible categoría de "autoritario"; y la triunfante revolución Sandinista constituida en una siniestra dictadura "totalitaria". Con este "realismo", Kirkpatrick se ubica al lado de "aquellos dogmáticos que le asignan la categoría de 'meramente autoritarios' a todos los gobernantes partidarios del capitalismo y que tratan de liquidar a los izquierdistas al mismo tiempo que ponen a todo gobierno y movimiento revolucionario en el más oscuro rincón del totalitarismo" (25).

(23) Kirkpatrick, "Dictatorships and...".

(24) Tom Farer, "Reagan's Latin America", en *New York Review of Books*, 19 de marzo de 1981, pág. 10.

(25) Farer, "Reagan's...", pág. 10.

A la caricatura de los regímenes "autoritarios" se agrega otra. Se trata del análisis que Kirkpatrick hace de la política de Carter hacia América Latina. En esencia, se plantea que la débil respuesta del "establishment" norteamericano a las amenazas contra el "poder Americano" se debió a que se hubiera intentado poner a los Estados Unidos al lado de las "fuerzas del cambio". La política de derechos humanos habría sido "la palanca para echar a andar los cambios".⁽²⁶⁾ Por eso, en Nicaragua, donde bajo Somoza existía "el régimen político más estable" (pág. 33), "un pequeño grupo de terroristas apoyados por Cuba" fue capaz de apoderarse del poder. Porque si bien era "estable", el régimen de Somoza, como muchos otros regímenes "autoritarios", era "débil", y no podía enfrentarse con el poderío soviético/cubano a menos que contara con un apoyo norteamericano equivalente. Al negar tal apoyo, Carter, según Kirkpatrick, debilitó "activamente" a Somoza, ejerciendo "presiones afirmativas" y transformándose en cómplice del avance comunista en América Latina.

Así, lo que en realidad fue una política de poder imperialista, que pretendió (sin éxito) dar cauce a las presiones sociales y evitar que condujeran a un cambio social radical, para Kirkpatrick y la Nueva Ortodoxia conservadora aparece como acto deliberado de traición a los principios de la seguridad de los Estados Unidos. A los neonacionalistas no les importa recurrir en este contexto a falsificaciones históricas, afirmando que Somoza fue "desarmado". El propio Farer explica: "Antes de la última vuelta del conflicto nicaragüense, la Guardia Nacional de Somoza estaba rebalsada por armas proporcionadas por Argentina e Israel".⁽²⁷⁾ El problema entonces no era la cantidad de armas sino el hecho que las estructuras represivas de la dictadura somocista no soportaron la presión social del pueblo. Sólo debido a esta presión, a la fuerza moral y a la apelación humanitaria de los sandinistas, en una última etapa los revolucionarios lograron una superioridad militar. Por eso, para salvar a Somoza los EE.UU. debían intervenir directamente con sus fuerzas militares en Nicaragua, no apoyando sino sustituyendo a la Guardia Nacional. "Armar" a Somoza significaba hacer la guerra por él. Y no faltaron intentos norteamericanos por hacerlo.

Lo que en el caso de Nicaragua es historia pasada, el El Salvador es historia presente. Para entender el origen de la presión social que allí se expresa hoy en una rebelión armada del pueblo, al margen de las caricaturas y excentricidades de Kirkpatrick, se puede recurrir a los análisis de

(26) Kirkpatrick, "U.S. Security...", pág. 32.

(27) Farer, "Reagan's...", pág. 10.

personas totalmente a salvo de infecciones "izquierdistas" o "comunistas". Así, en su informe publicado en *Foreign Affairs*, W. LeoGrande y C.A. Robbins consideran que "El Salvador presenta la más rígida estructura de clase y la peor desigualdad de ingreso de toda América Latina."⁽²⁸⁾ Según los mismos autores, durante décadas el objetivo político principal de la oligarquía salvadoreña ha consistido en "evitar que el conflicto latente erupcione y se transforme en guerra de clase", utilizando para ello las Fuerzas Armadas. Estas han gobernado el país desde 1931 y han cerrado sistemáticamente las puertas de una más amplia participación de las masas en la vida política del país. Se ha llegado así a una situación caracterizada por la existencia de un gobierno "autoritario" sin autoridad alguna, amenazado por la propia oligarquía, que no confía en él, rechazado por la población que se da cuenta de su total impotencia e incapacidad para alterar el sistema de dominación oligárquico, y cuya única base de subsistencia lo constituye el apoyo político y militar de los Estados Unidos.

Por este motivo, en un documento mucho menos sospechoso aún que el análisis de LeoGrande y Robbins, un grupo de funcionarios del Departamento de Estado norteamericano, presentando una posición de "minoría", aseguraban que toda política de intervención militar de los EE.UU. en El Salvador "cuyas bases fueron creadas, como allí se relata, durante el gobierno de Carter", necesariamente debía conducir a un enfrentamiento internacional de vastas proyecciones, por que simplemente no era el instrumento adecuado para contener la creciente presión social del pueblo salvadoreño.⁽²⁹⁾

Sin embargo, una de las primeras medidas del gobierno de Reagan fue anunciar el incremento del apoyo militar a la Junta salvadoreña y el envío de "asesores militares", expertos en lucha antisubversiva. (Según informaciones oficiales, ya hay más de cien de tales "asesores" en El Salvador). Simultáneamente, las amenazas contra Cuba y Nicaragua, a las que se culpaba de abastecer con armas a los rebeldes salvadoreños, eran aumentadas a un tal nivel de hacer inminente una invasión militar a ambos países apoyada por Estados Unidos. Se sacaba así la conclusión práctica del análisis de Kirkpatrick, según la cual, "en el largo plazo, lo más probable es que El Salvador caiga en manos de una coalición de revolucionarios entrenados, armados y asesorados por Cuba y otros. El ciclo de terror está muy avanzado. Al negarle el

(28) William LeoGrande y Carla Anne Robbins, "Oligarchs and Officers: The Crisis in El Salvador", en *Foreign Affairs*, Vol. 58, N° 1980, pág. 1085.

(29) Véase el documento publicado por alrededor de 30 funcionarios del Departamento de Estado y del Consejo Nacional de Seguridad de los Estados Unidos en noviembre de 1980.

apoyo en armas y experiencia para repeler aquella insurgencia muy bien equipada, el gobierno de Carter minó la capacidad de la Junta y fortaleció la creencia de los insurgentes en su victoria final".⁽³⁰⁾

Los acontecimientos recientes demuestran que el gobierno de Reagan no posee otra receta para enfrentar la rebelión en El Salvador más que una creciente participación directa en los conflictos armados. Incluso, los llamados a la negociación propuesta por personeros de la Internacional Socialista han sido recibidos con abierto rechazo y no disimulado malestar en los círculos reaganistas. Así, la contención del "expansionismo soviético/cubano" ha quedado reducida a su última expresión "neonacionalista": la intervención militar directa en el Tercer Mundo.

Pero no sólo en América Latina se puede predecir el aumento de la presencia militar norteamericana y el incondicional respaldo del gobierno de Reagan a los regímenes "autoritarios", supuestamente modernizantes. En Asia, como hemos visto, el problema se plantea en forma similar. Y no hay motivo alguno para suponer que la política de apoyo "semilandestino" a Jonas Savimbi en Angola, de abierto apoyo al régimen racista de Sudafrica, de equipamiento militar en Marruecos contra el Polisario, de ampliación de las bases navales en la zona del Océano Índico, etc., ya iniciada velozmente bajo Carter, pudieran ser modificadas de otra forma que no sea impulsándola.⁽³¹⁾

Así, en su afán de impedir la consolidación de regímenes "totalitarios", el neonacionalismo reaganista consolidará y diseminará "donde pueda" regímenes "autoritarios" por el mundo entero, que no tendrán otro apoyo que el de la fuerza militar de los EE.UU. Donde no logre su objetivo, lo más probable es que trate de revertir el acontecer mundial mediante su presencia militar directa. Y como último recurso amenaza con la guerra nuclear. No hay duda: con un gobierno como el de Reagan las perspectivas de la paz mundial no son precisamente las mejores.

⁽³⁰⁾ Kirkpatrick, "U.S. Security...", pág. 39.

⁽³¹⁾ Véase Diana Johnstone, "Una nueva estrategia imperial", en Le Monde Diplomatique, en español, diciembre 1980.



CARTAS



REPRODUCCIONES

... No podemos alegrarnos por la caída de compañeros en el interior del país. Pero -como se sugiere en el artículo del N° 5 de CUADERNOS- tal desgracia es una prueba elocuente de que el PS "vive y lucha" en Chile (y también de que se debe elevar la seguridad del Partido). ¡No sería posible hacer circular en el exterior más ejemplares de UNIDAD Y LUCHA y las otras publicaciones que edita el Partido en el interior, lo que es también importante testimonio de nuestra vitalidad en la lucha?

G. Rojas
Bulgaria

Es cierto lo primero, pero nuestra divisa es que los "costos" de la lucha sean los menores posibles.

Respecto a las publicaciones del interior, no podemos reimprimirlas todas afuera y su número no alcanza a todos los interesados, lo que debe incitar a nuevas reproducciones en los países. En este número publicamos un artículo de la revista ARAUCO, que se edita en Chile, y seguiremos seleccionando materiales de interés para la militancia del exterior.

SOBRE HISTORIA DEL PS

Felicitaciones por la revista N° 6 dedicada a la historia de nuestro Partido. En el exilio, con nuestros hijos educados en otras sociedades y cultura, necesitamos reforzar sus vínculos con nuestra historia y tradición de lucha. Les pedimos que incluyan más a menudo enfoques sobre la historia del PS, para fortalecer la educación política de nuestra juventud y darnos a conocer frente a otras organizaciones. Sigamos adelante con los CUADERNOS DE ORIENTACION SOCIALISTA. Un año de vida es alentador y un desafío.

F.B.
Barcelona, España

Estamos creando un área dedicada a la investigación histórica de nuestro país -en especial del movimiento obrero y popular-, lo que nos permitirá regularizar la producción teórica sobre aspectos de la historia de nuestro pueblo y del Partido. Gracias por su estímulo.



CUADERNOS

DE ORIENTACION SOCIALISTA

E. Corbalán
PF 2904
D-1000 Berlin West 30

PRECIO DE LA SUSCRIPCION
por 12 números - despacho aéreo

AMERICAS	U\$ 30
EUROPA	U\$ 20

SUSCRIPCION

NOMBRE _____

DIRECCION _____

Ciudad _____ País _____

ADJUNTO CHEQUE ☐ GIRO ☐

por valor de _____

